



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA
UNAN-MANAGUA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS JURIDICAS
DEPARTAMENTO DE DERECHO
RECINTO UNIVERSITARIO RUBEN DARIO**



**"INFORME FINAL DE SEMINARIO DE GRADUACION DE DERECHO DE
FAMILIA PARA OPTAR AL TITULO DE LICENCIADO EN DERECHO".**

TEMA: PROYECTO DE CÓDIGO DE FAMILIA DE NICARAGUA

**SUBTEMA: ESTUDIO COMPARATIVO DEL PROYECTO DE CÓDIGO DE
FAMILIA EN SU LIBRO CUARTO, TÍTULO I, CAPÍTULOS I, II, III Y IV Y LA
LEY NO 143 "LEY ESPECIAL DE ALIMENTOS" Y LOS CONVENIOS
ALIMENTICIOS HECHOS EN LA HAYA EN 1973.**

AUTORES:

**JARQUIN SUAREZ JOSE DANILO
ORTEGA RUIZ GLENDA VANESSA**

**TUTOR: LIC. GABIDIA LIBERTAD LOPEZ MORALES
MANAGUA, 25 DE ENERO DEL 2014.**



INDICE.

TEMA Y SUBTEMA	3
DEDICATORIA	4
DEDICATORIA	5
AGRADECIMIENTO.....	6
RESUMEN.....	7
INTRODUCCIÓN	10
JUSTIFICACIÓN	13
OBJETIVOS	14
GENERAL	
ESPECÍFICOS	
DESARROLLO	
CAPÍTULO I	15
ANTECEDENTES DE LA CODIFICACIÓN CIVIL EN NICARAGUA	
CAPÍTULO II.....	41
NATURALEZA DE LA OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTO	
CAPÍTULO III	53
CARACTERÍSTICAS DE LA OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS	
CAPÍTULO IV.....	58
REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE LA OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTO EN EL EXTRANJERO	
Capítulo V.....	75
PROCEDIMIENTO PARA LA DEMANDA DE ALIMENTOS EN EL EXTRANJERO.	



Capítulo VI.....	114
PRINCIPALES CAMBIOS EN LOS ELEMENTOS NORMATIVOS DE LA OBLIGACIÓN DE DAR	
ALIMENTO	
CONCLUSIONES	129
RECOMENDACIONES	131
BIBLIOGRAFÍA	134
ANEXOS.....	137



TEMA:

PROYECTO DE CÓDIGO DE FAMILIA DE NICARAGUA.

SUBTEMA:

ESTUDIO COMPARATIVO DEL PROYECTO DE CÓDIGO DE FAMILIA EN SU
LIBRO CUARTO, TÍTULO I, CAPÍTULOS I, II, III Y IV , Y LA LEY NO 143 "LEY
ESPECIAL DE ALIMENTOS" Y LOS CONVENIOS ALIMENTICIOS HECHOS EN
LA HAYA EN 1973.



DEDICATORIA

A Dios, *Por haberme permitido llegar hasta este punto, por darme la oportunidad de vivir y por estar conmigo en cada paso que doy, por fortalecer mi corazón e iluminar mi mente y por haber puesto en mi camino a aquellas personas que han sido mi soporte y compañía durante todo el periodo de estudio y haberme dado salud para lograr mis objetivos, además de su infinita bondad y amor.*

A mi padre Danilo, *Por los ejemplos de perseverancia y constancia que lo caracteriza y que me ha infundado siempre el ejemplo, por el valor mostrado para salir adelante y por tu amor. Papá gracias por darme una carrera para mi futuro, todo esto te lo debo a ti.*

A mi madre Josefa, *por haberme apoyado en todo momento, por sus consejos, sus valores, por la motivación constante que me ha permitido ser una persona de bien, pero más que nada, por su amor.*

A mi familia, a mi esposa, **Pavlova**, *por tu paciencia y comprensión, preferiste sacrificar tu tiempo para que yo pudiera cumplir con el mío. Por tu bondad y sacrificio me inspiraste a ser mejor, ahora puedo decir que esta tesis lleva mucho de tí, gracias por estar siempre a mi lado, a mis dos hijos Benjamín y CHARlize, por creer en mis sueños y acompañarme en ellos.*

A mis hermanos y sobrina, Rosa, Massiel, José Antonio; a mi sobrina Nazaret y a todos aquellos que participaron directa o indirectamente en la elaboración de esta tesis.

Finalmente a los maestros, aquellos que marcaron cada etapa de mi camino universitario, y que me ayudaron en asesorías y dudas presentadas en la elaboración de la tesis.

¡Gracias a ustedes!

José Danilo Jarquin Suarez.



DEDICATORIA

A Dios, Por haberme dado la vida tan fructífera que tengo, por haberme dejado culminar mis estudios y por las experiencias vividas, de las cuales aprendí a valorar el apoyo y la enseñanza de cada una de las personas que han estado conmigo estos años.

*A mi padre **Fernando Ortega**, porque de él aprendí el valor del esfuerzo constante, la honradez y la dedicación al trabajo, levantarme cada día sin poner peros a la labor que debo realizar.*

*A mi madre **Mirna Ruiz**, por haberme apoyado en todo momento, por sus consejos, y por la fortaleza que me inspira de ella, es la roca fuerte que me hizo levantarme todos estos años a pesar de los tropiezos que se me presentaron durante mi carrera universitaria.*

*A mi esposo, **Luis Mariano**, por haberme apoyado desde que lo conocí, por estar conmigo en los momentos de triunfo y fracaso, por haberme enseñado con amor que no debía entristecerme por las puertas que se cerraron si no alegrarme porque una mejor oportunidad vendría.*

A mis hermanas, Ingrid y Belén, por ser mis abrazos y mi comprensión cuando todo me salía mal, ahí estaban ellas conmigo para secar mis lágrimas y hacerme sonreír.

A mis Amigas, por ser mis cómplices en todo momento, por no dejarme sola cuando las necesito, por hacerme reír y sentir que vale la pena tenerlas a mi lado son mis angelitos de la guarda.

*A mi maestra **Gabidia López**, porque en ella encontré más que una maestra una amistad sincera dispuesta a apoyarme y siento que Dios la puso en mi camino.
¡Gracias a ustedes!*

Glenda Vanessa Ortega Ruiz



AGRADECIMIENTO

La presente investigación es un esfuerzo por culminar nuestro proceso de formación profesional, en el cual recibimos el apoyo de personas muy importantes para nosotros.

A Dios, le damos infinitamente gracias por habernos dado fuerza y valor para culminar esta etapa de nuestra vida, por acompañarme todos los días.

A nuestros padres por la confianza y el apoyo brindado, que sin duda alguna en el trayecto de nuestra vida nos han demostrado su amor, corrigiendo nuestras faltas y celebrando nuestros triunfos y sé que están orgullosos de la persona en la cual me he convertido.

*Finalmente a los docentes de la escuela de derecho que durante nuestra formación académica y por cada una de sus valiosas aportaciones hicieron posible este Proyecto y en especial a nuestra tutora **Gabidia Libertad López Morales**, por la gran calidad humana que nos ha demostrado con su amistad.*



RESUMEN

En la actualidad nuestro país se encuentra bajo la influencia de un sistema escrito lo cual ha provocado retrasos en la administración de justicia generando discrepancia con la dinámica con la que nuestra sociedad avanza. En respuesta a esta dificultad procedimental la Asamblea Nacional creo, el Proyecto de Código de Familia con el que se pretende un cambio sustancial, en cuanto al cambio de un sistema escrito a un sistema oral y común.

La oralidad es un cambio necesario en el procedimiento de familia, por que promoverá celeridad, inmediación, Impulso procesal de oficio, concentración de los actos procesales, el interés superior de la niña, niño y adolescente y concentración procesal en función de generar una actividad procesal en beneficio de las partes.

Estas transformaciones contenidas en el Proyecto del Código de familia, marcan un estudio sistemático y pormenorizado, para una mayor comprensión de estos cambios y en específico lo relativo a la obligación de dar alimentos, razón por la cual se realiza una investigación que tiene como tema **“ESTUDIO COMPARATIVO DEL PROYECTO DE CÓDIGO DE FAMILIA EN SU LIBRO CUARTO, TÍTULO I, CAPÍTULOS I, II, III Y IV , Y LA LEY NO 143 “LEY ESPECIAL DE ALIMENTOS” Y LOS CONVENIOS ALIMENTICIOS HECHOS EN LA HAYA EN 1973”**.

El enfoque de la presente investigación es cualitativo, pues pretende la interpretación tanto de la norma actual como lo que plantea el Proyecto del Código de familia, proceso que nace de la inducción y se basa en la revisión documental, de las normas antes mencionadas.

A través de este estudio comparativo se presentan los principales cambios en cuanto a la tramitación de la obligación de dar alimentos, que generan mayores garantías para las partes en el proceso.



Entre los elementos mas novedosos que el Proyecto de Código de familia, se encuentran: derecho a demandar alimentos aunque los padres no estén separados, derecho a demandar alimentos antes del nacimiento del hijo o hija, formas de tasar los alimentos, acuerdo sobre la pensión alimenticia ante notaria o notario público, derecho de supervisión del uso de pensión alimenticia o compensatoria, se incorpora un proceso nuevo oral en materia de familia, se adoptan los principios especiales del proceso familiar, medidas cautelares y ejecución de las resoluciones, ejecución de las resoluciones familiares, se amplía las facultades otorgadas al judicial, sucesión procesal, intervención de la Procuraduría de la familia, consejo técnico asesor, recursos en materia de familia, término máximo para tramitar asuntos de familia.

De esta manera lo que se plantea en el Proyecto del Código de familia, en lo referente a las obligaciones de dar alimentos, genera mayor regulación. La dinámica misma de la actividad procesal genera mayor acceso a la justicia y por ende la existencia de un debido proceso.

Se pretenden presupuestos, requisitos y la incorporación de características nuevas más eficaces, para quien necesita promoverlas y con más posibilidades de éxito en la satisfacción real de los derechos legítimos.

La presentación en un solo libro de las normas objetiva en el libro cuarto, título I "Los Alimentos" y la incorporación de un proceso oral y común en los asuntos de familia en el libro VI, título I "Proceso Especial y Común de Familia" promueve un orden jerárquico y sistematizado a la vez una mayor regulación de los presupuestos procesales que la fundan, su clasificación, procedimientos específicos para entablar el derecho de la obligación de dar alimentos.



1.- INTRODUCCION

El sistema judicial en Nicaragua se encuentra en una etapa de transformación y por ende de modernización, en la búsqueda de un mayor acceso a la justicia por parte de los ciudadanos, estos cambios han sido influenciados por la necesidad o carencia de una norma de familia que tutele a cada uno de los miembros de un núcleo familiar, experimentando de este modo la evolución en países de Latinoamérica.

Los contenidos en temas de familia han sido regulados en Nicaragua desde una óptica civilista, el derecho de familia se encuentra disperso en nuestro ordenamiento jurídico, podemos mencionar en el Código Civil de la República de Nicaragua, la Ley orgánica del patrimonio familiar y de las asignaciones forzosas testamentarias, la Ley de adopción y su reforma, la Ley para la disolución del matrimonio por voluntad de una de las partes y su reforma, la Ley reguladora de las relaciones madre, padre, hijos e hijas, **la Ley de Alimentos y su reforma**, la Ley de responsabilidad paterna y materna y su reglamento, entre otras normas jurídicas, por esta razón es una necesidad imperante su reforma, lo que motivo la creación del Código de Familia de Nicaragua que plantea e incorpora cambios ejemplo, de esto podemos mencionar la adopción de los principios rectores del proceso y la características de la obligación de dar alimentos.

Ante la probabilidad de aprobación del Proyecto del Código de Familia de Nicaragua, es importante determinar cuales son las ventajas y desventajas de una nueva legislación, así como los cambios que este presenta específicamente en el tema de la obligación de dar alimentos.

En esta comparación se toman en cuenta los siguientes aspectos, presupuestos que la fundamentan, naturaleza de la obligación de dar alimento, requisitos para la solicitud de la obligación de dar alimento en el extranjero y procedimiento para la demanda de alimentos en el extranjero.



En el Proyecto del Código de Familia, la obligación de dar alimento, busca ser mas sistematizada es decir que el Proyecto avanza en comparación a la ley y procedimiento vigente de Alimentos que en la actualidad se encuentra regulado de manera dispersa, el Proyecto de familia además busca ser mas clara, sencilla y completa en función de los litigios y de los derechos fundamentales, deberes, cargas que corresponde a los tribunales de familias, además amplía las facultades del juez para administrar justicia es por ello que en la aplicación de justicia el juez estará asistido por un equipo de profesionales, es decir en el que el juez se apoyara de un conjunto psico-médico-social, quienes actuarán como cuerpo técnico auxiliar y multidisciplinario, integrado por médicos, psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, y demás profesionales técnicos que exija el asunto a juzgar.

Este Proyecto de Código de Familia, ha optado por sentar con claridad las características generales y los principios rectores del proceso de los alimentos las cuales son más precisas.

La Ley se apoya en la doctrina, jurisprudencia y no se pierde de vista que la obligación de dar alimentos, han de guardar siempre la pretensión en el proceso principal e incluso con vicisitudes y circunstancias que pueden variar durante su pendencia, de suerte que es el órgano competente para dicho proceso quien se encuentra en la situación mas idónea para aplicación de este derecho inalienable de cada miembro de la familia, todo esto sin contar con la menor complejidad procedimental que comporta no separar la competencia.

Este trabajo investigativo tiene un enfoque cualitativo de tipo comparativo, tiene como técnica la revisión documental de las normas vigentes de nuestro sistema nacional y convenios internacionales en materia de la obligación de alimentos en el extranjero, todo ello para fundamentar la interpretación personal que nace de la comparación entre el Proyecto de Código de familia y la Ley de Alimento vigente Ley número 143 a la vez tomando en cuenta los convenios de alimentos hecho en la Haya en 1973.



2.- JUSTIFICACION

Con esta investigación se pretende realizar una presentación de la obligación de dar alimentos en el extranjero, en la Ley de Alimentos Ley número 143 y lo planteado en el Proyecto de Código de Familia y los Convenios Alimenticios hechos en la Haya.

Tomando en cuenta como referencia lo establecido en la norma actual se pretende explicar lo que el Proyecto de Código de Familia presenta como novedoso en cuanto al procesos oral y común de materia de familia, la sistematicidad, el sistema abierto, la ampliación de la facultad del juez, el carácter probatorio de las partes, la jurisdicción internacional, además de buscar una mayor regulación a través de las características y de los principios rectores del proceso.

Aspectos que en la norma actual no se encuentran regulados, como estudiantes pretendemos presentar una investigación que promueva la iniciativa de presentaciones de estudios innovadores generadores de nuevos conocimientos, que fortalecen en el proceso de enseñanza y aprendizaje, al servicio de la sociedad como principio rector de la universalidad del conocimiento.

Por lo tanto, se presenta un estudio comparativo que pretende generar un debate en un tema de actualidad como en las reforma del sistema normativo de Familia, dejando atrás la norma desactualizadas, dispersos que dejan demasiados vacios generando retraso en la administración de justicia.

La independencia del derecho de Familia del derecho Civil, trae consigo sistematización y orden, así como la incorporación de la legislación moderna que permite una mayor regulación con el que se de repuestas a la imperiosa necesidad de una regulación mas clara en esta materia que se ha puesto reiteradamente de manifiesto durante la vigente legislación.



3.- OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Estudio comparativo de la naturaleza jurídica, características, requisitos y procedimientos para demandar la obligación de dar alimentos en el extranjero, en el Proyecto de Código de Familia con relación a la actual Ley de Alimentos Ley número 143.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- 1) Establecer la naturaleza jurídica de la obligación de dar alimentos establecidos en el Proyecto de Código de Familia y la norma vigente.
- 2) Explicar las características jurídicas de la obligación de dar alimentos contenidos en el Proyecto del Código de Familia con relación a la norma vigente.
- 3) Describir los requisitos establecidos para la demanda de alimentos en el Proyecto de Código de Familia en relación con la norma vigente.
- 4) Comparar el procedimiento para la obligación de dar alimentos en el Proyecto de Código de Familia en relación con la norma vigente, para reclamar al alimentista con domicilio en el extranjero.
- 5) Explicar los cambios normativos establecidos en el Proyecto de Código de Familia y la norma vigente.



4. DESARROLLO

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

1.- Antecedentes de la Codificación Civil en Nicaragua

1.1.- EL PRIMER CÓDIGO CIVIL DE LA HISTORIA

El primer Código Civil elaborado en la historia de la codificación del derecho privado, o sea el que redactó el jurista francés "Gabriel Francois d'oliver" intitolado "Code Civil de tous les peuples, ou Loix dictées par la nature et par la Raison" y que hizo de conocimiento público en 1786, y se le conoció como "Primer Proyecto d'oliver", por razones obvias fue redactado el primer Código de la historia, por una parte se debe a la tradición romana, que a pesar de los siglos transcurrido, se mantenía viva en las Universidades y en algunos tribunales a la que se le agregaba el generalizado conocimiento del latín entre la gente culta y de especial interés para los estudiosos. (D'Oliver, 1786)

Por otra parte un gran apoyo al avance de la publicación del primer Código de la historia se debe a la corriente iusnaturalista, con raíces en la antigüedad clásica, cuyos numerosos seguidores compartía la creencia firme en un derecho universal e inmutable, además hay que agregarle el factor de la condición católica que prevalecía en el orden jurídico, a ella se refirió el autor Gabriel Francois d'oliver, gracias a todos estos, el primer Código nació y fue creado con: un artículo preliminar que refleja su inspiración iusnaturalista y se divide en cuatro secciones, I.- De las Personas, II.- De las cosas, III.- de las sucesiones y IV.- de las obligaciones, **Es en esta última sección nace la obligación de dar alimento, del marido sobre la esposa, del padre a los hijos**, cada sección está subdividida en cuatro artículos, o sea dieciséis integrado por varios párrafos separados, con un total de noventa y cuatro que representan otras tantas disposiciones. (D'Oliver, De la réforme des Lois Civiles, Chapitre II, 1786)



1.2.- LA CODIFICACIÓN GENERAL DEL DERECHO CIVIL

El Derecho Civil, tal y como lo conocemos hoy en día, viene derivado del hecho de codificación que se inició a finales del siglo XVIII y que terminó siendo creado a principios del siglo XIX, hasta entonces, el Derecho Civil venía siendo una simple recopilación de leyes, ordenadas cronológicamente y en ocasiones ordenadas según algunas materias determinadas, esta codificación consiguió un poco de coherencia dentro del sistema del Derecho Civil, sobre todo se trataba de no acumular leyes contradictorias entre si.

A finales del pasado siglo XVIII surge en Prusia el primer Código sobre Derecho Civil al que posteriormente le siguió el famoso Código de Francia de 1804, famoso porque fue ordenado por Napoleón y porque recoge el Derecho Romano a la vez que se adapta a las nuevas necesidades de la Francia contemporánea. A este Código Francés le siguieron el Código italiano en 1865, el Código de España de 1889 y el Código Civil alemán de 1896. Este Derecho Civil italiano resultó modificado durante el fascismo de Benito Mussolini, en 1942, cuyas reformas en el marco judicial permanecen en la Italia actual.

Poco a poco la codificación alcanza el resto de países de Europa, como suiza o Portugal y acaba dando el salto a los nuevos países independientes de Iberoamérica.

1.3.- Codificación Civil en Nicaragua

El presente trabajo de investigación está basado en el estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, cuyos autores son Felipe Rodríguez Serrano, apoyado por el Rector en ese momento doctor Carlos Tunnerman B, dicha investigación se recopiló información de finales del siglo pasado y principio del presente, se trató de reformar la legislación codificada de



Nicaragua, el esfuerzo tuvo éxito solamente con el Código Civil y el Procedimiento Civil. (Serrano, 1968)

En 1901 se encargo el Dr. Bruno H. de elaborar un Proyecto de Código Civil, el doctor Buitrago pasaba por ser unos de los abogados más capaces del país, había sido sub secretario de gobernación y justicia, magistrado de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelación de León, profesor de la escuela de derecho de la Universidad Nacional y experto litigante, el doctor Buitrago tenía redactada aproximadamente la cuarta parte del Proyecto del Código Civil, cuando el gobierno dispuso por nombrar como compañeros de labores a los doctores, José Francisco Aguilar y Francisco Paniagua Prado.

En oficio de 16 de Septiembre de 1901, el ministro de gobernación don Fernando Abaunza comunica al jefe político de León, Dr. Máximo Asenjo, la resolución del gobierno sobre la constitución de la comisión codificadora, el 18 de Septiembre del mismo año, el jefe político de León, pone en conocimiento a los Doctores, Francisco Paniagua Prado y José Francisco Aguilar, que serian parte de la comisión Codificadora, posteriormente el día 25 de septiembre toman posesión como miembros de la comisión.

Para la elaboración se llevaron a cabo 15 sesiones, comprendidas del (26 de Septiembre hasta el 18 de Octubre de 1901) para aprobar todos los capítulos y artículos de nuestro Código Civil, derogando el Código Civil vigente de ese momento, sancionándolo el 27 de Enero de 1867 y toda disposición referente a las materias civiles. Este instrumento fundamental con que cuenta esta rama del derecho, entro en vigencia en 1904, mientras era jefe de gobierno, el general **José Santos Zelaya**.

Así mismo esta codificación del Código Civil de Nicaragua, consta de 3,984 artículos en dos tomos, título preliminar de XXXVIII artículos, que se refieren a la ley general, sus efectos como se aplica y de tres libros, que tratan: el Primero (I)



de las PERSONAS Y DE LA FAMILIA; el segundo (II) de la PROPIEDAD, MODOS DE ADQUIRIRLA Y SUS DIFERENTES MODIFICACIONES y el Tercero (III) DE LAS OBLIGACIONES Y CONTRATOS, y recoge disposiciones de Códigos de diferentes países, de ahí que de repente observemos algunas incongruencias en su contenido o contradicciones entre un artículo anterior y otro posterior.

En este Proyecto de Código Civil, se toma en cuenta la obligación de dar alimento, en su título IV, titulado **"DE LOS ALIMENTOS"**, con un capítulo único, que comprendía los (artículos.283 al 297) del Código Civil, el que posteriormente sería reformado.

Sin embargo este cuerpo normativo, debe auxiliarse de leyes especiales o reglamentarias siendo estas las que se emiten con posterioridad al Código Civil y permiten aclarar, ampliar, modificar o derogar una u otra disposición previamente establecida de Leyes y de Tratados Internacionales, ejemplo claro de lo dicho es la Ley No. 143, la que deroga completamente el capítulo único del título IV de los alimentos del Código Civil.

1.4.- REFORMA DEL CÓDIGO CIVIL

El 24 de Marzo de 1992, se deroga el **TÍTULO IV DE LOS ALIMENTOS, Capítulo Único, (artículo 283 al 297)** de Código Civil de Nicaragua, creándose la Ley Especial de Alimentos, numero 143 Gaceta Diario Oficial N° 57 de 24 de Marzo de 1992). Se encuentra actualmente vigente y se encuentra estructurada de la siguiente manera: (N°57, 24 de Marzo de 1992)

1.5.- Ley No. 143 Ley de Alimento

La ley vigente No 143 está compuesta de 29 artículos y VII Capítulos, estructurada de la siguiente manera:

Capítulo I "Disposiciones Generales", regulado en los artículo (1-5)

Capítulo II "Sujetos de la Obligación Alimentaria", regulado en los artículo **(6-12)**



Capítulo III "Características y Cumplimiento de la Obligación Alimenticia", regulado en los artículo (13-15)

Capítulo IV "Paternidad y Maternidad Responsable", regulado en los artículo (16-18)

Capítulo V "Del Juicio de Alimentos", regulado en los artículo (19-25)

Capítulo VI "Extinción de la Obligación", regulado en los artículo (26 al 27)

Capítulo VII "Disposición Derogatoria y Vigencia" regulado en los artículo (28 al 29).

1.6.- La Constitución Política de Nicaragua.

La constitución política de Nicaragua define los deberes y derechos de los y las nicaragüenses, además de los deberes del Estado para con los ciudadanos y ciudadanas, a si mismo establece que Nicaragua es un Estado independiente, libre, unitario e indivisible. Además reconoce que todas y todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y le confiere derechos a las niñas, los niños y adolescentes.

El título IV de la constitución política, establece que las y los nicaragüenses tienen derechos individuales, políticos, sociales, laborales y de **familia**.

La constitución fundamenta que son derechos sociales de las y los nicaragüenses: La educación, cultura, recreación y deporte, es por ello que en el **(artículo 63) de la constitución política de Nicaragua**, dice que *"es derecho de los nicaragüenses estar protegidos contra el hambre y que el Estado promoverá programas que aseguren una adecuada disponibilidad de alimentos y una distribución equitativa de los mismos"*

1.7.- Los Tratados, Convenios y Pactos Internacionales y la Evolución de la Obligación de Dar Alimentos.(Convenio Sobre la ley Aplicable a las Obligaciones Alimenticias hecho en la Haya , 2 de Octubre de 1973)



A lo largo de la historia la obligación de dar alimento en Nicaragua ha evolucionado mediante la ratificación de tratados internacionales.

Un tratado internacional es un acuerdo escrito entre dos o más Estados, o entre una nación y una organización internacional, en virtud del cual los signatarios se comprometen a cumplir con determinadas obligaciones. Cuando las partes que suscriben el tratado son sólo dos, éste se denomina bilateral, y cuando son varias, el convenio recibe el nombre de multilateral.

Los tratados constituyen una de las fuentes más importantes del derecho internacional público y contribuyen al establecimiento de una legislación de carácter mundial. Regulan los temas más diversos, desde la ubicación de la línea fronteriza entre dos naciones hasta los aportes de los gobiernos a los distintos organismos internacionales.

1.8.- Declaración Universal de los Derechos Humanos

El reconocimiento de los derechos humanos en Nicaragua se da años después de la independencia del imperio español. Se da inicio al reconocimiento de derechos humanos y se amplían a partir de 1838, siendo Nicaragua una República independiente, reconociendo derechos como: libertad, igualdad, propiedad, libertad de palabra, escritura e imprenta. Estos derechos fueron reafirmados en la constitución política de 1893 durante el gobierno del presidente Zelaya, en el que se reconocieron otros derechos.

1.9.- Convenio sobre la Ley Aplicable a Las Obligaciones Alimenticias, Hecho En La HAYA, El 2 De Octubre de 1973.

Este convenio Nicaragua se adhirió el treinta de Enero de 1975, en el cual se establece el ámbito de aplicación de la convención tiene como objeto la **determinación del derecho aplicable a las obligaciones alimentarias**, así como a la **competencia y a la cooperación procesal internacional**, cuando el



acreedor de alimentos tenga su domicilio o residencia habitual en un Estado parte y el deudor de alimentos tenga su domicilio o residencia habitual, bienes o ingresos en otro Estado parte.

Toda persona tiene derecho a recibir alimentos, sin distinción de nacionalidad, raza, sexo, religión, filiación, origen o situación migratoria, o cualquier otra forma de discriminación.

1.9.1.- Dentro de la convención del alimento se establece como derecho aplicable

Las obligaciones alimentarias, así como las **CALIDADES DE ACREEDOR Y DE DEUDOR** de alimentos, **se regularán por aquel de los siguientes órdenes jurídicos que, a juicio de la autoridad competente, resultare más favorable al interés del acreedor:**

- a. El ordenamiento jurídico del Estado del domicilio o de la residencia habitual **del acreedor.**
- b. El ordenamiento jurídico del Estado del domicilio o de la residencia habitual **del deudor.**

Serán regidas por el derecho aplicable las siguientes materias:

- a. El **monto** del crédito alimentario y los **plazos y condiciones** para hacerlo efectivo.
- b. La **determinación de quienes pueden ejercer la acción alimentaria** en favor del acreedor y
- c. Las demás condiciones requeridas para el ejercicio del derecho de alimentos.

competencia en la esfera internacional; Serán competentes en la esfera internacional para conocer de las reclamaciones alimentarias, a opción del acreedor:



1.10.- La Convención sobre los Derechos del Niño. (Instrumento Internacional, ratificado por el Estado de Nicaragua el 19 de abril de 1990)

La convención sobre los derechos del niño es un tratado internacional que reconoce los derechos humanos de los niños y las niñas, definidos como personas menores de 18 años.

La convención establece en forma de ley internacional que los Estados partes deben asegurar que todos los niños y niñas sin ningún tipo de discriminación se beneficien de una serie de medidas especiales de protección y asistencia, tengan acceso a servicios como la educación y la atención de la salud, puedan desarrollar plenamente sus personalidades, habilidades y talentos; crezcan en un ambiente de felicidad, amor y comprensión; y reciban información sobre la manera en que pueden alcanzar sus derechos y participar en el proceso de una forma accesible y activa.

La convención presenta una serie de normas universales a las que todos los países pueden prestar su adhesión. Refleja una nueva perspectiva sobre la infancia. Niños y Niñas no son ya ni la propiedad de sus padres ni los beneficiarios indefensos de una obra de caridad. Son seres humanos y los titulares de sus propios derechos. Según la perspectiva que presenta la convención, el niño es un individuo y un miembro de una familia y una comunidad, con derechos y responsabilidades apropiados para su edad y su madurez. (Internacional, 19 de Abril 1990)

1.11.- El Proyecto de Código de Familia

El Proyecto de Código de Familia contiene 649 artículos divididos en VI Libros, estructurados de la siguiente manera:

Título Preliminar, contiene IV Capítulo regulados en los artículos (1-30)

Libro Primero: "De la Familia", contiene IV Título regulados en los artículos (31-179).



Libro Segundo: "De la Filiación", contiene I Título regulado en los artículos (180-263).

Libro Tercero "De la Autoridad Parental o Relación Madre, Padre, Hijos e Hijas", contiene I Título regulado en los artículos (264-303).

Libro Cuarto: "Asistencia Familiar y tutela", contiene II Títulos regulados en los artículos (304-423).

Libro Quinto: "De las Personas Adultas Mayores", contiene I Título regulado en los artículos (424-435).

Libro Sexto: "Proceso de Familia", contiene IV Títulos regulados en los artículos (436-649).

El 14 de febrero de 2013 fueron aprobados 63 artículos más, pertenecientes al Código de Familia. Desde el 21 de febrero del 2013 la Asamblea Nacional mantiene "congelada" la aprobación del Código de la Familia, del cual sólo queda pendiente tres artículos por aprobarse que son:

1- Derogaciones

2- Transitorio

3- Vigencia y Vacatio Legis

Es importante señalar que en la Ley de Alimentos Ley número 143 aun vigente no consagra ningún principio en cuanto a alimento y Familia se refiere en cambio el Proyecto de Código de Familia, se rige por los siguientes principios rectores los que se encuentran regulados en el (artículo 2) que a continuación desarrollamos:

1.11.1.- "La Protección, desarrollo y fortalecimiento de la familia es obligación del Estado, la sociedad y los miembros que la integran".

Regulado en el (artículo 2 inciso a, 32,44,42,77,90) del Proyecto de Código de Familia y 73 de la constitución política de la República de Nicaragua, este principio consiste en el reconocimiento de la familia como núcleo fundamental de la



sociedad, es por ello que el Estado se encarga de desarrollar los derechos y obligaciones fundamentales de cada uno de los miembros que la integran, a como es la educación gratuita y alimentación escolar, protección en contra de la violencia domestica, constitución del patrimonio familiar, así mismo, el Estado no es el único garante de dicha protección sino que, dentro del núcleo familiar los padres de familia tienen la obligación de responder por la manutención y la formación de los hijos. Los hijos, a su vez, están obligados a respetar y ayudar a sus padres.

En conclusión cada uno de los integrantes de la familia tiene el deber de apoyarse solidariamente, de tratarse con tolerancia, respeto y humanismo, dándose un trato digno, a fin de que todos contribuyan en el desarrollo de una familia sana fuerte, y solidaria.

1.11.2.- “La protección integral de la familia y todos sus miembros en base al interés superior de los mismos”.

Regulado en el (artículo 2 inciso b, 31, 275) del Proyecto de Código de Familia, consiste en que el principio de interés superior de la familia es garantizar la protección de los derechos que se derivan del matrimonio, de la unión de hecho estable y del vinculo de parentesco ya que para el Estado la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, en este sentido el Estado debe asegurar el bienestar de la familia, creando instituciones donde los niños, niñas y adultos mayores puedan ejercer sus derechos, dándoles salud, educación y alimentación, no obstante, los padres deben ayudar a que los niños y niñas tengan enseñanza primaria, educación superior, y aprendan un trabajo u oficio.

1.11.3.- “La protección priorizada a la jefatura familiar femenina”

Regulado en el (artículo 2 inciso c, 264, 266,267) del Proyecto de Código de Familia, este principio consiste en que, cuando la madre es la única responsable de los hijos, asume los derechos y obligaciones que tienen los progenitores



respecto a sus hijos, siempre y cuando no sean mayores de edad, declarados incapaces y emancipado, en este sentido la representación legal de los menores la ejercerá la madre como autoridad.

1.11.4.- “La protección por parte de los Poderes del Estado contra la violencia intrafamiliar, que se pudiera ejercer en las relaciones familiares”

Regulado en el (artículo 2 inciso d, 40, 45, 44) del Proyecto de Código de Familia, consiste en que la violencia domestica es una de las formas de violación de los derechos humanos, y debe entenderse como cualquier acción o conducta que de manera directa o indirecta, causare daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico y patrimonial, tanto como en el ámbito público como en el privado, al cónyuge o conviviente o sobre las hijas e hijos del cónyuge o conviviente o sobre otro miembro de la familia.

En este sentido el Estado se obliga a resolver este problema social a través de instituciones vinculadas en el tema, prevenir, sancionar y erradicar la violencia domestica o intrafamiliar. Ejemplo de ello, que el Estado brinda a través del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, la Procuraduría especial de la Mujer y la comisaria de la Mujer y la Niñez, y la policía nacional, asistencia psicosocial, facilitando la enseñanza de técnicas de autocontrol y de solución de controversia en beneficio de la familia nicaragüense.

1.11.5.- “Promover y proteger la paternidad y maternidad responsable”

Regulado en el (artículo 2 inciso e, 180, 181,183) del Proyecto de Código de Familia, la paternidad y maternidad responsable y filiación consisten en el vinculo que existe entre los hijos y sus progenitores, así mismo tiene lugar por consanguinidad o por adopción, la filiación en relación a la madre se denomina maternidad y en relación al padre paternidad, en este sentido, se entiende por paternidad y maternidad responsable, el vinculo que incluye derechos y obligaciones ejercidos responsablemente y de forma conjunta en cuanto al cuidado y



crianza, alimentación, afecto, protección, vivienda, educación, recreación y atención médica, física, mental y emocional de los hijos a fin de lograr su desarrollo integral, en conjunto con el Estado que se encarga de proteger este principio a través de los distintos poderes e instituciones.

1.11.6.- “Promover y proteger la constitución del patrimonio familiar”

Regulado en el (artículo 2 inciso f, 88, 90) del Proyecto de Código de Familia, este principio consiste en una vivienda o patrimonio familiar, que es el inmueble que se separa del patrimonio particular de forma voluntaria, y se vincula directamente a la familia, que sirve de habitación a los integrantes de la misma, en este sentido el estado se encarga de proteger el patrimonio familiar, estableciendo en el Código que dicho patrimonio no puede ser objeto de enajenación, gravamen, de embargo, puesto que el estado tiene especial interés en que cada familia asegure un lugar en el cual radicarse y a partir del cual desplegar la existencia de sus integrantes.

Ese interés es explicable pues la vivienda es un derecho constitucional inherente a la dignidad humana que comprende un conjunto de condiciones materiales y espirituales de existencia que permita vivir con calidad, con el fin de permitir un espacio idóneo para el libre desarrollo de la personalidad y el disfrute de otros derechos tales como la alimentación, la salud y la formación.

1.11.7.- “La igualdad de derechos, deberes y oportunidades en las relaciones del hombre y la mujer”.

Regulado en el (artículo 2 inciso g, 74, 75, 77) del Proyecto de Código de Familia, consiste en la condición equivalente en el goce efectivo de los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de mujeres y hombres sin discriminación alguna dentro del núcleo familiar, sobre la base de la igualdad de derechos y deberes de ambos, por los que estos pueden ejercer sus profesiones u oficios, emprender estudios, perfeccionar sus conocimientos, transitar libremente, pudiendo salir del país sin restricción alguna.



1.11.8.- “La igualdad y protección del matrimonio y de la unión de hecho estable por parte de los Poderes del Estado”.

Regulado en el (artículo 2 inciso h, 47) del Proyecto de Código de Familia y (artículo 72) de la constitución política de la República de Nicaragua, consiste en que el matrimonio es la unión voluntaria de un hombre y una mujer, constituida por el libre y mutuo consentimiento de los contrayentes, con aptitud legal para ello, a fin de hacer y compartir una vida en común, y constituir una familia basada en la solidaridad y el respeto, y se entiende por unión de hecho estable el acuerdo voluntario del hombre y la mujer que sin impedimento legal para contraer matrimonio, libremente hacen una vida en común, mantenida al menos por dos años consecutivamente.

En el Proyecto de Código de Familia se reconoce, desarrolla y se equiparan el matrimonio y la unión de hecho estable, en cuanto a derechos y obligaciones. Sea cual fuere el estado familiar en que se encuentren el cónyuge o conviviente se deben respeto y solidaridad, resaltando en este sentido el principio de igualdad.

1.11.9.- “Los procedimientos establecidos en este Código se tramitarán de oficio y atendiendo el interés superior de la niñez y la adolescencia y el tipo de relaciones que regula, las de carácter extra patrimonial”.

Regulado en el (artículo 2 inciso i, 50, 51, 385, 450, 451, 454) del Proyecto de Código de Familia, este principio consiste en que los jueces actuaran de oficio en los trámites o diligencias administrativas o judiciales, es decir que la dirección e impulso del proceso, una vez iniciado corresponde al juez, el que impedirá su paralización, ordenando de oficio, al vencer el término o plazo señalado, para cada actuación, el paso al trámite o diligencia siguiente, excepto que un precepto expreso subordine su impulso a la instancia de los interesados. En este sentido se garantiza el interés superior a como son los derechos de la niñez y adolescencia, en todo aquello que favorezca a su pleno desarrollo en consonancia con la evolución de sus facultades que le beneficie en su máximo grado.



1.12.- El Proceso Familiar se rige bajo los Principios Procesales Especiales:

Los principios procesales son aquellas premisas máximas o ideas fundamentales que sirven como columnas vertebrales de todas las instituciones del derecho procesal, constituyen el origen y la naturaleza jurídica de todo sistema procesal, a la vez actúan como directrices que orientan a las normas jurídicas para que logren la finalidad.

Estos principios podemos encontrarlos en la constitución, en la legislación ordinaria y en la jurisprudencia. Su valor como fuente del derecho es vital a la hora de interpretar las normas y establece la obligatoriedad de los jueces de aplicarlas e integrarlas al ordenamiento, Es por esto que los principios procesales, tienen la función de suplir algunas ambigüedades que pueden darse en el derecho procesal, y se consideran norma jurídicas semejantes a las normas que integran el ordenamiento, llegando a constituir el vértice o columna vertebral de una estructura procesal.

Estos principios del procedimiento especial de familia, lo encontramos, en el libro sexto denominado "proceso de familia" y normado en los (artículos 446-462) del Proyecto del Código de Familia, el cual entrara en vigencia muy pronto, envista que anteriormente en nuestra Ley de Alimentos Ley número 143 y en las Leyes anteriores referente a la familia, no poseía sus propio principios pues lo suplía el Código Civil y Procedimiento Civil de Nicaragua, los cuales actualmente son los encargados de velar por el procedimiento de familia, estos principios especiales a los que nos referimos son:

1.12.1.- "Búsqueda de la equidad y equilibrio familiar"

Regulado en el (artículo 446) del Proyecto de Código de Familia establece *"En los procesos de familia los jueces procurarán que la unidad en las relaciones familiares quede debidamente protegida, con base en la equidad y el respeto, tanto en la unión como en la desunión, para lo cual están obligados al examen de las controversias que se les planteen, mediante la*



práctica de las diligencias probatorias que consideren necesarias, con prevalencia del interés superior de las niñas, niños, adolescentes y mayores discapacitados". En este sentido se entiende que en los procesos de familia los encargados son los jueces quienes encaminarán y velará por la unidad en las relaciones familiares y garantizar la debida protección en base a la equidad, que es sinónimo de transparencia, equilibrio, legalidad y justicia además del respeto, tanto en la unión como en la desunión, o sea que es el juez la figura mas importante para garantizar un debido proceso legal, así mismo tendrá la obligación de valorar las pruebas que se presente en los conflictos o controversias y dar una debida sentencia apegada a derecho con la imparcialidad jurídica, teniendo en cuenta el interés superior de los hijos.

1.12.2.- Interpretación de las normas de procedimiento

Regulado en el **(artículo 447)** del Proyecto del Código de Familia el que establece en este principio *"Los jueces interpretarán las disposiciones de este título, en armonía con los principios del Derecho Procesal, aplicables al Derecho de Familia y la doctrina jurisprudencial, con el propósito de lograr la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución Política de la República de Nicaragua, en el presente Código y los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por Nicaragua".* En este sentido lo que quiere decir es que los jueces, antes de Pronunciarse con la debida sentencia tienen que tomar en cuenta la ley Interna aplicable ya sea del Derecho Procesal como las del Derecho de Familia, los tratados internacionales ratificados por Nicaragua, así como la doctrina o jurisprudencia y la constitución política, es decir que el juez tiene que estar bien documentado y tener bien estudiado el caso de familia que se les presente, en vista que el caso radicado en su despacho puede ser parecido a uno anterior, pero siempre variara las circunstancias de los hechos, en este sentido el juez deberá de dictar la debida sentencia, con conocimiento de la normas para no violentar ningunos de los Derechos Familia de las partes interviniente en el proceso, constituciones y sobre todo tomar en cuenta el principio procesal que consagra este Proyecto



1.12.3.- Abordaje social integral

Regulado en el (artículo 448) del Proyecto de Código de Familia, que se norma de la siguiente manera *"Es la familia el núcleo fundamental de la sociedad; por ello, todas las cuestiones que se susciten en el ámbito familiar y que merezcan la atención pública; serán abordadas integralmente. Para la consecución de este empeño, cada una de las instituciones que el Estado ha creado, a través de sus Leyes, actuará conforme sus competencias, para la protección social de la familia, quedando articulados esfuerzos conjuntos, en idéntico sentido. El Estado de Nicaragua deberá habilitar partidas presupuestarias en el Presupuesto General de la República, para que los centros de prevención, atención de niños, niñas o adolescentes, adultos mayores y discapacitados, dispongan de los medios materiales promedios que permitan proporcionar un ambiente de vida digna.* En este sentido este principio procesal establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad; es por esto que el Estado garantizara una protección total, cuando halla alguna cuestión, es decir alguna controversia o conflicto familiar y se establezca un proceso, así como por ejemplo en los casos de alimento cuando los padres están obligados a prestar alimentación a los hijos pero por alguna circunstancia llegasen a faltar y queden en abandono y en estado de necesidad; ¿quienes están obligado a prestar alimentos y a tutelar a los hijos? primeramente se tomara en cuenta el orden de prelación que seria los abuelos, luego los tíos, los hermanos pero si no pueden prestarle los alimentos necesarios y tutelarlos, es aquí donde entra en juego el abordaje social e integral de la familia, donde el Estado a través del presupuesto, de leyes y decreto a creado Instituciones que le a dado competencia, para dar una protección social, Psicosocial e integral el cual en caso de abandono esta institución le garantiza al menor un lugar donde será protegido para su desarrollo, para que esta institución llegue a este fin el Estado garantiza una partida presupuestaria a todas estas instituciones creadas por decreto y leyes.



1.12.4.- Oralidad, celeridad e inmediación

El principio de oralidad: se define como aquel en donde los actos procesales se realizan a viva voz; mientras que el **principio de celeridad:** obliga a las administraciones públicas a cumplir sus objetivos y fines de satisfacción de los intereses públicos, a través de los diversos mecanismos, de la forma más expedita, rápida y acertada posible para evitar retardos indebidos, este principio le impone exigencias, responsabilidades y deberes permanentes a todos los entes públicos que no pueden declinar de forma transitoria o singular y finalmente el **principio de inmediación:** se define como la circunstancia de que el juez actúe junto a las partes en tanto sea posible en contacto personal con ellas, prescindiendo de intermediario, estos principios sirven como garantía para el justiciable ya que el proceso debe estar concebido de tal manera, que la sentencia sea dictada por aquel juzgador que mejor conozca los hechos y las vicisitudes de la litis y ese será el que se ha mantenido en contacto directo con los elementos del juicio.

Estos Principios se encuentran regulado en el (artículo 449) del Proyecto de Código de Familia el cual dice que *"El juez asumirá la dirección del proceso, mediante audiencias orales, que presidirá directamente, en las cuales emitirá sus decisiones en forma oral, establecerá el cronograma de audiencias y actos procesales, liderará consensos entre las partes en busca de celeridad; puede emplear, cuando fuere posible, el sistema de grabación magnetofónica o electrónica para su memoria, rechazará las actuaciones dilatorias y concentrará la actuación en un máximo de dos audiencias, para primera instancia; y una única audiencia, en segunda instancia. Se levantará siempre acta, por el Secretario, de todo lo actuado".*

De este principio se deduce que el juez será el encargado de dirigir y presidir el proceso, el cual dará sus decisiones de manera oral, lo que vendrá a ser mas ágil, por lo tanto el proceso será expedito, es decir sin obstáculo y se espera superar la retardación del judicial que presenta el proceso escrito, de la misma manera el judicial lidera consenso entre las partes del proceso para buscar la celeridad



procesal, en cuanto al principio de concentración el juez hará uso de este principio para concentrar los actos en dos audiencias, en primera Instancia y la única audiencia en segunda instancia, el cual siempre el secretario levantara acta de lo actuado.

1.12.5.- Impulso procesal de oficio

El principio de impulso procesal de oficio se fundamenta en la idea de que el Estado está interesado en la rápida definición de los procesos es por esto, que a los jueces se les ha dotado de un instrumento procesal que les permita tomar iniciativa en la pronta solución de los conflictos de las partes sometidos a su competencia, permitiendo que los procesos continúen, no se detengan y que la administración de justicia sea dinámica, eficiente y oportuna para lograr la paz social, esto se encuentra regulado en el **(artículo 450)** del Proyecto de Código de Familia que establece *"La dirección e impulso del proceso, una vez iniciado corresponde al juez, el que impedirá su paralización, ordenando de oficio, al vencer el término o plazo señalado, para cada actuación, el paso al trámite o diligencia siguiente, excepto que un precepto expreso subordine su impulso a la instancia de los interesados"*. En este sentido quiere decir que el juez bajo este principio impedirá que el proceso se detenga, procurando actuar y ordenar de oficio, es decir que actuara sin petición de las partes impulsando la tramitación del proceso, una vez iniciado.

1.12.6.- Interés superior de la niña, niño y adolescente

Regulado en el (artículo 451) del Proyecto de Código de Familia que establece *"En los procesos de familia, los jueces ajustarán sus actuaciones, teniendo en cuenta el interés superior de la niña, niño, adolescente y mayores incapacitados, en todo aquello que favorezca su pleno desarrollo físico, psicológico, moral, cultural y social, en consonancia con la evolución de sus facultades que le beneficie en su máximo grado. A tal efecto aplicarán en lo que sea pertinente, el Libro Primero del Código de la Niñez y la*



Adolescencia". Esto quiere decir que en los procesos de familia, los jueces actuarán, teniendo en cuenta el principio del interés superior de la niña, niño, adolescente y mayores incapacitados, en este sentido los jueces al momento de pronunciarse con la debida sentencia tomara en consideración el bienestar y desarrollo integral todo lo que le beneficie en su máximo grado.

1.12.7.- Abordaje interdisciplinario para solución integral y efectiva

Regulado en artículo 452, del Proyecto de Código de Familia que establece que de conformidad con las facultades conferidas por este título, el juez competente, podrá ordenar la realización de estudios y dictámenes para procurar una solución integral y efectiva de los conflictos de familia que sean de su conocimiento, de igual forma podrá auxiliarse de personal técnico especializado.

1.12.8.- Coordinación Institucional

Regulado en (artículo 453) del Proyecto del Código de Familia el que dice *"En la solución efectiva de conflictos en materia de familia, los jueces deberán interactuar y coordinarse con aquellas instituciones que por ley tienen atribuidas funciones de cuidado y protección de la familia"*. En este sentido el presente artículo se interpreta que el sistema judicial en el ámbito de familia, estará apoyado por las instituciones que el Estado a puesto a su disposición del proceso de familia, a si como Ministerio de la Familia Adolescencia y Niñez, o la Procuraduría de la Familia.

1.12.9.- Protección de derechos fundamentales

La finalidad de las medidas de protección consiste en la preservación y restitución a los niños, del disfrute, goce y ejercicio de sus derechos vulnerados por acción u omisión amenazante y la reparación de sus consecuencias. Constituyen "actos administrativos", sujetos a eventual revisión judicial, ya sea a través de recursos judiciales contra resoluciones definitivas del órgano administrativo o mediante



acciones propiamente contenciosas administrativas o también, mediante procesos constitucionales.

Se encuentra regulado en el (artículo 454) del Proyecto del Código de Familia el que dice *"En cualquier estado del proceso de familia, si se advirtiere que a un niño, niña, adolescente, mayor incapacitado y adulto mayor, se le amenaza o vulnera algún derecho y requiere protección, se ordenarán las medidas necesarias y si fuere el caso, se dispondrá que el Ministerio de la Familia Adolescencia y Niñez, o la Procuraduría de la Familia las ejecute. También se informará a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y si fuere pertinente se dará cuenta al Ministerio Público"*. Si bien es cierto este principio lo que se trata de tutelar es la protección a los hijos, cuando han sido maltratados y se encuentren vulnerable sus derechos, pero este artículo debería de contemplar unas excepciones y adoptarlas como medidas excepcionales de protección, envista que se contradice el Código de Familia, con este principio, ya que estable que ningún hijo podrá ser separado de su familia y en caso de ejecutarse esta medidas por las Instituciones encargadas.

El Proyecto de Código de Familia debería de contemplar un plazo de protección, en este sentido el Código de Familia de Costa Rica el cual se encuentra mas desarrollado que nuestra norma y establece estas medidas en una clasificación como una "medida de protección excepcional", regulada en el artículo 39, así mismo establece otra como "medidas restrictivas de protección" el cual se ejecuta bajos ciertas causas, las causas que generan la posibilidad de adopción de estas medidas, y se aplica en aquellos hechos donde hay una violación o amenaza de los derechos de un niño, como así también la necesidad de reparación de los daños que pueden haberse ocasionado, por lo cual deberían estar temporal o permanentemente privados de su medio familiar.

Así mismo dicha legislación establece también un tiempo de duración para dicha medidas, que no podrán exceder los 90 días y en caso de persistir las causas que le dieron origen, se establecerá una prorroga temporal (se deberá constituir un



nuevo plazo de duración no mayor a 90 días, debiéndose notificar a las partes y siendo plausible de control judicial).

En conclusión podemos tomar como un buen ejemplo de la experiencia que lleva el Código de Familia costarricense, y así poder adoptar en nuestro Proyecto de Código de Familia estas medidas y el plazo en cuanto al procedimiento administrativo en la protección de los menores y derechos vulnerable de los mismos.

1.12.10.- La fuerza de la cosa juzgada en materia familiar

El principio de la fuerza de la cosa juzgada, es un instituto del Derecho Procesal de Familia, establecido como resguardo de la seguridad jurídica; pues se entiende que sin él, la incertidumbre reinaría en las relaciones sociales y se generaría la inseguridad en los fenómenos jurídicos.

Este principio se encuentra regulado en el (artículo 455) del Proyecto de Código de Familia que establece *"Algunas sentencias recaídas en los procesos familiares, como los alimentos, cuidado y crianza, régimen de visitas y comunicación, suspensión de la autoridad parental, tutela, declaración de incapacidad, no tienen la estabilidad propia de la cosa juzgada material tradicional. Sus efectos subsisten, en tanto y en cuanto la situación que la motivó no haya cambiado"*. En este sentido el presente artículo consiste que las sentencias definitivas en materia de familia, surten sus efectos como tales, pero también conforme al tiempo las circunstancias de la persona a quien se le concedió el derecho puede cambiar, a si como por ejemplo, que esta persona halla quedado incapacitada o impedida y no puede ejercer su derecho, entonces la otra parte puede solicitar una reforma en cuanto a la guarda o tutela del menor (Reforma de Pensión Alimenticia o bien Remoción de Guarda), esta pretensión, no se podrá ejercerse, mientras la situación que la motivo aun existan y no haya cambiado su situación.



De manera general se puede señalar que, la fuerza de cosa juzgada es la autoridad y eficacia de una sentencia judicial y que esta siempre subsistirá siempre y cuando, las situación que la impulso exista, lo que significa que posee la calidad especial de la inmutabilidad y la definitiva.

1.12.11.- Concentración de los actos procesales

Algunos la llaman también unidad de acto o continuidad. Consiste en que el desahogo de las pruebas, las conclusiones, los debates y la emisión del veredicto o sentencia, se den en una sola audiencia.

Este principio se encuentra regulado en el (artículo 456) del Proyecto de Código de Familia que dice *"El principio de economía procesal exige la mayor concentración posible de los actos, tendiendo de este modo a lograr la pronta solución de los litigios"*. En este sentido el artículo referido se interpreta que el judicial deberá de reunir todas las cuestiones debatidas o el mayor número de ellas para ventilarlas y decidir las en un mínimo de actuaciones y providencias. Así, se evita que el proceso se distraiga en cuestiones accesorias que impliquen suspensión de la actuación principal.

1.12.12.- Libertad de forma relativa y flexible

Este principio se encuentra regulado en el (artículo 457) del Proyecto del Código de familia que dice *"El proceso familiar repudia el exceso de ritualismos manifiesto. El juez en la solución de los asuntos debe aplicar los principios rectores en la materia familiar, admitir e interpretar las pruebas conforme su íntima convicción, flexibilizando las formas, sin violar el derecho a la debida defensa"*. En este sentido el principio deja que el juzgador tenga libertad para admitir toda prueba que estime útil, para el esclarecimiento de la verdad y para apreciarlas, es decir para que el juez valore si la prueba es legal, para su íntima convicción en este sentido el juez tiene absoluta libertad para valorar las pruebas y lo hace a conciencia, o sea que, lo que él cree



en su íntima convicción, sujetarse a un razonamiento lógico, de las ciencias y de la experiencia común para llegar a la conclusión de la verdad.

1.12.13.- publicidad de las audiencias

Con la promulgación de la declaración universal de los derechos del hombre, el 10 de diciembre de 1948, el principio de publicidad se establece como una obligación para la comunidad internacional, al señalar esta proclama. En su artículo 10 dice que *"Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal, toda persona tiene derecho a que su causa sea vista equitativa y públicamente en un plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidirá sea sobre sus derechos y obligaciones civiles"*

El principio de publicidad nació como una garantía para los ciudadanos frente al poder de los gobernantes y aunque modernamente tiene otros objetivos que la doctrina y la jurisprudencia se ha ocupado de precisar, su fin esencial el que sigue siendo, que el pueblo tenga la oportunidad de controlar el ejercicio de la potestad jurisdiccional el principio de publicidad, bien entendido, constituye un instrumento de democratización de la justicia que contribuye a su mejoramiento.

En nuestra norma se encuentra regulado en el (artículo 458) del Proyecto de Código de Familia, que dice *"los procesos serán orales y públicos, pero podrá decidir el juez, de oficio o a instancia de parte, que los actos y audiencias se celebren a puerta cerrada y que las actuaciones sean reservadas, siempre que las circunstancias lo aconsejen, o cuando los intereses de los niños, niñas o adolescentes, mayores incapacitados, incapaces o la protección de la vida privada de las partes y de otros derechos y libertades, así lo exijan"*. Este principio es un complemento de la oralidad que sirve para dar a conocer los conceptos jurídicos a toda la sociedad, en lo cual, desde luego, ésta tiene interés, desde ese ángulo la opinión pública será un medio



de control de los órganos jurisdiccionales. Ésta funciona en la misma forma en un proceso escrito, cuyos ejemplos claros son las vistas en los recursos de casación y en los procesos de responsabilidad civil contra los jueces

1.12.14.- Consulta a los menores de edad en los procesos judiciales y administrativos

Regulado en el (artículo 459) del Proyecto del Código de Familia que dice *"Los niños, niñas y adolescentes menores de edad que se encuentren bajo la autoridad parental deberán ser consultados en todo procedimiento administrativo y judicial que tenga relación con ellos de manera personal y en consonancia con las normas y procedimientos correspondientes, según sea el caso y en función de su edad y madurez. En caso de niños y niñas, la consulta será obligatoria cuando sean mayores de siete años"*. En este sentido se tomara en cuenta la opinión del menor, dando lugar a la prevalencia de la supremacía del interés superior del menor que tiene que prevalecer en cada etapa del proceso que se esté llevando a cabo en cuanto a familia se refiere.

1.12.15.- Respeto a la dignidad humana e igualdad de género

Este principio significa que las dos partes, constituidas por el acusador y el acusado dispongan de las mismas oportunidades para formular cargos y descargos y ejercer los derechos tendientes a demostrarlos.

Es así como, por ejemplo, en un proceso declarativo el demandante formula en la demanda su pretensión y el demandado pronuncia frente a ella dentro del término del traslado que se le corre a continuación de la notificación del auto admisorio. Viene luego el periodo probatorio para practicar las pruebas solicitadas por las partes en la demanda y su contestación.



Este principio se norma en el (artículo 460) del Proyecto del Código de Familia que dice *"A toda persona que intervenga en los procesos de que habla este Código, le deben ser respetados los derechos inherentes a su personalidad y ser tratado en condiciones de igualdad de derechos, deberes y oportunidades"*. En este sentido el artículo referido se interpreta, que ambas partes deben de ser tratadas con igualdad ante la ley en los procesos.

1.12.16.- Soluciones colaborativas entre las partes

Regulado en el (artículo 461) del Proyecto del Código de Familia que dice *"Durante el proceso y en la resolución del conflicto se buscarán alternativas orientadas a mitigar la confrontación entre las partes, privilegiando las soluciones acordadas por ellos"*.

En este sentido el artículo consiste en que durante el proceso, cuando las partes hayan llegado aun acuerdo, el juez respetara la voluntad de las partes al momento de dictar la debida sentencia deberá de tomar en cuenta el acuerdo en que llegaron las partes.

1.12.17.- Acceso a la justicia

Se puede sostener que el derecho de acceso a la justicia, también denominado por la doctrina española como derecho a la tutela judicial efectiva, implica la posibilidad de toda persona, independientemente de su condición económica, social o de cualquier otra naturaleza, de acudir ante los tribunales para formular pretensiones o defenderse de ellas, de obtener un fallo de esos tribunales y, que la resolución pronunciada sea cumplida y ejecutada.

Este principio se encuentra regulado en el (artículo 462) del Proyecto del Código de Familia que dice *"Toda persona tiene derecho a acudir a los juzgados para hacer valer sus derechos familiares. El Estado debe garantizar los medios para que las carencias económicas no sean un impedimento en el real acceso a la justicia, destinando esfuerzos y*



recursos para el fortalecimiento de la Defensoría Pública, que regula la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial" En este sentido, el derecho de todos a una tutela judicial gratuita y efectiva coincide con el anhelo y la necesidad social de una justicia de familia nueva, caracterizada precisamente por la efectividad y por la protección.

Finalmente podemos concluir que oralidad también supone la publicidad, la oficiosidad en las actuaciones, intermediación, concentración, la gratuidad en todas las diligencias que se tramiten ante autoridad judicial en materia de familia, lo cual hace efectiva la figura de juez director del proceso, convirtiéndolo en un juez que representa a la sociedad en la misión de la administración de la justicia, en el cual por sobre el interés público oral sea lo suficientemente amplio, para posibilitar la averiguación de la verdad (De la Rúa, 1974:104)

El cambio a un sistema oral es una urgencia en este sentido, el Proyecto del Código de Familia de Nicaragua, que actualmente se encuentra en espera para su aprobación total en la Asamblea Nacional y se encuentra pendiente de aprobarse tres artículos, crea un proceso judicial para todas las materias de familia, en donde se depuran e incorporan normas nuevas, con un procedimiento ágil y expedito, que permite a las partes resolver sus litis en tiempos prudenciales y no los engorrosos años que pasan esperando sentencia en la actualidad.

En cuanto a lo relacionado a los cambios que presenta el Proyecto del Código de Familia en lo referente a los alimentos la norma busca ser clara, sencilla y completa, en función de la asistencia familiar y tutela, deberes y derechos que derivan de las prestaciones alimenticias, los criterios de determinación de la pensión alimenticia, sentencia y extinción de las obligaciones. En cuanto a lo relacionado al proceso de familia se deja un solo libro, el cual comprende todo lo referente a este ámbito dejando así una jurisdicción especializada en esta materia y se agregan los principios especiales del proceso familiar, de esta manera se



combinan la parte sustantiva del derecho y la parte procedimental. Por lo que se hace una separación en el procedimiento. (Nicaragua, 2013)

CAPÍTULO II

2.- NATURALEZA DE LA OBLIGACION DE DAR ALIMENTO

2.1.- Síntesis Histórica.

Concepto:

Etimológicamente la palabra obligación, proviene del latín (ob-ligare), que significa nexo o ligamen, que equivale a su vez a que quedaba sujeto un deudor respecto a su acreedor, como garantía de cumplimiento de la deuda, en el campo jurídico se entiende como tales, como parte del derecho Civil que trata del origen, estructura y extinción de la relaciones jurídicas existente entre el acreedor y deudor, dichas relaciones dan lugar a que el acreedor pueda exigir del deudor una determinada prestación respondiendo de su cumplimiento con todo su patrimonio. (Diccionario Juridico Espasa, 2005)

Esta concepción se encuentra intrínsecamente ligada con la "Prestación" que no es mas que la conducta que ha de seguir el obligado o deudor para satisfacer el derecho a crédito y extinguir a si la deuda u obligación asumida frente a su acreedor, la obligación pues consiste, en un deber jurídico de realización de la prestación, la cual ha de materializarse en un acto positivo de dar o de hacer.

También se le ha denominado como alimentos, a toda sustancia o productos de cualquier naturaleza, solido o líquido, naturales transformados, que por su característica, aplicaciones, componentes, preparación y estado de conservación sean susceptibles de ser habitual e idóneamente utilizados para la normal nutrición. En el campo jurídico, se define como alimentos a "todo aquello que una persona tiene derecho a percibir de otra por ley, declaración judicial o convenio para atender a su subsistencia, habitación, vestido y asistencia médica que tienen obligación recíproca de prestarse los cónyuges, ascendientes y descendientes, así



como los hermanos en determinadas condiciones" (Diccionario Jurídico Espasa, 2005).

En el derecho romano, ya se conocía la institución de alimentos, aunque con un carácter más reducido del que tiene nuestro vigente ordenamiento jurídico. No se encontraba regulado como tal en ninguna norma, sino hasta después de comenzar la era cristiana. Cuando aparece el Digesto, nombre dado en honor a Justiniano, en el año 533 D.C (Resumen o compendio de leyes, que luego formaría parte de la constitución de legislaciones o jurisprudencia) es decir que el Digesto es una recopilación de la jurisprudencia romana que servía en forma de citas a los juristas de la época.

En el Digesto aparece la obligación de darse alimentos entre parientes, la obligación comprendía a los consanguíneos en línea directa ascendente o descendente, hasta varios siglos después, en época de Justiniano, la obligación no se hace extensiva hasta los cónyuges. (Digesto, 533 DC)

Sin embargo en roma existía un proceso para tutelar el derecho del alimentista, así como para reclamar y recibir los alimentos, de los parientes obligados y hacer uso del derecho en esa época, los que cumplían con similares objetivos parecidos a las de hoy en día.

La **extraordinaria cognitio**, este inicia con el principado y nace como consecuencia de la concentración de poderes en manos del príncipe, el procedimiento iniciaba directamente con el, o bien ante una persona que delegaba el príncipe, el procedimiento la que se tramitaban las peticiones tenían carácter sumario, este procedimiento se empleaba con el objetivo de lograr una mayor rapidez en la resolución de controversia y para ello se reducían los medios de pruebas o se prescindía de algún trámite o se acortaban los plazos, entre estos procedimientos se incluían la acción de pedir alimentos.



En el derecho romano, la prueba plena del parentesco no era necesaria, aun en el caso que el alimentista negare su filiación con el acreedor, por que en el juicio de alimento no se prejuzga la verdad de la filiación que podrá debatirse después en un juicio posterior, es decir que no existía ningún obstáculo para atacar un proceso posterior, señalado en el Digesto (Digesto, Recopilacion de leyes Romana, 533 Dc)(D.25, 3, 5, 8)

Finalmente en el derecho español, esta petición se traslado del derecho romano y se encuentra en las "siete Partidas" por el Rey Alfonso "el Sabio" específicamente en la ley 7 del título 19 de la partida cuarta, en el cual ya entablada la litis el juez, partía de un hecho que no admitía discusión, el parentesco aun a pesar de que la certeza positiva o negativa de ese hecho condicione el otorgamiento de la tutela solicitada, es decir acreditada indirectamente la relación del parentesco, podrán concederse los alimentos sin perjuicio de que en otro proceso sean después denegados por haber acreditado el alimentante que no es pariente del alimentario, es así como ha venido evolucionando este procedimiento de reclamar alimento

2.2.- NATURALEZA JURÍDICA DE LA OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTO

En cuanto a la naturaleza jurídica de la obligación alimenticia, la opinión del autor Antonio Vodanovic, es de carácter mixto pues, es patrimonial en el sentido de que son económicos los medios aptos para satisfacer las necesidades del alimentario y, es personal ya que sólo se puede reclamar respecto de las personas que por un hecho suyo o por disposición legal, han contraído esta obligación.

Por su parte, Elena Gaete de Lanza di Brolo agrega que la obligación alimenticia es personalísima puesto que está establecida en favor de una persona determinada, lo que implica que el derecho de dar alimentos es intransferible por estar íntimamente ligado a la persona en cuyo favor ha sido establecido, y es también intransferible, esto es, está fuera del comercio humano.



Por otra parte, esta obligación es legal, por cuanto es la ley la que determina entre Quienes existe esta obligación, aún cuando la fuente de esta obligación legal reside en la solidaridad de la familia y en los estrechos vínculos que unen a sus miembros

Este derecho también se convierte en una obligación, tanto gubernamental como personal, y familiar, es por ello que el Estado garantiza programas que fomentan el derecho a la alimentación a través de Instituciones del gobierno, municipalidades y ONGS, a nivel nacional desarrolla en su visión y en su enfoque, acciones **DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LAS INSTITUCIONES** y a las comunidades para actuar y salir de los estados de inseguridad alimentaria y orienta el tema de los derechos alimentarios, porque tienen una visión amplia que no se reduce estrictamente a la justicia del derecho a la alimentación, sino que abarca otros elementos importantes como la cultura alimentaria, el empleo, el ingreso y el ambiente.

2.4.1.- Las tres tesis con relación a la naturaleza jurídica de los alimentos son:

a) Tesis Patrimonialista

Según Messineo, el derecho alimentario tiene naturaleza genuinamente patrimonial y por ende transmisible. Actualmente esta concepción ya ha sido superada porque el derecho alimentario no es sólo de naturaleza patrimonial (económica) sino también de carácter extramatrimonial o puede ser de carácter meramente de una forma practica y que por ello debe ser de carácter personal.

b) Tesis no Patrimonial

Ruggiero, Cicu y Giorgio, entre otros, consideran los alimentos como un derecho personal o extramatrimonial en virtud del fundamento ético social y del hecho de



que el alimentista no tiene ningún interés económico, ya que la prestación recibida no aumenta su patrimonio ni sirve de garantía a sus acreedores, presentándose, entonces, como una de las manifestaciones del derecho a la vida, que es personalísima. En ese sentido se afirma que es un derecho inherente a la persona y así como consustancial a la persona el derecho de alimentos, es también personal el deber de prestarlos, lo cual significa que estas son intransmisibles por todo lo que conllevan por su magnitud.

c) Naturaleza Sui Generis

Algunos autores como Orlando Gomes sostienen que la institución de los alimentos es un derecho de carácter especial o sui generis de contenido patrimonial y finalidad personal conexas a un interés superior familiar, que se presenta como una relación patrimonial de crédito-debito, por lo que existiendo un acreedor puede exigirse al deudor una prestación económica en concepto de alimentos. Nuestro Código Civil se adhiere a esta última tesis.

Por ello, la obligación de dar los alimentos o como es llamada (obligación alimentaria) encuentra su sustento en la conservación de la vida y el principio de la solidaridad que debe regir en la familia, para que esta pueda constituirse. En tanto que de este modo, uno de los efectos del parentesco es la ayuda mutua que se deben los cónyuges, los concubinos, los parientes, y la forma normal de cumplirla es la obligación de darse alimentos en caso de necesidad.

Es tarea no concluida, la de tratar de establecer un concepto de alimentos, sin embargo, es importante tomar en consideración como algunos doctrinarios conciben el factor alimentario o alimenticio. Tiene su base en la familia, patria potestad o ley de relaciones madre, padre e hijos, Ley 623. Es decir, de los padres en favor de sus hijos menores de edad, los padres deben suministrar los alimentos y educación conforme su condición y fortuna.



Para **Eduardo Couture**, son: "bienes de consumo con los que el hombre satisface sus necesidades materiales, y por extensión, espiritual o morales." Es la asistencia económica dispensada en dinero o en especie, apta para la subsistencia, crianza o educación de alguien exigible por disposición de la ley, contrato o testamento, es también la denominación dada al juicio extraordinario que puede promover alguien que se puede considerar con derecho a asistencia económica, contra el obligado a prestarlo en virtud de la ley, contrato o testamento.

El **tratadista Francés Josserand**, se refiere a la obligación alimentaria y expresa que "es el deber impuesto jurídicamente a una persona de asegurar la subsistencia de la otra como toda obligación, implica la existencia de un acreedor y de un deudor, con la particularidad de que el primero esta, por hipótesis en necesidad y el segundo en condiciones de ayudar".

Los **juristas españoles Gutiérrez Alviz y Armanio**, definen los alimentos así: "Alimentation" Fundaciones especiales creadas por diversos emperadores, para premiar la fecundidad en los matrimonios y disipar al propio tiempo el temor relacionado con el nacimiento.

2.5.- OBJETO JURIDICO

El objeto jurídico es regular el derecho de recibir alimentos y la obligación de darlos. La obligación de dar alimentos es un derecho tutelado por la ley, a ser alimentados por parte de sus progenitores, estableciendo un concepto amplio de alimentación que incluye, comida vestido, educación, medicina, asistencia médica, rehabilitación y recreación. (Derecho, 2006) (Digesto, Recopilacion de Jurisprudencia Romana, 533 DC)



Desde el enfoque de las corrientes civilistas, estas consideran que en cuanto a su naturaleza el Derecho de Familia forma parte del derecho civil, aun cuando sus Instituciones están determinadas por normas de orden público. El orden público, en el derecho privado, tiene por función primordial limitar la autonomía de la voluntad y la posibilidad de que las personas dicten sus propias normas en las relaciones jurídicas. (Zannoni, 2000)

Casi todas las corrientes doctrinarias definen el derecho de Familia *como "el conjunto de disposiciones legales que regulan la familia. Consideran que es la parte del Derecho Civil que tiene por objeto material las instituciones familiares de todo orden: la Filiación, el Matrimonio, Alimento la protección del grupo familiar y de quienes lo compone, son sus grandes centros de atención, entendidos como género cuyo desarrollo específicos nutren de contenido el campo de acción de este ordenamiento jurídico"* (Zannoni, Manual de Derecho de Familia, 2000)

La doctrina moderna considera que el derecho de Familia, si bien tiene su origen en el derecho común, ha superado el alcance de éste de forma tal que no puede ser considerado como una especificidad del derecho Civil, sino más bien hay otras teorías que ubican al derecho de Familia en una rama emergente del derecho, denominada Derecho Social que se caracteriza por el rol tutelar del Estado en la promoción y defensa de los derechos de grupos sociales, ubicados en una situación de vulnerabilidad y que por consiguiente exige una legislación especial que lo estructure en lo sustantivo y lo procesal tomando en cuenta la serie de rasgos que lo caracterizan.

El derecho de Familia debe reconocer la naturaleza pública de las relaciones intrafamiliares y de las relaciones familiares con el Estado y la sociedad, apuntando a romper estructuras de dominación, subordinación, discriminación, hacia las mujeres, niñas, niños y adultos mayores que son quienes viven en condiciones de desigualdad jurídica y social.



El derecho de familia debe a su vez definir desde nuevos paradigmas jurídicos, nuevas relaciones intrafamiliares que se caractericen por la igualdad, dignidad y respeto a los derechos humanos.

Según el maestro Alberto Brenes Córdobas, en nuestra legislación la palabra alimentos tiene un significado más amplio del que objetivamente se deduce de la palabra: "en este caso tiene un significado más extenso que el de las sustancias nutritivas o comestibles, que ordinariamente asume, pues implica, a más de lo necesario para el sustento del cuerpo, el vestido, la habitación, y los medios para recuperar la salud. Alimentos son, en consecuencia, las asistencias que se dan a algunas persona para su mantenimiento"

La obligación de dar alimento, sirve en nuestra norma interna como garante a la protección de la familia, pues esta institución se deriva del matrimonio o de la relación de hecho y de los efectos que conlleva así por ejemplo: en la demanda de disolución del vínculo matrimonial, cuando lleva una acción accesoria a como es el deber de prestar alimento a los hijos, el Estado garantiza a través del Ministerio de la Familia, este derecho inherente a los hijos procreados durante la relación matrimonial.

Así mismo el objeto jurídico de la obligación de dar alimento se incorpora en el Proyecto de Código de Familia en el (artículo 1), se *"establece que el régimen jurídico de la familia y sus integrantes; comprende las relaciones jurídicas intrafamiliares, las de ésta con terceros, las entidades del sector público y privado vinculadas a ella. Las instituciones que regula son las derivadas de las relaciones familiares y los efectos jurídicos que de ellas surjan"*. (Meza, 1998)

A como se puede ver los artículos descritos en el párrafo anterior se aplicará a las obligaciones alimentarias respecto de menores por su calidad de tales y a las que



se deriven de las relaciones matrimoniales entre cónyuges o quienes hayan contraído esta obligación (Artículo 1), del Proyecto del Código de Familia.

2.6.- AMBITO DE APLICACIÓN

El ámbito de la ley es establecer la relación jurídica, la obligación y el derecho, el vínculo que une a las personas, respecto de determinados bienes o intereses, estable y orgánicamente regulada por el derecho, como cauce para la realización de una función social merecedora de tutela jurídica de la obligación de dar alimento, es el elemento más importante desde el punto de vista del derecho objetivo, así como la norma jurídica lo es desde el punto de vista Subjetivo. Por consiguiente se entiende que la relación humana o de vida es aquella que al ser reconocida e integrada en el supuesto de hecho de una o varias normas, produce consecuencias jurídicas (Reale, 2003).

Mouchet y Zorraquín Becú consideran que la relación que se establece entre personas (sujeto jurídico), al cual una norma asigna determinadas consecuencias. Por consiguiente, las relaciones sociales que se presenten, producen consecuencias jurídicas en la cual pueden identificarse los sujetos que intervienen en la relación. (Becú, 1997)

Las distintas relaciones sociales de las que pueden ser partícipes los individuos están contempladas jurídicamente, es decir, que existe una regulación para las mismas. De dichas relaciones se derivan unos derechos y deberes que vinculan a las partes concernientes y cuya materialización se manifiesta en posiciones de poder y de deber, respectivamente.

En cuanto al contenido de las relaciones jurídicas, se han establecido cuatro tipos:

1. Relaciones obligatorias: el deber de cumplir los derechos del otro sujeto (devolución del préstamo al banco).



2. Relaciones jurídico-reales: el derecho de obrar como considere oportuno el propietario de los bienes que posee, y que tal derecho forma parte de los derechos reales (derecho de propiedad).

3. Relaciones familiares: dirigidas a garantizar el marco de esta institución (derecho de alimentos entre parientes).

4. Relaciones hereditarias o sucesorias: derechos y deberes de los sucesores de una persona fallecida.

Hay relaciones que son autónomas y por tanto constituyen una sola relación jurídica, se dice que son relaciones independientes (matrimonio). Sin embargo se diferencian otras cuyo origen procede de una relación anterior ya existente y a la cual se subordina, son las relaciones dependientes (subarrendamiento).

2.7 Clasificación de la Obligación de Dar Alimento

Los alimentos pueden ser clasificados desde varios puntos de vista:

1° Según su fuente de nacimiento: esta distinción es muy antigua, pudiendo ser apreciada ya en Las Partidas, libro IV, título XIX, y que es reiterada en el Código Civil en su libro I, título XVIII, denominado "De los alimentos que se deben por ley a ciertas personas".

La Ley: La obligación de la prestación alimenticia, tiene su fundamento en la ley por cuanto es el legislador quien determina entre qué miembros de la familia existe esta obligación y es exigible. Fuera de lo determinado por la ley y si no se cumplen los requisitos que ella señala, no existe posibilidad cierta de exigir que una persona preste alimentos a otra. A estos alimentos se les llaman legales.

- La voluntad del otorgante: Si bien es cierto que la ley determina los alimentos que se deben a ciertas personas, también es cierto que permite que otras



personas, fuera de las determinadas de esa forma, puedan otorgar alimentos a otra mediante un acto testamentario, una donación entre vivos u otro acto contractual, en cuyo caso su duración, condiciones y cualquier otra modalidad estará sujeta a la voluntad del otorgante. Estos son los llamados alimentos voluntarios.

2° Según la extensión de la prestación: esta clasificación también proviene del derecho español antiguo:

- **Alimentos civiles o congruos:** Denominados en el derecho español antiguo como alimentos civiles, actualmente definidos como congruos, son aquellos que habilitan al alimentado para vivir modestamente de un modo correspondiente a su posición social.

Es decir que, los alimentos congruos son aquellos convenientes a la posición social del que recibe alimentos o alimentista y que impone al obligado a prestarlos a proporcionárselos de manera que pueda subsistir modestamente. Ello no implica en ningún caso que el alimentista lleve una vida lujosa por medio de los alimentos que percibe sino sólo una subsistencia modesta de acuerdo a su posición social.

-**Alimentos naturales o necesarios:** Los que fueron conocidos en el derecho español antiguo como alimentos naturales y en la actualidad como alimentos necesarios, son aquellos que proporcionan lo suficiente para sustentar la vida, es decir, los que proporcionan lo estrictamente necesario para subsistir y nada más.

3° Según el momento en que se otorgan: esta distinción proviene también del derecho antiguo, hecho constatado por don Antonio Dougnac y por don Joaquín Escrache en sus respectivas obras y que con posterioridad son definidos en la forma aquí señalada por:



- **Alimentos provisionales:** Estos son los que se otorgan mientras se ventila en juicio la obligación de prestar alimentos y desde que se ofrezca fundamento que justifique lo indispensable de su otorgamiento.

Su fundamento está en la posibilidad de que el juicio dure un tiempo no menor, posibilidad muy razonable, por lo que no es posible dejar sin protección al solicitante de los alimentos. Por ello, se permite que se le den al demandante alimentos provisorios mientras se pronuncia sentencia.

- **Alimentos definitivos:** Si se dicta sentencia condenatoria para el demandado, los alimentos que se conceden en ella tienen el carácter de alimentos definitivos. Es de destacar que en caso de que la sentencia sea absolutoria para el demandado, el que ha recibido los alimentos provisorios está obligado a restituirlos, a menos que la demanda se haya intentado de buena fe y con fundamento justificable.

CAPÍTULO III

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBLIGACION DE DAR ALIMENTOS

Este capítulo se refiere a las características de la obligación de dar alimentos, siendo de suma importancia establecer las mismas, debiendo cumplirse en el proceso de tramitación como garantía del principio dispositivo, las cuales se explican a continuación.

3.1- "Personalísimo"

Personalísimo en el sentido de que es inherente a la persona, por tanto solo el alimentario tiene derecho a disfrutarlo. Por ello no puede transmitirse ni por acto entre vivos, ni por causa de muerte; se dice entonces que es inalienable, esto es que no puede ser vendido, ni cedido de modo alguno. Este carácter hace que el derecho alimentario esté fuera del comercio su base normativa se encuentra



regulada en el (artículo 305, 306, 317, 320, 329, 330) del Proyecto Código de Familia, es importante señalar que este principio no se encuentra normado en la Ley de Alimentos Ley número 143, esta característica solamente se extingue en caso de muerte del alimentante o del alimentista o bien se puede extinguir cuando el alimentista alcance su mayoría de edad, excepto cuando este realizando de forma provechosa sus estudios.

3.2.- Es imprescriptible

Es imprescriptible en el sentido que siempre está vigente la obligación de dar alimentos, aunque prescriban las pensiones alimenticias atrasada después de doce meses”, esto quiere decir que el derecho a reclamar alimentos no prescribe en razón de que la obligación alimentaria se renueva día a día en la medida en que nacen diariamente las necesidades del alimentario.

Esta característica tiene su regulación en el (artículos 305, 307, 318) del Proyecto del Código de Familia y en el (artículo 13) de la Ley de Alimentos Ley número 143, esta característica es la base fundamental para hacer valer el derecho de la obligación de dar alimento, en vista que no deja que caduque la acción a pesar que solamente al alimentista se le puede exigir un año de pensión retroactiva.

3.3.- Irrenunciable e Intransigible

Irrenunciabilidad ya que se considera inalienable de la persona, a si mismo se considera **Intransigible**, en el sentido que no se admitirá ningún tipo de transacción o compensación, que implique renuncia total o parcial del derecho a las prestaciones alimentarias, dado el interés social y derecho público de esta materia, la primer característica se encuentra normada en los artículos (305, 308, 318) del Proyecto del Código de Familia y en el (artículo 13) de la Ley vigente de alimentos 143, en cambio la segunda característica no se encuentra regulada



en la Ley vigente. Esto quiere decir que por ser de orden público se prohíbe la renuncia al derecho alimentario o sea que no se admitirá ningún tipo de transacción o compensación que implique renuncia total o parcial del derecho a las prestaciones alimenticias, dado el interés social y el derecho público de esta materia, no puede renunciarse al derecho a los alimentos futuros; en cambio si es posible esta eventualidad frente a las pensiones alimentarias atrasadas, que establecen que se puede reclamar pensiones alimenticias atrasadas hasta por un año, este derecho a pedir alimentos se haya tutelado, aún contra la voluntad del titular.

3.4- Intransferible

Es Intransferible, lo que significa, que no puede cederse ni venderse a ninguna otra persona el derecho a exigir alimentos, mucho menos transmitirse este derecho por causa de muerte, lo que es consecuencia de ser un derecho inherente a la persona, su fundamento se encuentra en el (artículos 309, 306) del Proyecto del Código de Familia y en el (artículo 13) de la Ley de Alimentos número 143; esta característica se encuentra íntimamente ligada con la primer característica ya mencionada a como es **Personalísima**.

3.5.- No compensación, crédito privilegiado y preferente

Es Incompensable en el sentido que ningún tipo de deuda, tendrán un derecho privilegiado y prioridad sobre cualquier otra obligación del alimentante, esta característica quiere decir que, el juez o jueza no autorizará ninguna forma de compensación de la prestación alimentaría, con ningún tipo de deuda esta norma se encuentra regulada en el (artículo **arto. 310**) del Proyecto de Código de Familia, es importante mencionar que esta característica no la norma la Ley de Alimentos Ley número 143, lo antes dicho quiere decir que la obligación alimentaria será privilegiada y preferente sobre cualquier otra obligación de Pago (Deuda), del alimentante aun cuando exista sentencia ejecutada sobre una deuda anterior, el que debe alimentos no puede oponer al demandante en compensación



lo que el demandante le deba al él", cada vez que los alimentos están llamados a satisfacer necesidades actuales.

3.6- Retroactividad

Esta característica, es muy importante ya que hace que la obligación de dar alimento sea imprescriptible, en el sentido que no caduca la acción de reclamar alimentos, ya que el acreedor alimentista a pesar de que el deudo alimentante, le deba más de dos años de alimentos, el alimentista solamente podrá solicitar una pensión retroactiva de un año. Su fundamento legal se norma en el (artículo 311) del Proyecto del Código de Familia y de forma explícita se norma en el (artículo 13, párrafo segundo) de la Ley de Alimentos Ley número 143, que establece "*Se podrán reclamar pensiones alimenticias atrasadas por un período de doce meses*". Es decir que si el deudo alimentante debe al acreedor alimentista, mas de cinco años de alimentos, el alimentista en la demanda de alimentos solo podrá exigir un máximo de doce meses de pensión retroactiva.

3.7.- Inembargable

Inembargable, esta característica, se considera de esencial importancia, en el sentido que es la protectora de todas las características ya mencionada en vista, que asegura, la obligación de dar alimento, ya que si de algún modo esta Institución fuera embargable, no se podría llegar a la finalidad y a su objetivo en si, de exigir Alimento al deudor, o sea que si el acreedor alimentista a pesar de tener algún tipo de deuda con otra persona ya sea natural o jurídica, a este no le podrán embargar la prestación de alimento que le pasa en derecho el deudor alimentante, su fundamento legal encuentra normado en el (**artículos 312, 305**) del Proyecto de Código de Familia y en el (artículo 13. segundo párrafo) de la Ley de alimentos 143, lo que debe concluirse que la obligación de dar alimento, no hace parte de la prenda general de acreedores del alimentado por ser personalísima.



3.8- "Es de orden público".

Es de Orden Público, es decir que son de interés social y en consecuencia de obligatorio cumplimiento, son imperativas e indisponibles. No se deja a la voluntad de las personas, la regulación de las relaciones de familia; sin perjuicio que tal voluntad sea insustituible en muchos casos (como en el matrimonio o la adopción), pero sólo para dar origen al acto (no para establecer sus efectos). Su base normativa se regula en los (artículos 8, 305) del Proyecto de Código de Familia. No se encuentra regulada en Ley de Alimentos Ley número 143, Esta característica hace parte de la estructura en que se cimienta la organización social.

3.9- Transable

Transable en el sentido que el padre y la madre, podrán mediante escritura pública, celebrar acuerdo escrito sobre la pensión de alimentos que se debe pasar al hijo o hija o mayor discapacitado; pero ésta deberá ser ratificada por autoridad judicial competente del domicilio del beneficiario esta característica se encuentra normada en el (artículo 324) del Proyecto del Código de Familia, no se encuentra regulada en Ley de alimentos 143.

Esto quiere decir que la transacción es un acuerdo en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven uno eventual, esto es, cuando recaen sobre alimentos futuros, previa autorización judicial, el padre o la madre podrán mediante escritura pública, celebrar acuerdo escrito.

Finalmente se puede concluir con todas las características expuestas en este capítulo que el legislador pretende garantizar la seguridad jurídica del acreedor de este bien jurídico como es el derecho de alimentos que tutela el interés superior de cada uno de los miembros de la familia.



CAPÍTULO IV

4.- REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE LA OBLIGACION DE DAR ALIMENTO EN EL EXTRANJERO.

Para la adopción de la obligación de dar Alimento, se hace necesario que concurren una serie de elementos fundamentales que la doctrina denomina "Presupuestos o requisitos".

4.1.- Situación jurídica de Alimentos.

Para poder ejercer la tutela de alimentos, ya sea de la actual Ley de Alimentos Ley número 143 o bien del entrante Proyecto de Código Familia, se hace necesario el determinar la situación jurídica de las prestaciones alimenticias, es decir establecer y definir como nace la obligación de dar alimentos, para poder exigir o reclamar este derecho u obligación, esta situación jurídica que va a ser objeto de derechos y obligaciones, vendrá determinada necesariamente por el tipo de situación que se está ejercitando en el proceso, esta obligación consiste en un derecho de prestar alimentos que se proporcionan para la vida humana y se fundan en la familia, además de las situaciones jurídicas se consideran también como alimentos los servicios necesarios, tales como: Atención médica y medicamentos, rehabilitación y educación especial, cuando se trate de personas con alguna discapacidad independientemente de su edad, vestuario, habitación, educación y aprendizaje de una profesión u oficio; culturales y de recreación.

Todo esto para garantizar una mejor calidad de vida a los hijos nacidos en el matrimonio o en las relaciones de unión de hecho, pues lo que se trata de tutelar es a cada miembro de la familia, especialmente a los menores de edad, a los discapacitados y los mayores hasta la edad de veinticuatro años, al cónyuge hasta que no tenga para su congrua sustentación, a los hermanos y hermanas, a los descendientes y ascendientes, hasta el segundo grado de consanguinidad, cuando se encuentren en estado de necesidad o desamparo.



Para que se pueda establecer esta relación que existe entre el deudor alimentante y el acreedor alimentado, es necesario que concurren ciertos requisitos para poder exigir la obligación de Alimentos que existe entre los sujetos a como son.

4.2.- Requisitos para tener derecho de alimentos

4.2.1.- Título Legal Para Demandar Alimentos

La obligación alimenticia, como obligación ex lege, requiere un texto expreso de la ley que establezcan los sujetos. En este sentido se encuentra regulado en el (artículo 314) del Proyecto del Código de Familia y (artículos 6,7 y 8) de la Ley 143 de Alimentos vigente, los cuales señalan a quienes se debe alimentos por ley y consiguientemente, quienes son titulares del derecho con su respectivo orden de prelación estableciendo que se deben alimentos:

4.2.2.- A los hijos menores de edad

La relación alimentaria entre los padres respecto a los hijos menores de edad: se trata de un deber asistencial mucho más amplio ya que los padres no solo deben a sus hijos menores, una prestación que comprende todo lo necesario para su alimentación propiamente sino también los gastos de educación, habitación, salud, etc. de acuerdo a la condición y fortuna de aquellos.

Se consideran menores los concebidos o no nacidos. Es decir que la obligación alimentaria comprende desde el momento del embarazo de la mujer hasta la crianza de los hijos no mayores a veinticuatro años, (artículo 314, 317) del Proyecto del Código de Familia, el artículo 317 señala que *"la madre podrá solicitar alimentos para el hijo o hija que está por nacer cuando éste hubiese sido concebido antes o durante, los doscientos sesenta días a la separación de los cónyuges o convivientes"*. En este sentido es algo novedoso para la evolución del derecho de Familia, pues se



tutela la protección e integridad del menor no nacido, desde su concepción y desarrollo Infantil, en cambio, la Ley de Alimentos Ley número 143 no reconoce el derecho a demandar alimentos a los hijos concebidos o no nacidos.

4.2.3.- Hijos mayores de edad

En nuestra sociedad actual se constata un incremento de las obligaciones de los padres respecto de los hijos mayores de edad, dado que el mero hecho objetivo de alcanzar la mayoría de edad no es garantía de una independencia económica de los mismos, pues siguen inmersos en sus estudios o realizando de una carrera universitaria, master, preparación de oposiciones, y demás cursos de formación complementaria- orientados a su capacitación profesional, y viviendo "con" o "de" los progenitores, produciéndose así una desconexión entre la mayoría de edad civil y aquella en que obtienen lo que se ha denominado por la doctrina y jurisprudencia "mayoría económica". (Marin Garcia de Leonardo, 1999)

Así mismo se contempla el mínimo de edad que cesa la prestación alimentaria, el cual se encuentra regulado en el (artículo 330 inciso a, b parte infine y c) del Proyecto del Código de Familia que dice *"La obligación de dar alimentos cesa: a) Cuando los hijos e hijas alcancen la mayoría de edad, **excepto cuando estén realizando de forma provechosa sus estudios y no sobrepasen los veinticuatro años de edad;** b), **salvo en casos de enfermedad o discapacidad que le impida obtener por sí mismo los medios de subsistencia;** c) **En caso de falta o daños graves del alimentario contra el deudor o deudora de alimentos;*** De la misma manera se encuentra regulado en la Ley de Alimentos número 143, en el (artículo 8) que establece cuando cesa la obligación de dar alimentos que dice *"La obligación de dar alimentos a los hijos y a los nietos cesa cuando los alimentistas alcanzan su mayoría de edad, cuando hayan sido declarados mayores por sentencia judicial, emancipados en Escritura Pública, por matrimonio, o cuando sean mayores de 18 años, **salvo en casos de enfermedad o discapacidad que les impida obtener por sí mismos sus medios de subsistencia. Igualmente subsistirá esta***



obligación con respecto a los hijos que no hayan concluido sus estudios superiores, si los están realizando de manera provechosa.

En este sentido, en el Proyecto de Código de Familia a como se analiza en el artículo relacionado nos muestra una novedosa regulación en cuanto a la cesación de Alimentos en la mayoría de edad, pues establece que cesa la alimentación cuando el hijo tenga más de veinticuatro años, pero pone como requisito que deben de estar aprovechando los estudios, para gozar de los alimentos aun siendo mayores de edad de esto se deduce en cuanto a la cesación se pretende asegurar el bienestar familiar, pues es bien sabido que la educación es muy importante para el desarrollo de la sociedad y por lo tanto para la familia.

A diferencia de la legislación de Costa Rica, la Ley de Pensiones Alimentarias número 7654, ha tenido importantes avances en cuanto al derecho de Familia y por lo tanto ha adquirido experiencias, esta ley regula en el (artículo 174, inciso 5) que: **“no existirá obligación de proporcionar alimentos”**: *“Cuando los alimentarios hayan alcanzado su mayoría, salvo que no hayan terminado los estudios para adquirir una profesión u oficio, mientras no sobrepasen los veinticinco años de edad y obtengan buenos rendimientos con una carga académica razonable. Estos requisitos deberán probarse al interponer la demanda, aportando la información sobre la carga y el rendimiento académicos.* (Costarica, 2013)

En relación a este artículo se concluye a simple vista que es más estricto en el sentido que este, impone obligaciones para el alimentista pues a pesar que la ley consagra, que se le deben alimentos hasta los veinticinco años a los hijos, ellos tienen que estar aprovechando sus estudios, la Ley de Pensiones Alimentarias número 7654 de Costa Rica exige un buen rendimiento académico, además deben de probar y adjuntar los documentos al momento de interponer la demanda para exigir este su derecho, esto se debe que el Estado debe de asegurar un futuro profesional a sus ciudadanos.



4.2.4.- A los Mayores de discapacitados

En los casos de la prestación alimentaria, el obligado a la manutención de los mayores discapacitados, se da por sucesión, en el sentido que primeramente corresponde a los padres la obligación alimenticia, pero en caso que llegasen a faltar, correspondería al hermano mayor, siempre y cuando este bajo sus posibilidades, así mismo en caso que los padres fallecieran y ninguno de los hijos es mayor de edad, le correspondería al abuelo ya sea materno o paterno la obligación de alimentar al mayor discapacitado, esto se encuentra regulado en el (artículos 314. Inciso 288, 335.) del Proyecto de Código de Familia, en este sentido se establece en el (artículo 2 inciso b), de la Ley de Alimentos Ley número 143, generaliza en cuanto a los discapacitados, puesto que es el único artículo que norma este supuesto, en cuanto a una asistencia especial.

Del mismo modo el Proyecto del Código de Familia regula en los artículos (314 inciso a,) *"que se deben alimentos a los hijos mayores de edad cuando estos sean discapacitados"*, de la misma manera el (artículo 330 inciso b) establece que se deben alimentos *"en los casos de enfermedad o discapacidad que les impida obtener por sí mismos sus medios de subsistencia"*, de la misma forma la ley vigente 143 lo regula en el (artículo 8) de estos artículos relacionados se puede observar, que son excepciones para los mayores discapacitados en cuanto a la prestación de alimentos, en vista que los padres o tutores están obligados a darles alimentos hasta su extinción es decir hasta que el momento de su muerte ya sea del alimentante o el alimentista (artículo 329) del Proyecto de Código de Familia y (artículo 26) de la Ley de Alimentos número 143, ya que se considera que los discapacitados no se pueden valer por sí mismo y por lo tanto no pueden satisfacer sus necesidades alimenticias por su propia cuenta.

Tanto en el Proyecto Código de Familia como la vigente Ley de Alimentos 143, existe un vacío en cuanto a que no exigen de manera tacita o expresa que se demuestre la discapacidad o enfermedad del mayor de edad. En cambio el Código



de Familia de El Salvador estable en su (artículo 211 párrafo 2), que se deben alimentos a los mayores de edad que se encuentren discapacitados: *Cuando se tratare de hijas e hijos con discapacidad y éstos alcancen la mayoría de edad, continuarán gozando del derecho de alimentos necesarios acorde a su condición, siempre que dicha capacidad especial, sea acreditada ante la autoridad legal competente.*

Después de haber analizado lo que regula nuestra legislación este derecho de alimento a favor de los hijos mayores discapacitados y del mismo modo la regulación salvadoreña, podemos concluir que a pesar de haber alcanzado la mayoría de edad, encontramos algunos casos excepcionales que no cesa la obligación alimentaria, pues establece nuestra legislación que se deben alimentos a los hijos mayores de edad cuando se encuentran con discapacidad y encaso de enfermedad, pues se entiende que no se pueden subsistir por su propios medios

4.2.5.- A los hermanos y hermanas

El Proyecto de Código de Familia, lo regulara en el (artículo 314. Inciso. C, 349) y establece *"en caso de desamparo, enfermedad, abandono o cualquier otra circunstancia que vulneren los derechos fundamentales de los hijos, el juez enviara parte de su equipo multidisciplinar, previas investigaciones confiar temporalmente el cuido y tutela a sus abuelos, en caso que no puedan, se buscara a otro familiar en el grado de consanguinidad más próximo y como última instancia se ordenara el cuido de los menores a centros de protección, siempre tutelando el interés superior del menor o mayores con discapacidad, una vez aceptada la tutela de los menores es irrenunciable con excepción a una causa legítimamente justificada".* Estas obligaciones en los hermanos en cuanto a la prestación de alimentos se dan comúnmente en los casos que los padres fallezcan y queden en desamparo y en estado de necesidad los hijos menores, en este sentido los casos de prestación de alimento entre los hermanos se da, cuando uno de ellos se encuentre con la capacidad legal, como ser mayor de edad, a demás



de poseer la capacidad económica, para cubrir total o parcialmente la prestación alimenticia de sus hermanos regulado en el (artículos 282,335, 337,338) del Proyecto de Código de Familia

4.2.6.- Ascendientes y descendientes, hasta el segundo grado de consanguinidad.

Así pues el parentesco, bajo el criterio básico de la consanguinidad es el único presupuesto subjetivo que atiende nuestra legislación para el establecimiento de la relación jurídica alimenticia, convirtiendo a la consanguinidad en un vínculo social, en un hecho en que nuestro ordenamiento jurídico concede relevancia jurídica y en consecuencia en fuente de derecho y obligaciones.

Sin embargo la obligación de alimentos no se deriva únicamente de la consanguinidad, ya que se encuentra igualmente obligado a prestarlo el cónyuge, en este sentido, debemos tener presente que la deuda alimenticia constituye un acto debido a que no se existe activa o pasivamente a un grupo de personas que no pertenece a la familia, si no a un grupo restringido de parientes señalados taxativamente por la ley. Este vínculo familiar el parentesco constituye el presupuesto que subjetivo que ocasiona el nacimiento de la deuda alimenticia desde el inicio de la regulación de esta institución, que aunque apunta la tardía edad clásica, es fruto de la regulación justiniana. En la que la obligación recíproca de alimentos entre parientes ascendientes y descendiente aflora como consecuencia de la carita sanguinis la que permite distinguir los alimentos ex officio iudicis (Alimentos Forzosos) de los alimentos ex voluntate.(Alimentos Voluntarios).

Se puede decir que los parientes obligados son: los parientes por consanguinidad (se establece un orden de prelación): se deben alimentos a los ascendientes y descendientes; en segundo término. Entre parientes por afinidad, la ley obliga por alimentos a quienes están vinculados en primer grado, ello es el suegro y la



suegra respecto del yerno o la nuera y el padrastro o madrastra respecto del hijastro o hijastra, sin interesar que sean matrimoniales o unión de hecho. Los parientes por afinidad se deben alimentos entre sí cuando no hay consanguíneos en condiciones de prestarlos.

El Proyecto de Código de Familia, lo regulara en el (artículo 314. Inciso. C,) en este inciso se exigirá la obligación alimentaria en el orden de prelación, según las personas llamadas a dar la prestación de alimento, además se tomara en cuenta su capacidad económica para prestar la obligación alimenticia, en caso que no pueda, se le exigirá esta obligación a la persona posterior, en el orden de prelación.

Quien reclama alimentos no está obligado a dirigir su acción contra los distintos parientes de igual grado, por ejemplo, contra todos los abuelos o contra todos los hermanos. El que fuere demandado podrá exigir que se establezca la participación de otros parientes del mismo grado en el pago de la cuota alimentaria.

La obligación alimentaria entre los parientes es recíproca (parientes por consanguinidad y por afinidad, respectivamente). No es así entre padres e hijos menores de edad que están bajo su patria potestad.

Así pues en el título dedicado a los alimentos entre parientes, el ordenamiento jurídico tutela un interés privado o individual que se fundamenta en el derecho a la vida, en virtud del cual el derecho a recibir alimentos, como afirma PEREZ DUARTE, *"goza de todas las características propias de los derechos de la personalidad"*

Desde esta perspectiva, el Proyecto de Código de Familia, se encuentra en la corriente seguida por el resto de Códigos y se asimila en gran medida, en que los alimentos se basan en la solidaridad familiar, pero el carácter típicamente familiar de los alimentos sobrepasa el estricto interés particular, ya que la obligación de alimentos se inspira en un derecho superior a como es al derecho a la vida.



4.2.7.- El o la Cónyuge o Conviviente mientras no tenga para su congrua sustentación.

La obligación de ambos cónyuges o convivientes de proporcionarse mutuamente alimentos surge con motivo de la relación matrimonial y de la relación de unión de hecho (artículos 49,73,74,77,) la igualdad de derecho que deriva de la propia ley con relación a los cónyuges, es que si bien es esencia que el marido es quien debe dar alimentos a la mujer y hacer todos los gastos necesarios para el sostenimiento del hogar, también establece que si la mujer estuviere bienes propios, desempeñare algún trabajo, ejerciera alguna profesión, oficio o comercio debe igualmente contribuir para los gastos de la familia.

Se encuentra regulado en el (artículo 314. Inciso b), Es el deber asistencial recíproco en sentido amplio determinado por el nivel económico del que goza la familia, en base a los recursos de ambos esposos.

Si el cónyuge llamado a prestar la obligación, no se encuentra en condiciones de soportar la carga en todo o en parte, dicha obligación será puesta en todo o en parte, a cargo de la persona llamada en grado posterior.

Mientras la vida común se desenvuelve en forma regular, la prestación alimenticia se satisface fundamentalmente en especie; el marido proveerá a la alimentación, habitación, vestuario, atención médica, etc. para que surja una obligación alimenticia es necesario que el régimen matrimonial o la unión de hecho se perturben, sea por el divorcio, por la separación de bienes o por la cesación de hecho de la vida común.

Sin embargo en este Inciso concluimos que el Proyecto de Código de Familia es más bondadoso, trae consigo un suceso muy grande, puesto que habla de manera mas especifica en cuanto al grado de los hijos menores de edad e hijos mayores



de edad hasta cuando se deben alimentos y en que caso a si como por ejemplo cuando el hijo es mayor de edad pero esta discapacitado o bien, sin embargo en la Ley de Alimentos Ley número 143 no establece lo mismo puesto que la ley en cuanto a los hijos los menciona de manera general

4.3.- Presupuestos de existencia de la Obligación Alimentaria

La reacción del derecho frente a la existencia de personas que por su, edad, salud o circunstancias socioeconómicas, quienes no disponen de los medios para sobrevivir dignamente, es la de imponer a otros sujetos ya sean familiares o parientes del necesitado la obligación de cubrir tales carencias.

El fundamento de la obligación alimenticia radica en un interés de orden superior, el cual es el interés de la familia y la cohesión de un organismo familiar. Si bien es cierto que en el desarrollo y en el origen del derecho a los alimentos hay un interés publico, debido a que el Estado no puede sustraerse al cuidado de los que tienen necesidad de alimentos, y aun cuando la obligación alimenticia se contemple en relación con el obligado y no con el Estado, este ultimo tiene un particular interés en su cumplimiento.

Por otra parte, el vínculo familiar, el estado o cualidad de pariente, juntamente con el estado de necesidad y la posibilidad económica son unos de los presupuestos para que se constituya la obligación legal de alimentos.

La cualidad de pariente es un factor decisivo que es tenido en cuenta por el legislador para determinar subjetivamente cual debe ser el destinatario del derecho o de la obligación de los alimentos. Estas son algunas de las características de los presupuestos de existencia:



- a) El deber de los cónyuges de socorrerse mutuamente y la obligación legal de alimentos entre parientes, regulado en el (artículo 74 inciso c, f y 77) del Proyecto del Código de Familia.
- b) El deber de los padres de alimentar a los hijos no emancipados y la estricta obligación legal de alimentos entre ascendientes y descendientes, regulado en el (artículos 271 inciso b, y 273) del Proyecto del Código de Familia.
- c) Es obligación del padre y la madre brindarle apoyo a los menores de edad sometidos a procesos o tratamiento, por lo tanto deberán prestar apoyo moral y económico para efecto de su alimentación a sus hijos e hijas sujetos a autoridad parental que se encuentren enfrentando procesos penales, correccionales o de tratamiento psicológicos regulado en el (artículo 281) del Proyecto del Código de Familia.
- d) En los casos de la tutela del o la menor de edad en caso de total desamparo, por causa de muerte del padre o la madre, enfermedad grave, abandono o cualquier otra circunstancia que vulneren los derechos fundamentales del niño, niña o adolescente o mayor discapacitado, el juez o jueza a solicitud de la autoridad administrativa o de la Procuraduría de la Familia deberá con la urgencia del caso previas investigaciones por parte del equipo multidisciplinar del juzgado respectivo confiar temporalmente **el cuidado y tutela a cualquiera de las o los abuelos en caso de no poder darse**, se preferirá otro recurso familiar en el grado de consanguinidad más próximo y como última instancia se ordenara la protección del niño, niña o adolescente o mayor discapacitado en centro de protección. Todas estas medidas tomando en cuenta el interés superior del menor de edad o mayor o mayor discapacitado (artículo 282) del Proyecto de Código de Familia.



4.4.- Presupuestos de la obligación legal de alimentos entre parientes:

4.4.1.- Situación económica o facultades del alimentante

El alimentante ha de estar en situación de procurar los alimentos que el alimentario necesita, el (artículo 329) del Proyecto de Código de Familia dispone: *"En la tasación de los alimentos se deberán tomar siempre en consideración las facultades del deudor y sus circunstancias domésticas". Debe considerarse la fortuna del deudor, esto es, los bienes que posee e igualmente sus deudas, en suma, su activo y pasivo".* En cambio en la Ley de Alimentos Ley 143 establece en el (artículo 4 inciso e) *"Los alimentos se fijarán o variarán en relación con las posibilidades y recursos económicos de quien los debe y las necesidades de quien lo recibe".*

Así mismo se encuentra regulado en el (artículo 314. Inciso c) del Proyecto del Código de familia *"Si la persona llamada en grado anterior a la prestación no estuviera en condiciones de soportar la carga en todo o en parte, dicha obligación será puesta en todo o en parte a cargo de las personas llamadas en grado posterior".*

Del mismo modo este requisito se encuentra regulado en el (artículo 11, Parte infine), del convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias hecho en la HAYA, el 2 de Octubre de 1973 que dice *"La aplicación de la ley designada por el convenio solo podrá eludirse, cuando dicha ley sea manifiestamente incompatible con el Orden Público. No obstante e incluso si la ley aplicable disponga otra cosa, en la determinación del motante de la prestación alimenticia deberá de tenerse en cuenta las necesidades del acreedor y los recursos del deudor".*

En este sentido en las legislaciones anteriormente expuestas, se debe tenerse en cuenta las circunstancias domésticas, o sea, la carga de familia; el número de personas que viven a sus expensas, los hijos que educar, y de las necesidades que posee el alimentante, excepcionalmente se presumirá que el alimentante tiene los medios para otorgar en la totalidad la prestación alimenticia.



Esta presunción legal se encuentra establecida en el (artículo **322**) del Proyecto del Código de Familia el que explícitamente establece la pensión en caso que el alimentante tenga un trabajo estable el cual lo tasa de la siguiente manera en virtud de esta presunción, el monto mínimo de la pensión alimenticia será en el siguiente orden de prelación *"cincuenta por ciento de los ingresos netos cuando se trate de tres o más hijos, del Treinta y cinco Por ciento de los ingresos netos, cuando se trate de dos hijos y del veinticinco por ciento si hay un solo hijo"*

De la misma manera en el mismo artículo relacionado el legislador establece el monto mínimo de una pensión alimenticia, **en caso que el alimentista no tenga trabajo establece** y expresa que no podrá ser inferior al veinticinco por ciento del salario mínimo del sector económico que pertenezca su profesión u oficio. Si el o la alimentista tiene más hijos o hijas de los que están demandando alimento, este debe probar que esta proveyendo a los demás con alimento, los que deberán ser incluidos en el máximo del cincuenta por ciento.

En el mismo artículo expresado, establece que cuando reclamen alimentos personas distintas a los hijos o hijas, se estipulará un diez por ciento de los ingresos netos para cuando sea uno el que reclame y en caso de ser dos o más, se tasaré un veinte por ciento, respetando el orden de prelación y en caso de que concurren a reclamar alimentos más de tres hijos y otros alimentistas, el cincuenta por ciento será destinado para los hijos y el diez por ciento se prorratea entre los otros reclamantes.

Finalmente el legislador deja bien claro a expresar que el límite máximo de pensión alimenticia asignada cuando concurren los incisos anteriores, no podrá ser mayor del sesenta por ciento de los ingresos netos del alimentista, distribuido con equidad entre los demandantes y no demandantes, con prelación a los hijos e hijas.



JURISPRUDENCIA

En relación con el requisito de que el alimentante tenga los medios necesarios para otorgar los alimentos, existe una nutrida jurisprudencia. Así se ha fallado que "con el fin de cumplir eficazmente el imperativo de prestar alimentos en los casos que la ley señala, el juez debe ponderar todos los antecedentes relacionados con las actividades remuneradas del demandado". Entre estos antecedentes señala: saldos en cuentas corrientes del demandado, estados de situación presentados por el cuentacorrentista en los períodos que interesan, etc.

4.5.- Estado de Necesidad del Alimentado o Alimentario.

El estado de necesidad es aquella situación en la que se daña un bien jurídico protegido, partiendo de las consecuencias del estado de necesidad, cabe añadir que su fundamentación gira en torno a la posibilidad que el derecho otorga al particular de dañar o poner en peligro un bien jurídico determinado con el objetivo de salvar otro bien jurídico de igual o mayor trascendencia jurídica.

El estado de necesidad se debe de analizar desde su doble perspectiva dado que por un lado representa el presupuesto objetivo inicial y final de la obligación de alimentos.

Inicial en cuanto, que origina su exigibilidad, ya que la obligación de dar alimentos será exigible de quien lo necesite, para subsistir la persona que tiene derecho a percibirlos.

En fin en tanto que asegura su subsistencia dado que cesara la obligación de dar alimentos, cuando el alimentante no le sea necesaria la pensión alimenticia para su subsistencia. Además se puede afirmar, que el estado de necesidad del alimentante es el criterio básico entorno al cual gira la obligación de alimentos, no en vano se entiende por alimentos, todo lo necesario para la satisfacción de las necesidades de la persona.



El legislado establece que la sentencia podrá modificarse cuando cambie la circunstancia de quien reciba la alimentación regulado en el (artículo 326) ultimo párrafo, del Proyecto del Código de Familia en este sentido se puede asegurar que el legislador obvio que también pueden cambiar las circunstancias económicas del deudor alimentario puesto que en este por alguna circunstancias o impedimento físico no pueda trabajar o tener algún ingreso económico para su sobrevivencia.

En el caso de los menores de edad esta necesidad se presume por razones de orden natural, en el caso de los mayores de edad, el estado de necesidad debe ser probado, así como la imposibilidad de poder cubrir sus necesidades, ya sea por razones de trabajo o de salud al respecto.

El (artículo 74 inciso. f) del Proyecto del Código de Familia establece que *"La mujer y el hombre unidos en matrimonio comparten la responsabilidad de conducción y representación de la familia. Están obligados de manera recíproca a: Apoyarse en la satisfacción de sus necesidades y en el desarrollo de sus propias personalidades; a si mismo el (artículo 172 inciso. g) del Proyecto del Código de Familia establece que *"El juez o jueza podrá ordenar, también, una pensión compensatoria, substitutiva de la alimenticia, siempre que no exista repartición de bienes entre los cónyuges o convivientes, a fin de evitar el desequilibrio económico que para uno de los cónyuges puede significar el divorcio, en relación con la posición del otro cónyuge y un empeoramiento de la situación que tenía durante el matrimonio. Para ello, el juez o jueza tendrá en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias: g). El caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge. Y (artículo 314, inciso c), del mismo modo este requisito se encuentra regulado en el (artículo 11, Parte infine), del convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias hecho en la HAYA, el 2 de Octubre de 1973 que dice *"La aplicación de la ley designada por el convenio solo podrá eludirse, cuando dicha ley sea manifiestamente incompatible con el Orden Publico. No obstante e***



*incluso si la ley aplicable disponga otra cosa, en la determinación del motante de la prestación alimenticia **deberá de tenerse en cuenta las necesidades del acreedor** y los recursos del deudor".*

En este sentido podemos concluir que la persona que demanda alimento debe de encontrarse en estado de necesidad, carente de recursos, impedida para procurarse por si misma los medios de subsistencia. Esta condición aparece claramente expresada en el (artículo 172, 174 inciso. E, 304, 314 inciso c) del Proyecto del Código de Familia dice que: "Los alimentos no se deben sino en la parte en que los medios de subsistencia del alimentario, no le alcancen para subsistir de un modo correspondiente a su posición social".

Entre los medios de subsistencia del alimentario deben tomarse en consideración los bienes con que cuente y su capacidad de trabajo. Los alimentos no pueden ser un medio de liberarse de trabajar, ya que sería fomentar la pereza y el ocio. El juez debe desechar la demanda de quien no esté impedido de trabajar y no lo hace.

Finalmente podemos concluir que el estado de necesidad es la situación en la que se encuentra una persona a la que le resulte difícil subsistir y proveerse para las elementales exigencias para la vida, situación por tanto a la que no puede hacer frente por si mismo, no solo de carácter propios, si no ante la posibilidad de procurárselo el mismo, esta situación de necesidad es relativa puesto que dependerá de las circunstancias de hecho y que quedara suscrito a la valoración jurídica del juez, en cada caso concreto, ya que solo desde el plano de la propia necesidad es posible determinarlo.

En este sentido la problemática que suscita la determinación de la necesidad del alimentario se agudiza, dado que el juez valorara a su criterio, no solo las circunstancias objetivas, si no también las circunstancias subjetivas. En este sentido el estado de necesidad no tiene por que identificarse con absoluta



indigencia por que la necesidad debe de apreciarse en atención al contexto social y las circunstancias personales del alimentista.

El jurista García Goyena, se destaca afirmando que sin lugar alguna, la necesidad es individual y distinta en cada caso, "el necesario relativo no es igual, para todos los hombres y ni aun lo es el absoluto" en este sentido el Jurista García Goyena dice pues "La vejez tiene mas necesidades que la infancia, el matrimonio mas que el celibato, la debilidad mas que la fuerza y la enfermedad mas que la salud" (Goyena, 1992)

4.6.- Ley que consagre la Obligación de Prestar Alimento.

En este sentido es Necesario, que exista una disposición legal expresa que otorgue el derecho a exigir alimentos, así como por ejemplo la **Ley vigente de Alimento Ley 143**, y como lo va a regular de manera mas especifica el **Proyecto de Código de Familia**, que además de normar, tutelar y proteger a la familia, regula su procedimiento, de la misma manera se encuentra regulado en el **Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias hecho en la HAYA el 2 de Octubre 1973, Convenio sobre la obtención de alimentos en el extranjero, hecho en Nueva York el 20 de Junio 1956**. Estos Instrumentos Nacionales e Internacionales son necesarios para que todas las personas que sean llamada a cumplir con la obligación de dar alimento, ya sean en Nicaragua o en otro país que se hayan adherido los convenios sobre la obtención de alimento en el extranjero. (Haya, 20 de Junio de 1956)

Finalmente podemos concluir de todo lo expuesto en este capítulo que como regla general, es que estos alimentos deben darse por toda la vida del alimentario, siempre que continúen las circunstancias que legitimaron la demanda; esto es, título legal, necesidad del alimentario y del alimentante, situación económica o facultades del alimentante y que la obligación alimentaria debe de estar normada por una ley o código, sin embargo, la ley establece restricciones a esta regla



general. Los alimentos debidos a los descendientes y a los hermanos cesan cuando éstos cumplen su mayoría de edad años, salvo que estén estudiando una profesión u oficio, caso en el cual esta obligación cesa cuando cumplen veintiocho años. Esta limitación en el tiempo respecto de los alimentos debidos a los descendientes y hermanos, no se aplica si les afecta una incapacidad física o psíquica que les impida subsistir por sí mismos o que, por circunstancias calificadas, el juez de familia considere los alimentos como indispensables para su subsistencia.

CAPÍTULO V

5.- PROCEDIMIENTO PARA LA DEMANDA DE ALIMENTOS EN EL EXTRANJERO.

El tratamiento procesal para la demanda de la obligación de dar alimentos se encuentra establecido en el Proyecto de Código de Familia, libro sexto "Proceso de Familia", título III del artículo (514 al 538), que se refieren a la audiencia inicial, audiencia de vista de la causa y audiencia única en apelación.

5.1.- De La demanda

Es la petición que se hace al juez o tribunal para que mande dar; pagar, hacer o dejar de hacer alguna cosa arto 1031 Pr (Nacional, 2003).

En nuestro Código de Procedimiento Civil vigente, divide el procedimiento de demanda de la siguiente manera: Demanda, Emplazamiento, Contestación, Prueba y sentencia (1020 Pr), pero para que esta división, que hace nuestro Código de Procedimiento Civil llegue a su finalidad y por consiguiente a su ejecución es necesario que el escrito de demanda reúna algunos requisitos que establece nuestra legislación, estos son los requisitos especiales que se establecen en las normas particulares diseñadas en atención a la naturaleza del asunto (artículo 514 Proyecto de Código de Familia).



Como acto procesal inicial del juicio, acto de introducción y nacimiento de la relación jurídica procesal. La demanda deberá de contener dos tipos de requisitos, los cuales son de admisibilidad y los de tramitabilidad los cuales deben cumplirse para la obtención de la pretensión procesal. (Urbina, 2000)

5.2.- Requisitos de la Demanda

5.2.1.- Requisitos de Tramitabilidad.

Los requisitos de tramitabilidad de la demanda, esto es, los de apertura de la relación jurídica procesal, son los de cumplimiento del libelo creador o los requisitos que formalmente exige nuestra regulación Interna como es el Proyecto de Código de Familia, Ley de Alimentos vigente, el Código de Procedimiento Civil vigente y en segundo lugar los convenios Internacionales, es decir que estos requisitos son aquellos sin los cuales no se constituye la relación procesal, representan las condiciones mínimas para que el juez pueda conocer sobre el fondo del asunto. Son requisitos de forma los siguientes:

1) En el escrito de demanda deberá de consignarse el juzgado, ante el cual se interpone la demanda, por una expresión que encabece "Señor juez de" (artículo 58 y 1024 Pr) en este caso deberá ser consignado ante el Tribunal Especializado de Familia.

2) Los requisitos que debe contener la demanda están señalados en el art. 1021 y ss. Pr. Este artículo ordena: que la demanda debe contener:

1º El nombre del actor

2º El del demandado.

3º La cosa, cantidad o hecho que se pide.

4º La causa o razón por qué se pide, y pueden unirse muchas causas para mayor seguridad de los derechos".



3) El proceso de Alimento se tramitara, de manera oral y común, normado en el (artículo 495) del Proyecto de Código de Familia.

Este requisito también se encuentra normado en el (artículo 19) de la Ley 143 de Alimentos el cual establece que es necesario poner en la demanda la vía en que se va tramitar, en este caso la obligación de dar alimentos se tramitara en el "la vía Sumario"

La presentación de la cédula de identidad ciudadana es indispensable para iniciar acción judicial y realizar cualquier otra gestión ante los tribunales de justicia de conformidad al (artículo 4 inciso K) (Nacional, Ley de Identificación Ciudadana N° 152, 1997)

4) Certificado de nacimiento para demostrar el grado de filiación que existe con el deudor alimentario (artículo 182) del Proyecto de Código de Familia.

5) En el caso que el padre no haya reconocido al hijo, la madre deberá de demostrar la relación que sostuvo con el deudor alimentario, el cual no se encuentra regulado en el Proyecto de Código de Familia, en cambio la Ley vigente Ley 143, lo regula en el (artículo 18) el que establece que la madre o quien lo represente y demuestre las siguientes circunstancias, para poder exigir la obligación de dar alimentos a como son:

a.- Que en algún tiempo ha proveído a su subsistencia y educación.

b.- Que el hijo ha usado constante y públicamente el apellido del presunto padre sin que este haya manifestado oposición tácita o expresa.

c.- Que el hijo haya sido presentado como tal en las relaciones sociales de la Familia.



d.- Que el presunto padre hacía vida marital con la demandante al momento de la concepción del hijo.

e.- Cuando la afirmación de la madre y las pruebas inmunológicas o serológicas solicitadas por autoridad competente presumen fuerte mente la paternidad del hijo. Se considera que existe un vacío en el Proyecto de Código de Familia, ya que no regula de manera expresa que habrá otros medios para demostrar la relación filial entre el demandante de alimentos y el deudor alimentario para asegurar su admisibilidad, cuando el padre no haya reconocido al hijo o no lo quiera reconocer.

6) Se le agrega la proposición de las pruebas que se intente valer y la propuesta de las medidas cautelares que pueda interesar (artículo 514) Proyecto de Código de Familia)

7) Los escritos llevarán la fecha en letra y no en número, los pedimentos se escribirán sucesivamente en el escrito de demanda. (artículo 1022 Pr)

8) El escrito de demanda se interpone en papel común de conformidad al (artículo 6) del Proyecto de Código de Familia, que establece que todos los documentos y actuaciones en materia de familia se tramitarán ante las autoridades respectivas quedando exentos del uso del papel sellado y timbre.

En este sentido esta disposición obedece al principio de orden público ya que esta acción de reclamar alimentos posee un interés social y en consecuencia es de obligatorio cumplimiento.

9) El escrito de demanda deberá ser acompañado por los documentos y copias de ley, que deberán ser adjuntados al mismo.

10) Poder de Representación para acreditar, la legitimación el que se deberá adjuntar en el primer escrito o comparecencia de la demanda, sin el cual no será



admitida su representación de conformidad al (artículo 479 Proyecto de Código de Familia y artículo 1029 Pr).

En los procesos de familia podrán comparecer e instar justicia, **las personas naturales** que se encuentren en pleno ejercicio de su capacidad jurídica, con las que no se hallen en este caso actuarán sus **representantes legales** y **por las personas jurídicas** actuarán quienes la representen, conforme las disposiciones legales, reglamentarias o estatutarias por las que se rija, dicha representación deberá ser acreditada en el primer escrito (artículo 320 y 478 Proyecto de Código de Familia)

11) En el escrito de demanda se podrá aportar propuestas de pruebas cuando su naturaleza lo permita (artículo 510) Proyecto de Código Familia

12) Solicitud de medidas cautelares provisionales, regulado en el (artículo 469) que establece que las medidas cautelares serán decretadas por el juez de oficio, a solicitud de parte interesada o de autoridad pública competente, esto quiere decir que la parte actora puede solicitar una pensión provisional, mientras se ventila el Juicio esto se encuentra normado en el (artículo 470 inciso 3) Proyecto de Código de Familia.

Se considera que existe un vacío en el Proyecto de Código de Familia, ya que no regula que el que ejerce la acción de tutela de alimentos puede fijar el monto de la pensión alimenticia en su demanda, y esta se otorgara en base a los medios de prueba que aporta la parte que solicita la medida cautelar de pensión provisional de alimentos.

En el Proyecto de Código de Familia, no es necesario que el solicitante de la pensión provisional, deba probar ni justificar el derecho en que se funda su pretensión basta con que este la solicite, para que sea decretada por el judicial.



En cambio la Ley vigente 143 de Alimentos en su (artículo 18) regula la posibilidad de que el demandante de alimentos pretenda que se le den alimentos provisionales, fijando por el mismo, el monto de la pensión de alimentos que pretende recibir, siempre que se estime que hay pruebas suficientes en favor de la pretensión, dado el interés de la parte actora.

La Ley de Alimentos vigente permite a la parte actora, que para la solicitud de la medida cautelar a como es la pensión provisional de alimentos, el solicitante justifique por cualquier medio probatorio, el fundamento de la pretensión.

13) Competencia del juez (artículo 440, 441 y 492 inciso a) Proyecto de Código de familia, es precisamente el modo o manera como se ejerce esa jurisdicción por circunstancia concretas de materia, cuantía, grado, turno, territorio imponiéndose por tanto una competencia, por necesidades de orden práctico. Se considera, entonces, tanto como facultad del juez para conocer en un asunto dado, como también el conflicto que puede existir por razón de competencia, como es el caso de conflicto o cuestiones que pueden darse al respecto.

14) En el escrito de demanda se debe de señalar el lugar para oír notificación del demandado o deudor alimentante domiciliado en el extranjero. Esto se encuentra regulado en el (artículo 153 Pr) el que establece expresamente que no se notificara a las partes las diligencias que se dicten para el cumplimiento de un EXHORTO, si no en los casos siguientes: Cuando para este objeto haya señalado casa en el lugar donde deba cumplirse el exhorto; Cuando se prevenga en el mismo que se practique alguna diligencia con citación, intervención o concurrencia de alguna de las partes, pero siempre si han señalado casa en el lugar; Cuando sea necesario requerirlas para que suministren algunos datos o noticias que puedan facilitar el cumplimiento del exhorto.

El (artículo 141 Pr), establece y diferencia entre SUPPLICATORIO, que es el que se dirige a un Juez o Tribunal superior en grado; EXHORTO, es el que se dirige a



uno de igual grado; CARTA- ORDEN o despacho, es el que se dirige a un subordinado suyo. (Arto. 46, 139,187Pr) (Justicia) B.J. 3276, 11305).

15) En el escrito de demanda se debe de señalar el Lugar para oír Notificación del Demandante.

16) Petición de Prestación de alimentos Provisional,

17) firma del demandante o representante Legal.

5.2.2.- Requisitos de Admisibilidad.

Los requisitos de admisibilidad garantizan la posibilidad de un fallo favorable que constituyen los requisitos de fondo, de la pretensión material los cuales constituyen los requisitos de admisibilidad, establecidos por la ley, de los cuales dependerá la tramitabilidad de la de la demanda, es decir son las condiciones que hacen admisible la acción, cuatro son las condiciones requeridas para que el juez acoja la demanda:

- a) existencia de un derecho real o personal;
- b) interés actual en ejercer la acción;
- c) la calidad de acreedor del demandante; y
- d) la calidad de deudor del demandado (legitimación ad causam activa y pasiva).

La doctrina estima que no puede dictarse una sentencia estimatoria si no concurre cualquiera de esas condiciones. Si no existe el derecho, no puede acogerse la demanda. Tampoco cuando no existe interés actual (condición no cumplida, etc.), o cuando el demandado no es el acreedor o el demandado no es el deudor.

La Corte Suprema reconoce los requisitos de fondo en el juicio, autoriza al juez o tribunal para revisar de oficio el mérito del título en tres casos:

- a)** cuando la obligación no sea legítima.



b) cuando la persona que ejerce la acción no sea la portadora legítima del crédito;
c) o cuando la persona contra quien se dirige la ejecución no es la responsable o sus sucesores o representantes. Estos son presupuestos o requisitos de fondo de la demanda.

Al respecto, la Corte Suprema dice: "La misma Corte se ha encargado ya de explicar el alcance de esta tesis, en los fallos que invoca el recurrente, y en otros, en los que claramente ha puesto de manifiesto que en los juicios el juez tiene siempre expedita su jurisdicción para examinar si el título que se funda la demanda reúne las condiciones necesarias, aun en el caso de haberse despachado la ejecución y librado el mandamiento respectivo; y que precisamente, en virtud de esta jurisdicción, pueden los jueces y tribunales, al dictar sus sentencias, aunque no se alegue nada al respecto, declarar que el título ostentado no reúne esas condiciones, si del examen que de él hagan llegan a convencerse de que la obligación a que se refiere no es legítima, que la persona que ejercita la acción no es portador legítimo del crédito; o que la persona contra quien se dirige la ejecución, no es la persona responsable o sus sucesores o representantes. Si la obligación que se reclama no es legítima, por ser contraria a las leyes o a las buenas costumbres, no está bien, por el interés público y el decoro de la magistratura, el que se discutan, con toda la resonancia de un juicio, ciertos hechos que ofenden al sentido moral o al orden público; y si el que ejercita la demanda no es el acreedor, o el demandado no es el deudor, de nada sirve que se tramite el juicio, porque es de esencia jurídica que los derechos que se ventilen deben existir realmente, y porque en estos casos la ley misma es explícita al exigir que el acreedor, en el juicio ejecutivo, tenga un título legal, que según la ley tenga fuerza bastante para el efecto (art. 1684 Pr.), y es obvio que ese título debe ser contra aquel a quien se dirige la ejecución. (Justicia, Sentencia de las 10:30am, Boletín Judicial 20630, 8 de Octubre de 1961.

Eso quiere decir que el actor debe tener acción, y que esa acción debe ser legítima. Pero cuando existe la acción legítima y el que promueve la ejecución es



el portador legítimo del crédito y el demandado es el que tiene a su cargo la obligación contraída, o causahabiente de aquel, a su representante, no puede decirse que se hallan comprometidos la esencia de los derechos, ni la mora y el orden público, por solo la circunstancia de que el título ostentado no preste todavía la fuerza, como cuando el plazo no se ha vencido aún, o siendo el crédito condicional, no consta que se ha cumplido la condición, o la deuda no es líquida, o cuando el documento privado no ha sido reconocido legalmente, en fin, cuando al título faltan ciertos elementos que, sin afectar en su propia naturaleza la acción misma que se ejerce, solo se requieren para que pueda ser tramitado en la vía rápida del juicio ejecutivo; entonces, **claro está, que los tribunales no podrían suplir las omisiones de las partes, porque se trata tan solo de omisiones que significan que renuncia el ejecutado a discutir los derechos con la mayor amplitud del juicio Sumario;** y en nada se afecta con ello el orden público, ya que siempre que sea dentro del orden contencioso, la cuestión es de mero procedimiento, que no produce ninguna nulidad. En esos casos el deudor solo podría detener la ejecución alegando las excepciones pertinentes; y es así que la Corte Suprema ha declarado que, en esos casos, lo que se objeta es la clase de vía seguida o el procedimiento del juez al despachar la ejecución, por decirse que falta uno de los requisitos necesarios para su exigibilidad en la vía ejecutiva, ello determinaba precisamente a favor del deudor el derecho o la necesidad de oponer la excepción correspondiente, en el término legal, para desbaratar el procedimiento o volver el juicio a la vía ordinaria; pero en ninguna manera facultaba al juez o tribunal para suplir el silencio del ejecutado, quien por su tácita renuncia dejó expedito el procedimiento iniciado"

5.3.- INICIO DEL PROCESO DE LA OBLIGACION DAR ALIMENTO EN EL EXTRANJERO.

5.3.1.- Apertura

El proceso inicia mediante la presentación de escrito de demanda a instancia de parte interesada ante la Oficina de Recepción y Distribución de Causa y Escrito (ORDICE) del Tribunal de Familia, el que se presentara con tres copias de ley, las



cuales serán: una copia para la Procuraduría de la Familia, una copia para el demandante, una copia para el demandado y el escrito original que quedara en el expediente judicial. De conformidad a los (artículos 496, 514) del Proyecto de Código de Familia.

En la Ley de Alimentos Ley número 143, establece que deberá de conocer a prevención de esta clase de juicio, los jueces locales de lo civil, o los jueces locales únicos, si fueren profesionales del derecho debidamente incorporados, las tramitaran en la vía sumaria (artículo 19) de la Ley de Alimentos.

Como se puede observar en el Proyecto en cuanto a la presentación y apertura del procedimiento de la demanda de alimentos los órganos encargados de la tramitación y la administración de justicia son órganos y funcionarios especializados en la materia, por lo que se espera que la retardación de justicia sea algo del pasado.

5.3.2.- Termina de la admisión de la demanda y de la contestación

La demanda será admitida dentro de los siguientes cinco días después de su presentación, en la Oficina de Recepción y Distribución de Causa y escrito (ORDICE), dentro de los cuales se correrá traslado a la parte demandada para que conteste dentro del término de diez días, más el término de la distancia, contados a partir de su notificación. Regulado en el (artículo 515) del Proyecto de Código de Familia.

El reglamento de la convención de la obligación de alimentos en el extranjero, establece en el (artículo 3) que serán competentes para resolver en materia de obligaciones de alimentos en los Estados miembros:

- a) el órgano jurisdiccional del lugar donde el demandado tenga su residencia habitual.
- b) el órgano jurisdiccional del lugar donde el acreedor tenga su residencia habitual,
- c) el órgano jurisdiccional competente en virtud de la ley del foro para conocer de una acción relativa al estado de las personas, cuando la demanda relativa a una obligación de alimentos sea accesoria de esta acción, salvo si esta competencia se basa únicamente en la nacionalidad de una de las partes.



d) el órgano jurisdiccional competente en virtud de la ley del foro para conocer de una acción relativa a la responsabilidad parental, cuando la demanda relativa a una obligación de alimentos sea accesoria de esta acción, salvo si esta competencia se basa únicamente en la nacionalidad de una de las partes.

5.3.3.- De la Admisión de la demanda

Admitida la demanda el juez dará traslado a las autoridades administrativas en este caso a la Procuraduría de la Familia, al Ministerio de Familia, Adolescencia y Niñez en los asuntos a su cargo. Regulado en el (artículo 516) del Proyecto de Código de Familia.

Admitida la demanda, el judicial dará intervención de la Procuraduría de la Familia y el Ministerio de la Familia y atendiendo a la complejidad del asunto y su sana convicción, podrá convocar para la Audiencia Inicial, a la Procuraduría de la Familia y al Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, para que se pronuncien sobre los términos del acuerdo relativos a los menores de edad, incapacitados o mayores discapacitados, si los hubieren, regulado en el (artículo 161) del Proyecto de Código de Familia.

En este sentido el Proyecto Código de Familia, hace más efectiva la tutela de la familia a través de las Instituciones, que el Estado ha incorporado, prueba de esto es la facultad que le da el Proyecto de Código de Familia a la Procuraduría de la Familia para tutelar a la familia en estos procesos, el artículo 485 del Proyecto de Código de Familia establece que la Procuraduría de la Familia, tendrá intervención y por ende, será parte en todos los procesos, concernientes al estado civil y capacidad de las personas, los intereses de menores de edad, mayores discapacitados, mayores declarados incapaces, personas adultas mayores y en todos aquellos que la ley así lo prevenga. Puede además, ser parte en cualquier otro asunto en que alegue un interés social.



La Procuraduría de la Familia al intervenir como parte en el proceso, podrá sostener pretensiones autónomas o adherirse, ampliar o modificar la pretensión formulada por las partes, o alegar otras nuevas sin alterar sustancialmente lo que sea objeto de la litis, podrá igual oponer las excepciones que estime pertinentes.

La Procuraduría de la Familia interviene como representante de los intereses de los niños, niñas, adolescentes, personas incapacitadas o ausentes, hasta que se les provea de tutores, representantes o encargados del cuidado de sus personas y de la defensa de sus bienes y derechos.

Así mismo admitida la demanda, el juez citara y emplazara mediante exhorto al demandado (deudor alimentario) al país de su domicilio o residencia, para que conteste dicha demanda, nombre a un representante legal, y señale el lugar para oír notificaciones, en la misma contestación de la demanda, dicho exhorto se tramitara conforme al procedimiento exequátur siempre relacionado con la competencia del tribunal. Más adelante se tratara de explicar con más dedicación lo referente a este punto que se ha abordado. De conformidad a lo que establece nuestro Código de Procedimiento Civil regulado en el (artículo 15, 29, 128, 138, 145, 146, 149, 156 Pr), Código de Bust. (artículo 388, 393) y Ley Orgánica del Poder Judicial regulado en el (artículo 123), en este exhorto al demandado se le dará el termino de la distancia que será a razón de un día por cada 30 kilómetros según lo regulado en el (artículo 29 Pr). (Nacional, Ley Organica del Poder Judicial ley N° 260) (Codigo de Bustamante)

En cuanto al exhorto internacional, el juez se apoyara de los convenios y tratados internacionales, para poder notificar, emplazar o citar a demandado, en este sentido Nicaragua se encuentra suscrito en el **“CONVENIO INTERAMERICANO SOBRE EXHORTO O CARTAS ROGATORIAS”** hecha en Panamá el día treinta de Enero de mil novecientos setenta y cinco, dentro de esta convención, establece en el (artículo 2), que se aplicarán los exhortos o cartas rogatorias expedidos en actuaciones y procesos en materia civil o comercial por los órganos



jurisdiccionales de cada uno de los Estados partes en esta Convención, y que tengan por objeto:

- a. La realización de actos procesales de mero trámite, tales como notificaciones, citaciones o emplazamientos en el extranjero;
- b. La recepción y obtención de pruebas de informes en el extranjero, salvo reserva expresa al respecto.

La presente Convención no se aplicará a ningún exhorto o carta rogatoria referente a actos procesales distintos de los mencionados en el Artículo anterior; en especial, no se aplicará a los actos que impliquen ejecución coactiva.

Dicho exhorto contendrá los siguientes requisitos, los cuales se encuentran regulado en el Convenio Interamericano sobre Exhorto o Carta Orden, en el capítulo IV "Requisitos para el Cumplimiento del Exhorto" del (artículo 5 al 9) el que estable:

Que los exhortos o cartas rogatorias se cumplirán en los Estados partes siempre que reúnan los siguientes requisitos:

- a.** Que el exhorto o carta rogatoria se encuentre legalizado, salvo lo dispuesto en los Artículos 6 y 7 de esta Convención. Se presumirá que el exhorto o carta rogatoria se halla debidamente legalizado en el Estado requirente cuando lo hubiere sido por funcionario consular o agente diplomático competente;
- b.** Que el exhorto o carta rogatoria y la documentación anexa se encuentren debidamente traducidos al idioma oficial del Estado requerido. (artículo 5)

Cuando los exhortos o cartas rogatorias se transmitan por vía consular o diplomática o por intermedio de la autoridad central será innecesario el requisito de la legalización, regulado en el (artículo 6)

Los tribunales de las zonas fronterizas de los Estados partes podrán dar cumplimiento a los exhortos o cartas rogatorias previstos en esta Convención en forma directa, sin necesidad de legalizaciones. Regulado en el (artículo 7)



Los exhortos o cartas rogatorias deberán ir acompañados de los documentos que se entregarán al citado, notificado o emplazado, y que serán:

- a. Copia autenticada de la demanda y sus anexos, y de los escritos o resoluciones que sirvan de fundamento a la diligencia solicitada;
- b. Información escrita acerca de cual es el órgano jurisdiccional requirente, los términos de que dispusiere la persona afectada para actuar, y las advertencias que le hiciere dicho órgano sobre las consecuencias que entrañaría su inactividad;
- c. En su caso, información acerca de la existencia y domicilio de la defensoría de oficio o de sociedades de auxilio legal competentes en el Estado requirente. Este requisito Indispensable se encuentra regulado en el (artículo 8)

El cumplimiento de exhortos o cartas rogatorias no implicará en definitiva el reconocimiento de la competencia del órgano jurisdiccional requirente ni el compromiso de reconocer la validez o de proceder a la ejecución de la sentencia que dictare. Regulado en el artículo (artículo 9) (Convenio Interamericano sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, 30 de Enero de 1975)

Señalamiento para audiencia inicial

Contestada la demanda o vencido el término de la distancia, sin que haya contestación y constatando el juez la debida notificación al demandado, el juez señalará fecha para la audiencia inicial, dentro de los diez días siguientes a la contestación o en su caso a la preclusión del término de la contestación regulado en el (artículo 517) del Proyecto del Código de Familia.

En el caso que el demandado haya sido debidamente notificado y no haya comparecido a contestar la demanda interpuesta en el país que se interpuso la demanda, el Juez de oficio o a solicitud de parte le nombra un Guardador ad-liten.



El Curador o Guardador Ad Litem, es un abogado titulado que actúa en representación de una persona que no puede o no quiere concurrir al proceso. La función del Guardador Ad Litem, termina cuando el representado decide acudir personalmente o nombra un representante. Estos curadores son designados por el juez del conocimiento y sus deberes, responsabilidades y forma de remuneración son las mismas que rigen para los auxiliares de justicia. El curador o Guardador Ad Litem, está autorizado para realizar todos los actos procesales que no estén reservados a la parte misma, así como designar apoderado judicial bajo su responsabilidad, sin embargo no le es permitido disponer del derecho en litigio

La finalidad del nombramiento del curador o Guardador Ad Litem, es proteger los derechos de la persona que está ausente, para garantizarle básicamente el derecho de defensa y la igualdad de las partes en el proceso. Estos representantes constituyen un ente protector de los derechos de los incapaces involucrados en todos los casos en que no cuenten con un representante legal constituido, o cuando existiendo el representante legal, sus intereses son contradictorios, bien sea porque tienen interés en los actos de que conoce el juez, o han participado en la vulneración de los derechos del incapaz o se ven enfrentados a la vulneración de derechos por parte de las personas con las que tienen un interés directo. (Gonzalo Camacho).

5.3.3.- Del Nombramiento del Guardado Ad-Litem.

Si el demandado ausente no tiene apoderado conocido, a petición de demandante se le nombrará un Guardador Ad-Litem, regulado en los (artículos.868, 872 y 873) del Código de Procedimiento Civil.

El que establece que si se tratare de establecer acción contra alguna persona que se hubiese ausentado de su domicilio y se ignorare su paradero o que constare hallarse fuera de la república y no hubiere sido declarado ausente, rendida la



prueba del caso en juicio sumario, con intervención del Ministerio Público, se le nombrará guardador AD-LITEM, caso de que no hubiere dejado apoderado.

Si hubiere dejado apoderado para obrar en juicio, general o generalísimo, se procederá según lo dispuesto en el (artículo 79) del Código de Procedimiento Civil que establece que cuando se ausentare de la república alguna persona dejando procurador autorizado para obrar en juicio o con poder general o generalísimo de administración, todo el que tenga interés en ello, podrá exigir que tome la representación del ausente dicho procurador, y si éste se niega, se le podrá justificar que ha aceptado el mandato expresamente o ha ejecutado una gestión cualquiera que importe aceptación. Este derecho comprende aún la facultad de hacer notificar las nuevas demandas que se establecen contra el ausente, entendiéndose autorizado el procurador para aceptar la notificación.

Si el poder para obrar en juicio se refiere a uno o más negocios determinados, si lo podrá hacerse valer el derecho que menciona el inciso precedente, respecto del negocio o negocios para los cuales se ha conferido el mandato.

También se le nombrará Guardado Ad-Litem, al demandado contra quien habiendo sido requerido, para contestar la demanda, sin que lo haya hecho, se haya decretado apremio corporal sin que fuere posible hacerlo efectivo. En este caso transcurrido quince días de acordado apremio corporal, se le nombrará Guardador Ad-Litem sin ningún trámite continuando el debido procedo (artículo 1418, Párrafo 2^o) del Código de Procedimiento Civil.

5.3.4.-Preparación para la audiencia inicial

El juez con la suficiente antelación deberá conocer el tema controvertido con el fin de aplicar las medidas de ordenación, control y racionalización del litigio, para cuyo efecto elaborará un Proyecto del plan del caso que contenga el señalamiento



específico de las fechas de audiencias, para su presentación a las partes, regulado en el (artículo 518) del Proyecto del Código de Familia.

5.3.4.- Única audiencia.

Los asuntos donde no exista litis serán ventilados y resueltos en una única audiencia, la inicial, disponiéndose en la sentencia los actos de seguimiento y control que corresponde ejercer al juez, dada la naturaleza del asunto, regulado en el (artículo 519) del Proyecto del Código de familia.

5.5.- De la Audiencia inicial

5.5.1.- Finalidad de la audiencia inicial

En esta audiencia el juez procederá a interrogar a las partes para delimitar las cuestiones en disputa, fijar los hechos litigiosos para delimitar el campo de las materias que pueden ser conciliadas, o bien invitar a las partes a reajustar sus pretensiones o para que desistan de las pruebas que resulten innecesarias. Se procurará la conciliación o el avenimiento amigable, se subsanarán los defectos, se aceptarán o rechazarán las pruebas y se decidirán las excepciones previas, se decretan las medidas cautelares, se fijan las pensiones provisionales, se determina sobre la fianza e inventario, en los casos de tutela, se provee de tutor cuando sea necesario, y se fijará el día y hora para la audiencia de vista de la causa, que tendrá lugar dentro de los quince días siguientes a la celebración de la audiencia inicial. Regulado en el (artículo 520) del Proyecto del Código de Familia.

5.5.2.- Prórroga de audiencias

Las personas que no pudieren concurrir en la fecha señalada a las audiencias, comunicarán al juez, mediante escrito, la imposibilidad de su asistencia y justificación de su causa, todo lo cual será valorado por el juez competente, quien decidirá si acepta o no la prórroga de la audiencia. De denegarse la prórroga el



juez aperebirá a la parte el derecho que le asiste de constituir apoderado o sustituir el poder que tuviere. Regulado en el (artículo 521) del Proyecto del Código de Familia.

5.5.3.- Identificación de los problemas jurídicos y fácticos en los que se centrará el debate probatorio.

En el desarrollo de la audiencia inicial el juez, antes de decretar las pruebas identificará los temas objeto de la decisión clasificando los problemas jurídicos, precisando los puntos centrales de controversia y en la dirección del debate probatorio clasificará y ordenará las pruebas, de acuerdo al fin que cada una persiga, de todo lo cual quedará constancia en el Acta que al efecto levante el Secretario; el llamamiento a audiencia de vista de la causa se hará mediante auto, notificado a las partes, al concluir la audiencia regulado en el (artículo 522) del Proyecto del Código de Familia.

5.5.4.- Ausencia del actor en la audiencia inicial

Si el actor o reconviente no se presenta a la audiencia inicial, sin causa que a juicio del juez se justifique, se tendrá por desistido del proceso y se le impondrán las costas. Regulado en el (artículo 523) del Proyecto del Código de Familia.

5.5.5.- Designación de especialistas asesores

En el auto que señale fecha para audiencia de vista de la causa se designarán los asesores necesarios para cumplir con los fines probatorios determinados en el plan del caso, su designación dentro de los especialistas que integran el consejo técnico asesor, previa verificación de su disposición para practicar la prueba y presentarla en la audiencia, regulado en el (artículo 524) del Proyecto del Código de Familia.



5.6.- De la Audiencia de vista de la causa

5.6.1.- Finalidad de la audiencia de vista de la causa

La audiencia de vista de la causa constituye un acto en que todos los sujetos intervinientes en el proceso informan y prueban de manera personal, oral y directa sobre los hechos objetos del debate, regulado en el (artículo 525), del Proyecto del Código de Familia.

5.6.2.- Etapas iniciales en la vista de la causa

En el día, lugar y hora señalados el juez y las partes se constituirán para la celebración de la audiencia, verificando la presencia de todos los sujetos intervinientes llamados, luego que el juez tome la promesa de ley a los que estuvieren llamados a ello, intervendrá fijando los puntos definidos como objeto de debate a partir de lo fijado en la audiencia inicial. Explicará a las partes la importancia y trascendencia de este acto. Alertará a las partes del deber de tolerancia y respeto que debe guardarse en el debate, resaltando los máximos intereses jurídicos a tutelar en el proceso.

Pedirá a las partes que de forma sucinta repasen sus pretensiones, en el orden; primero del demandante; luego, el demandado. Si quedaren pendientes sin resolver cuestiones incidentales se resolverán en el acto, se podrán alegar hechos nuevos, se permitirán las aclaraciones y complementaciones, que sean necesarias y se resolverán excepciones. El Juez procurará tramitar en la audiencia los asuntos incidentales, respetando los términos de traslado y las oportunidades probatorias otorgadas en el presente Código. Regulado en el (artículo 526) del Proyecto del Código de Familia.

5.6.3.- Clausura anticipada

Si las partes arribaren a acuerdo en esta audiencia, oído el parecer de la Procuraduría de la Familia y del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, el



juez puede prescindir de la práctica de pruebas y dictar sentencia en la que se haga constar el acuerdo alcanzado. Regulado en el artículo 527 del Proyecto del Código de Familia.

5.6.4.- Práctica de pruebas

Luego de las exposiciones en la etapa de inicio, se procederá a la práctica de las pruebas admitidas durante la audiencia inicial, en igual orden en el que intervinieron las partes. Podrán proponerse nuevas pruebas, en cuyo caso el juez decidirá sobre su admisión, poniéndolo en conocimiento de la contraparte, para que pueda ejercer su derecho de oposición. Regulado en el (artículo 528) del Proyecto del Código de Familia.

5.6.5.- Continuación de la audiencia de vista de la causa

Cuando no fuere posible practicar todas las pruebas en única sesión, se señalará la continuación de la audiencia para dentro de los cinco días hábiles posteriores. La continuación se hará en una sesión adicional, sin que pueda producirse la suspensión por causa distinta a fuerza mayor o caso fortuito. Regulado en el (artículo 529), del Proyecto del Código de Familia.

5.6.6.- Objeción

Las partes podrán objetar fundadamente las preguntas que se formulen, así como las decisiones que el juez adopte respecto de ellas. Si la objeción se rechaza, quien la formuló puede pedir que se consigne en acta de la audiencia. Regulado en el (artículo 530) del Proyecto del Código de Familia.



5.6.7.- Alegatos finales

Concluida la práctica de las pruebas el juez concederá la palabra, por el orden con que iniciaron para que realicen los alegatos finales, circunscritos a los hechos en debate y la valoración jurídica de las pruebas practicadas.

Luego concederá la palabra a las autoridades administrativas intervinientes en el proceso. Para los alegatos finales las partes podrán auxiliarse de notas o apuntes tomados, el juez impedirá divagaciones o repeticiones sin sentido durante los alegatos finales y en caso de manifiesto abuso en el uso de la palabra podrá apercibir a la parte y limitar prudentemente su tiempo. Para esta actuación tomará en cuenta la naturaleza del proceso y el grado de dificultad del tema en litis, regulado en el (artículo 531) del Proyecto del Código de Familia.

5.6.8.- Deliberación

Concluido los alegatos finales el juez se declara en sesión privada para deliberar y resolver, en un lapso de tiempo prudencial en el que las partes, en local distinto, esperarán el resultado del proceso.

Concluida la deliberación, el juez hará llamar a las partes para notificar la sentencia, Si la complejidad del asunto lo ameritare, puede el juez citar para una audiencia de lectura de sentencia, a efectuarse dentro del quinto día, contado a partir de la última audiencia, bajo responsabilidad disciplinaria si lo incumpliere. (artículo 532) del Proyecto del Código de Familia.

5.7.- Sentencia

La sentencia se pronunciará sobre todos los puntos en debate con precisión y claridad respecto del asunto planteado, los hechos materia de debate, las pruebas y motivaciones que respaldan la sentencia, sin el recuento de la actuación



procesal. La sentencia quedará notificada a las partes con la lectura integral que se hará de ella en la propia audiencia.

En la sentencia, el juez debe apercibir a las partes del derecho que les asiste para interponer recurso de apelación. (artículo 533) del Proyecto del Código de Familia.

5.7.1.- Apelación de la sentencia

Las partes deberán decidir, en el propio acto de la audiencia de vista, si hacen o no uso de su derecho de apelar la sentencia. El juez no podrá oponerse a la admisión del recurso.

Interpuesta la apelación se recogerá en el acta de la sesión. El juez, en el propio acto, la admitirá y con ello se tendrá por notificadas a todas las partes, quienes dentro del término común de cinco días hábiles, deberán presentar los escritos en que sustenten sus intereses, a la sala civil del tribunal de apelaciones, con copias para todos intervinientes.

El juez a quo, dentro del mismo término, remitirá el expediente íntegro de la causa, con constancia de remisión, so pena de responsabilidad disciplinaria. (artículo 534) del Proyecto del Código de Familia.

5.8.- Audiencia única en apelación

5.8.1.- Señalamiento y objeto de audiencia única

Recibido el expediente y los escritos de las partes, el Tribunal de Apelaciones citará para audiencia, a celebrarse dentro de los quince días a la recepción del expediente y escritos.

Será objeto de esta audiencia, escuchar los alegatos de las partes, extraordinariamente se puede disponer la práctica de alguna prueba para mejor



proveer, deliberar, dictar sentencia y notificar en el acto a las partes. El Tribunal de Apelaciones deberá agotar las fases del proceso verbal en una única sesión. Cuando esto no fuere posible, por la naturaleza de los temas en debate, de manera excepcional el tribunal podrá señalar la continuación de la audiencia en otra sesión, a celebrarse dentro de los cinco días posteriores. (artículo 535) del Proyecto del Código de Familia.

5.8.2.- Reglas para la audiencia única

Para el desarrollo de esta audiencia, se observarán las disposiciones previstas para la audiencia de vista de la causa.

El Tribunal de Apelaciones advertirá a las partes que en sus alegatos se circunscriban a las violaciones de normas jurídicas, que considere se han producido en la sentencia impugnada y a la valoración jurídica de las nuevas pruebas que se hubieren practicado. (artículo 536) del Proyecto del Código de Familia.

5.8.3.- Sentencia del Tribunal de Apelaciones

Concluida las alegaciones de apelación, el tribunal de apelaciones se retira a deliberar. Posterior a la deliberación, notificarán la sentencia a las partes, de forma oral.

Si la complejidad del asunto lo ameritare, podrá el tribunal citar para una audiencia de lectura de sentencia, a efectuarse dentro del quinto día, contado a partir de la última audiencia, bajo responsabilidad disciplinaria si lo incumpliere. (artículo 537) del Proyecto del Código de Familia.



5.8.4.- Remisión del expediente

Concluido el proceso el juez ad-quem, remitirá el expediente y su sentencia al juzgado a quo, para su archivo, con señalamiento, si lo hubiere de las omisiones observadas y recomendaciones del caso. (artículo 538) del Proyecto del Código de Familia.

5.9.- Ejecución de sentencia extranjera.

5.9.1.- Ideas generales

Las resoluciones judiciales, en principio, sólo producen efectos internos, pues es un acto de soberanía que tiene por límite los linderos del territorio nacional. No obstante, por razones de convivencia y justicia internacional, más acentuadas en la sociedad moderna en donde los individuos de diferentes naciones establecen vínculos y relaciones que rebasan las fronteras nacionales, se permite que las resoluciones judiciales, sentencias, Emplazamientos, oficios, notificaciones, produzcan efectos en otro país, aunque existen diferencias con respecto a la extensión y forma de reconocerlos.

Para que una sentencia extranjera pueda ejecutarse en Nicaragua o bien ejecutarse en un país extranjero, se necesita de una resolución de la Corte Suprema de Justicia en caso de Nicaragua, y en el caso de un país extranjero igualmente se necesita una resolución de una Instituciones encargada nombrada autorizando tal cosa, y que es denominada Exéquatur o Pareatis.

5.9.2.- Resoluciones que necesitan Exéquatur

Necesitan del Exéquatur, ya sea para su ejecución o para oponerse como cosa juzgada, todas las resoluciones judiciales cualquiera que sea la materia (civil, mercantil, contenciosa, voluntaria, etc.) y clase de tribunal (arbitrales, ordinarios y



especiales).

Se considera esencial definir el exhorto para poder comprender cual es su finalidad. **La carta rogatoria o exhorto internacional**, es un medio de comunicación procesal entre autoridades que se encuentran en distintos países, y que sirve para practicar diversas diligencias en otro lugar en el que el juez del conocimiento no tiene jurisdicción. Dichas diligencias van encaminadas a la solicitud que formula un juez a otro de igual jerarquía, a fin de que se practique ante el segundo el desahogo de una notificación de documentos o citación de personas, emplazamientos a juicio, etc., y que recurren a ello, en virtud de que por cuestiones de jurisdicción, tienen una limitante en cuanto a su ámbito de competencia espacial, ya que no pueden actuar más que en el territorio que les circunscribe. Lo anterior se sustenta en base a las diversas Convenciones o Tratados Internacionales en los que se contemple la tramitación de cartas rogatorias, y a falta de ello, en base a la reciprocidad internacional (Haya, Tratado Internacional de Asistencia Reciproca TIAR, 1947).

Por lo tanto, la definición de carta rogatoria (también llamada "comisión rogatoria" o "exhorto internacional), es un medio de comunicación que dirige una autoridad a otra que se encuentra en un país distinto, por el que se solicita la practica de determinadas diligencias que son necesarias para substanciar el procedimiento que se sigue en el primero, atendiendo a los tratados internacionales de los cuales formen parte, y a falta de los mismos, al principio de reciprocidad. (Cabanela).

Por lo tanto en materia internacional el mecanismo a emplearse para notificar al demandado en el extranjero será el exhorto, este se encuentra regulado en el título quinto " Exhortos o Comisiones Rogatorias" (artículos 388 al 393) del Código de Bustamante, el que establece que todas las diligencias Judiciales de un Estado contratante que necesite practicar las diligencias en otro, se efectuara mediante exhorto o comisión rogatoria cursados por la vía diplomática, sin embargo los



Estados contratantes podrán pactar o aceptar entre si en materia civil o criminal cualquiera otra forma de transmisión (artículo 388). Código de Bustamante.

5.9.3.- Las tres reglas sobre la concesión del Exéquatur

Los arts. 542, 543 y 544 Pr., señalan tres reglas o criterios fundamentales para la concesión del Exéquatur; a saber:

a) El tribunal primero aplicará los tratados internacionales que haya celebrado Nicaragua con el estado de donde proviene la sentencia que se trata de ejecutar (art. 542 inc. 1 Pr.). Entre estos tratados tenemos la Convención de Derecho Internacional Privado que contiene el Código de Derecho Internacional Privado (denominado Código de Bustamante). Esto significa que si la sentencia fue dictada en cualquiera de los países signatarios de dicha convención habrá que resolver el caso de acuerdo con ella.

b) Si no existe tratado con el estado en que fue dictada la sentencia que se trata de ejecutar se aplica el criterio de la reciprocidad, lo cual significa que se ejecutará si igualmente se acepta su ejecución en el país de origen (art. 543 inc. 2 Pr.). Esta reciprocidad es positiva y negativa (se ejecuta cuando se permite la ejecución de una sentencia igual en el país de origen en la ley o en la jurisprudencia (se puede prohibir o negar la ejecución de una sentencia por ley o por jurisprudencia en el país de origen) (Justicia C. D., 7 de de Noviembre de 1945) (Justicia C. S., Sobre reciprocidad: B.J, 6 de Febrero de 1948) (Justicia C. S., Sentencia 12 m., 1 de Octubre de 1963) (Justicia C. S., B.J, 1965)

El art. 543 Pr., no hace otro papel que el de desarrollar el art. 542 Pr., al disponer que si la ejecutoria procediere de una nación en que por jurisprudencia no se dé cumplimiento a la expedida por los tribunales nicaragüenses no tendrá fuerza en Nicaragua.



c) Cuando faltan los tratados y no existen precedentes que permitan aplicar el principio de reciprocidad, la sentencia se podrá ejecutar en Nicaragua si reúne las Circunstancias señaladas en el art. 544 Pr., a saber:

- 1) que la sentencia ejecutoriada se haya dictado a consecuencia del ejercicio de una acción personal;
- 2) que la obligación sea lícita en Nicaragua;
- 3) que la ejecutoria reúna los requisitos necesarios en la nación en que se haya dictado para ser considerado como auténtica y los que las leyes nicaragüenses requieran para que hagan fe en Nicaragua;
- 4) que en el litigio se haya dado intervención al reo, salvo que constare haber sido declarado rebelde por no haber comparecido después de haber sido citado;
- 5) que la sentencia no sea contraria al orden público;
- 6) que sea ejecutoria en el país de origen.

Cuando se trate de laudos arbitrales la parte final del art. 544 Pr., dispone que las tres reglas precedentes en el orden establecido son aplicables, pero además exige el visto bueno de un Tribunal Superior del país en donde se hubiere dictado, porque como sabemos los árbitros son jueces particulares y, como consecuencia, se pide ese visto bueno para comprobar que el laudo es auténtico y tiene fuerza ejecutiva. El art. 16 Pr., contiene reglas especiales para la ejecución de sentencias, autos o fallos arbitrales dictados en países centroamericanos tendrán en Nicaragua la misma fuerza que en el de su origen, si reúnen los siguientes requisitos:

- 1.- Que hayan sido expedidos por Tribunal competente.



- 2.- que tengan el carácter de ejecutoriados en el lugar de donde proceden.
- 3.- Que la partes vencida haya sido citada y representada o declarada rebelde con arreglo a las leyes del lugar del juicio.
- 4.- Que no se opongan al orden público o a las leyes del Estado de Nicaragua.
- 5.- Que preceda declaratoria de la Corte Suprema del Estado de Nicaragua sobre los anteriores puntos.
- 6.- Que se haga constar su autenticidad y eficacia por el Vo. Bo. u otro signo de aprobación emanado de un tribunal superior ordinario del país, donde se hubiere dictado el fallo. artículos 22, 542, 544, 985, 1.129 Pr.; (Justicia C. S., B.J 5482).Artos. 402, 423 Código Bustamante.

5.9.4.- Tribunal competente para conceder el Exéquatur

De acuerdo con el art. 545 Pr, la ejecución de sentencia extranjera se pedirá a la Corte Suprema de Justicia, el más alto tribunal de la república, salvo lo que dispongan los tratados. (justicia, 3 de Abril de 1964)

De la misma manera en caso para la notificación de una resolución, emplazamiento, sentencia, La Corte Suprema tendrá que autenticar la resolución o sentencia, posteriormente se tramitara el envío por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), esto se encuentra regulado en el (artículo123) de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

5.10.- Procedimiento del Exéquatur

5.10.1.- Negocios contenciosos

La parte interesada en pedir la ejecución presentará solicitud a la Corte Suprema aparejada de la ejecutoria. Si esta fuere extendida en lengua extranjera de previo se procederá a la traducción. De la solicitud se dará conocimiento por tres días a la parte contra la cual se pretende ejecutar la sentencia y al procurador de justicia. Vencido este término el tribunal decidirá si se da o no cumplimiento a la sentencia.



Contra esta resolución no hay recurso alguno (art. 546 Pr.). Cuando la sentencia se alega como prueba no necesita del exéquatur, pero si cuando se alega como cosa juzgada.

5.10.2.- Jurisdicción voluntaria

Como en los actos de jurisdicción voluntaria no existe contraparte contra la que se dirigen la ejecución, la Corte Suprema resolverá con la sola audiencia del Ministerio Público (art. 548 Pr). Con cierta flexibilidad se ha llegado a pensar que cuando lo invocado es el acto o contrato y no las resoluciones dadas en un procedimiento que tiende meramente a darles validez, no se necesita del Exequátur. *(La Corte Suprema, para la concesión del auto de Exhorto o pariatís relacionada con la resolución de un testamento otorgado por un extranjero, mandó a oír a su hija menor que había obtenido declaratoria de herederos en Nicaragua (Justicia C. S., B.J, 5 de Abriol de 1921).*

Ejemplo: la sentencia que ordena la protocolización de una memoria testamentaria, la sentencia que autoriza al tutor a celebrar un contrato a nombre del pupilo, etc. Sin embargo, nuestra Corte Suprema se ha excedido al declarar sin distinción alguna que no es necesario el Exéquatur a las resoluciones de jurisdicción voluntaria. (Justicia C. S., Sentencia 11:30am, 24 de noviembre de 1921) (Justicia C. S., B.J, 21 agosto de 1937),

Doctrinalmente los negocios de jurisdicción voluntaria no necesitan del exéquatur porque las resoluciones no producen cosa juzgada ni son ejecutables.

El Código de Bustamante distingue entre negocios de jurisdicción voluntaria en asuntos mercantiles y civiles. Los primeros se ejecutan como las sentencias extranjeras y los segundos gozan de extraterritorialidad si reúnen las condiciones que se señalan para la eficacia de los documentos otorgados en el país extranjero y proceden de juez competente (arts. 434 y 435).



5.10.3.- Competencia y procedimiento para ejecutar la sentencia extranjera

Una vez que se concede el exéquatur la ejecución será tramitada de acuerdo a lo establecido en las leyes nicaragüenses para la ejecución de las sentencias nacionales y será competente el juez del domicilio del ejecutado y si no tiene domicilio en la república el que elija el acreedor (art. 542 y 552 Pr). Cuando existen tratados debe observarse de preferencia el procedimiento y competencia en ellos establecidos.

5.10.4.- Ejecución de sentencias de tribunales internacionales

Según el art. 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las ejecutorias de sentencias definitivas expedidas por tribunales internacionales reconocidos por nuestro país a través de tratados debidamente ratificados serán de obligatorio cumplimiento dentro del territorio nacional, previa resolución de Pareatis o exéquatur dictados por la Corte Suprema. La Corte señalará el juez de primer grado que dará cumplimiento a la misma. Si la solicitud de pareatis o exequátur se hiciera directamente por el tribunal internacional a través de la vía diplomática, la resolución se emitirá sin gestión de parte o sin sustanciarla, correspondiendo al Ministerio de Relaciones Exteriores remitir a la Secretaría de la Corte Suprema de la República la documentación correspondiente.

5.10.5.- Requisitos

Para que la sentencia o laudo arbitral extranjero pueda ser homologado debe atenderse al cumplimiento de ciertos requisitos:

El Código de Bustamante, en su (artículo 423), dice: "Toda sentencia civil o contencioso-administrativa dictada en uno de los Estados contratantes tendrá fuerza y podrá ejecutarse en los demás si reúne las siguientes condiciones:



- 1.- Que tenga competencia para conocer del asunto y juzgarlo, de acuerdo con las reglas de este Código, el juez o tribunal que la haya dictado.
- 2.- Que las partes hayan sido citadas personalmente o por su representante legal, para el juicio.
- 3.- Que el fallo no contravenga al orden público o al derecho público del país en que quiere ejecutarse.
- 4.- Que sea ejecutorio en el Estado en que se dicte.
- 5.- Que se traduzca autorizadamente por un funcionario o intérprete oficial del Estado en que ha de ejecutarse, si allí fuere distinto el idioma empleado.
- 6.- Que del documento en que conste, reúna los requisitos necesarios para ser considerado como auténtico en el Estado de que proceda, y los que requiera, para que haga fe, la legislación del Estado en que se aspira a cumplir la sentencia ” regulado en el (artículo 423) del Código de Bustamante.

La Convención Interamericana sobre Eficacia de Sentencias y Laudos Extranjeros también señala en su (artículo 2) los requisitos que deben observarse:

“Art. 2.- Las sentencias, laudos arbitrales y resoluciones jurisdiccionales extranjeras a que se refiere el artículo 1, tendrán eficacia extraterritorial en los Estados partes si reúnen las siguientes condiciones:

- 1.- Que vengan revestidos de las formalidades externas necesarias para que sean considerados auténticos en el Estado de donde proceden.



2.- Que la sentencia, laudo y resolución jurisdiccional y los documentos anexos que fueren necesarios según la presente convención, estén debidamente traducidos al idioma oficial del Estado donde deban surtir efecto.

3.- Que se presenten debidamente legalizados de acuerdo con la ley del Estado en donde deban surtir efecto.

4.- Que el juez o tribunal sentenciador tenga competencia en la esfera internacional para conocer y juzgar del asunto de acuerdo con la ley del Estado donde deban surtir efecto.

5.- Que el demandado haya sido notificado o emplazado en forma legal de modo sustancialmente equivalente a la aceptada por la ley del Estado donde la sentencia, laudo y resolución jurisdiccional deban surtir efecto.

6.- Que se haya asegurado la defensa de las partes.

7.- Que tengan el carácter de ejecutoriados o, en su caso, fuerza de cosa juzgada en el Estado en que fueron dictados.

8.- Que no contraríen manifiestamente los principios y las Leyes de orden público del Estado en que se pida el reconocimiento o la ejecución

5.10.6.- Los documento que el recurrente debe de aportar con la solicitud de exequátur

a) Copia auténtica de la sentencia, debidamente legalizada o apostillada.

b) Certificado emitido por el tribunal extranjero que acredite que la sentencia es firme, debidamente legalizado o apostillado.



- c) Certificado emitido por el tribunal extranjero que acredite de que la sentencia ha sido notificada al demandado o en su caso, que ha sido dictada en rebeldía, debidamente legalizado o apostillado.
- d) Fotocopia legalizada de la identificación del solicitante.
- e) Convenio o acuerdo regulador, debidamente legalizado o apostillado (si la Obligación de Alimento, ha sido de mutuo acuerdo).
- f) Traducción jurada de la sentencia, de los certificados y del convenio regulador, si están en un idioma diferente al español.
- g) Certificado literal de nacimiento de hijos (si los hubiera).
- h) Poder general para pleitos a nombre de procurador y abogado. Si los cónyuges residen en el extranjero, podrán emitirlo en el consulado español.

En términos internacionales Nicaragua forma parte del **Convenio Sobre La Obtención De Alimentos En El Extranjero, Hecho En Nueva York El 20 De Junio De 1956**

Este tratado los Estados lo consideraron como urgente, pues trata de solucionar de la Prestación de Alimentos, originado por la situación de las personas sin recursos que tienen derecho a obtener alimentos de otras que se encuentran en el extranjero, se considera que el ejercicio en el extranjero de acciones sobre prestación de alimentos o la ejecución en el extranjero de decisiones relativas a la obligación de prestar alimentos suscita graves dificultades legales y de orden práctico, dispuestas a establecer los medios conducentes a resolver ese problema y a subsanar las mencionadas dificultades, los Estados contratantes convinieron lo siguiente:



5.10.7.- Alcance de la Convención.

1. La finalidad de la convención es facilitar a una persona, llamada en lo sucesivo demandante, que se encuentra en el territorio de una de las partes contratantes, la obtención de los alimentos que pretende tener derecho a recibir de otra persona, llamada en lo sucesivo demandado, que está sujeta a la jurisdicción de otra Parte contratante. Esta finalidad se perseguirá mediante los servicios de organismos llamados en lo sucesivo autoridades remitentes e instituciones intermediarias.
2. Los medios jurídicos a que se refiere la convención son adicionales a cualesquiera otros medios que puedan utilizarse conforme al derecho interno o al derecho internacional y no sustitutivo de los mismos. (Artículo1)

5.10.8.- Designación de Organismos.

1. En el momento de depositar el instrumento de ratificación o adhesión cada parte contratante designará una o más autoridades judiciales o administrativas para que ejerzan en su territorio las funciones de autoridades remitentes.
2. En el momento de depositar el instrumento de ratificación o adhesión cada parte contratante designará un organismo público o privado para que ejerza en su territorio las funciones de institución intermediaria.
3. Cada parte contratante comunicará sin demora al secretario general de las Naciones Unidas las designaciones hechas conforme a lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 y cualquier modificación al respecto.
4. Las autoridades remitentes y las instituciones intermediarias podrán comunicarse directamente con las autoridades remitentes y las instituciones intermediarias de las demás partes contratantes. (artículo2)



Solicitud a la autoridad remitente. 1. Cuando el demandante se encuentre en el territorio de una de las Partes Contratantes, denominada en lo sucesivo Estado del demandante, y el demandado esté sujeto a la jurisdicción de otra parte contratante, que se denominará Estado del demandado, el primero podrá presentar una solicitud a la autoridad remitente de su Estado encaminada a obtener alimentos del demandado.

2. Cada parte contratante informará al secretario general acerca de los elementos de prueba normalmente exigidos por la ley del Estado de la institución intermediaria para justificar la demanda de prestación de alimentos, de la forma en que la prueba debe ser presentada para ser admisible y de cualquier otro requisito que haya de satisfacerse de conformidad con esa ley.

3. La solicitud deberá ir acompañada de todos los documentos pertinentes, inclusive, en caso necesario, un poder que autorice a la institución intermediaria para actuar en nombre del demandante o para designar a un tercero con ese objeto. Se acompañará también una fotografía del demandante y, de ser posible, una fotografía del demandado.

4. La autoridad remitente adoptará las medidas a su alcance para asegurar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley del Estado de la institución intermediaria. sin perjuicio de lo que disponga dicha Ley, la solicitud expresará:

a) El nombre y apellidos del demandante, su dirección, fecha de nacimiento, nacionalidad y ocupación, y en su caso, el nombre y dirección de su representante legal;

b) El nombre y apellidos del demandado y, en la medida en que sean conocidas por el demandante, sus direcciones durante los últimos cinco años, su fecha de nacimiento, nacionalidad y ocupación;



c) Una exposición detallada de los motivos en que se funda la pretensión del demandante y del objeto de ésta y cualesquiera otros datos pertinentes, tales como los relativos a la situación económica y familiar del demandante y el demandado. (artículo3)

5.10.9.- La Transmisión de los documentos.

1. la autoridad remitente transmitirá los documentos a la institución intermediaria del Estado del demandado, a menos que considere que la solicitud no ha sido formulada de buena fe.

2. Antes de transmitir estos documentos la autoridad remitente se cerciorará de que los mismos reúnen los requisitos de forma de acuerdo con la ley del Estado del demandante.

3. La autoridad remitente podrá hacer saber a la institución intermediaria su opinión sobre los méritos de la pretensión del demandante y recomendar que se conceda a éste asistencia jurídica gratuita y exención de costas. (Artículo 4)

5.10.10.- La Transmisión de sentencias y otros actos judiciales.

1. La autoridad remitente transmitirá, a solicitud del demandante y de conformidad con las disposiciones del artículo 4, cualquier decisión provisional o definitiva, o cualquier otro acto judicial que haya intervenido en materia de alimentos en favor del demandante en un tribunal competente de cualquiera de las partes contratantes, y si fuera necesario y posible, copia de las actuaciones en que haya recaído esa decisión.

2. Las decisiones y actos judiciales a que se refiere el párrafo precedente podrán ser transmitidos para reemplazar o completar los documentos mencionados en el (artículo 3).



3. El procedimiento previsto en el artículo 6. podrá incluir, conforme a la ley del Estado del demandado, el exequátur o el registro o una nueva acción basada en la decisión transmitida en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1. Del (artículo 5)

5.10.11.- Las Funciones de la Institución Intermediaria.

1. La institución intermediaria, actuando siempre dentro de las facultades que le haya conferido el demandante, tomará todas las medidas apropiadas para obtener el pago de alimentos, inclusive por transacción, y podrá, en caso necesario, iniciar y proseguir una acción de alimentos y hacer ejecutar cualquier sentencia, decisión u otro acto judicial.

2. La institución intermediaria tendrá convenientemente informada a la autoridad remitente. Si no pudiere actuar, le hará saber los motivos de ello y le devolverá la documentación.

3. No obstante cualquier disposición de esta convención, la ley aplicable a la resolución de las acciones de alimentos y de toda cuestión que surja con ocasión de la misma será la ley del Estado del demandado, inclusive el derecho internacional privado de ese estado. (artículo6)

5.10.12.- De los Exhortos Internacionales.

Si las leyes de las dos partes contratantes interesadas admiten exhortos, se aplicarán las disposiciones siguientes:

a) El tribunal que conozca de la acción de alimentos podrá enviar exhortos para obtener más pruebas, documentales o de otra especie, al tribunal competente de la otra parte contratante o a cualquier otra autoridad o institución designada por la parte contratante en cuyo territorio haya de diligenciarse el exhorto.



b) A fin de que las partes puedan asistir a este procedimiento o estar representadas en él, la autoridad requerida deberá hacer saber a la institución intermediaria, a la autoridad remitente que corresponda y al demandado, la fecha y el lugar en que hayan de practicarse las diligencias solicitadas.

c) Los exhortos deberán cumplimentarse con la diligencia debida, y si a los cuatro meses de recibido un exhorto por la Autoridad requerida no se hubiere diligenciado deberán comunicarse a la Autoridad requirente las razones a que obedezca la demora o la falta de cumplimiento.

d) La tramitación del exhorto no dará lugar al reembolso de derechos o costas de ninguna clase.

5.10.13.- Sólo podrá negarse la tramitación del exhorto:

1) Si no se hubiere establecido la autenticidad del documento.

2) Si la parte contratante en cuyo territorio ha de diligenciarse el exhorto juzga que la tramitación de éste menoscabaría su soberanía o su seguridad. (artículo 7) La Modificación de decisiones judiciales. Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán asimismo a las solicitudes de modificación de decisiones judiciales dictadas en materia de prestación de alimentos. (artículo 8)

5.10.14.- Las Exenciones y facilidades.

1. En los procedimientos regidos por esta convención los demandantes gozarán del mismo trato y de las mismas exenciones de gastos y costas otorgadas por la ley del Estado en que se efectúe el procedimiento a sus nacionales o a sus residentes.



2. No podrá imponerse a los demandantes por su condición de extranjeros o por carecer de residencia, caución, pago o depósito alguno para garantizar el pago de costas o cualquier otro cargo.

3. Las autoridades remitentes y las instituciones intermediarias no percibirán remuneración de ninguna clase por los servicios prestados de conformidad con esta Convención. (artículo 9)

Las transferencias de fondos. la parte contratante cuya legislación imponga restricciones a la transferencia de fondos al extranjero concederá la máxima prioridad a la transferencia de fondos destinados al pago de alimentos o a cubrir los gastos a que den lugar los procedimientos previstos en esta convención (artículo 10)

Las cláusulas relativas a los Estados federales. Con respecto a los Estados federales o no unitarios, se aplicarán las disposiciones siguientes:

a) En lo concerniente a los artículos de esta convención cuya aplicación dependa de la acción legislativa del poder legislativo federal, las obligaciones del gobierno federal serán, en esta medida, las mismas que las de las partes que no son Estados federales.

b) En lo concerniente a los artículos de esta convención cuya aplicación dependa de la acción legislativa de cada uno de los Estados, provincias o cantones constituyentes que, en virtud del régimen constitucional de la federación, no estén obligados a adoptar medidas legislativas, el gobierno federal, a la mayor brevedad posible y con recomendación favorable, comunicará el texto de dichos artículos a las autoridades competentes de los Estados, provincias o cantones.

c) Todo estado federal que sea parte en la presente convención proporcionará, a solicitud de cualquiera otra parte contratante que le haya sido transmitida por el secretario general, un resumen de la legislación y de las prácticas vigentes en la



federación y en sus entidades constitutivas con respecto a determinada disposición de la convención, indicando hasta qué punto, por acción legislativa o de otra índole, se ha aplicado tal disposición. (artículo 11)

La aplicación territorial. las disposiciones de la presente convención se aplicarán igualmente a todos los territorios no autónomos o en fideicomiso y a todos los demás territorios de cuyas relaciones internacionales sea responsable una parte contratante, a menos que dicha parte contratante al ratificar la convención o adherirse a ella, haya declarado que no se aplicará a determinado territorio o territorios que estén en esas condiciones. Toda parte contratante que haya hecho esa declaración podrá en cualquier momento posterior extender la aplicación de la convención al territorio o territorios así excluidos, o a cualquiera de ellos, mediante notificación al secretario general. (artículo 12)

CAPÍTULO VI

6. PRINCIPALES CAMBIOS EN LOS ELEMENTOS NORMATIVOS DE LA OBLIGACION DE DAR ALIMENTO

6.1 Del Número Clausus Al Sistema Abierto.

El Proyecto de Código de Familia ha optado por sentar con claridad las características generales de las medidas que pueden ser precisas para evitar que se frustre la efectividad de una futura sentencia, perfilando unos presupuestos y requisitos igualmente generales, de modo que resulte un régimen abierto al momento de reclamar y ejecutar la sentencia de la obligación de dar alimento en el extranjero y no un sistema de número limitado o cerrado, pero la generalidad y la amplitud no son vaguedad, inconcreción o imprudencia, la ley se apoya en doctrina, jurisprudencia sólida y de general aceptación, también toma en cuenta las convenciones internacionales estos para que el demandante tenga una mayor protección de sus derechos en el extranjero.



En la actualidad la Ley de alimento vigente Ley 143, regula un número específico en cuanto a la obligación de dar alimentos, en el capítulo I, II, III, IV, V, VI y VII título regulados en los (artículos. 1 al 29):

1.- La Ley de alimentos 143, se **limita en cuanto al concepto de Alimento**, el (artículo 2) establece, **que se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para satisfacer las necesidades alimentarias propiamente dichas**, de atención médica y medicamentos, esto comprende la asistencia de rehabilitación y de educación especial, cuando se trate de personas con severas discapacidades, independientemente de su edad y según la posibilidad económica del dador de alimentos, de vestuario y habitación, de educación e instrucción y aprendizaje de una profesión u oficio, culturales y de recreación.

2.- Cesación de la obligación de dar alimento (artículo 8, 27) de la Ley de alimentos Ley 143, implica dejar de dar alimentos, cuando el alimentista alcanza su mayoría de edad, cuando hayan sido declarado mayores por sentencia judicial, emancipado en escritura pública por matrimonio o cuando sea mayor de dieciocho años, así mismo cesa cuando el alimentario se ve imposibilitado de continuar dando la alimentación al alimentista o cuando termina la necesidad del que los recibía.

3.- **La tasación de los alimentos se encuentran bajo el criterio prudencial del Juez**, el (artículo 4), establece que para fijar la pensión el juez deberá tomar en cuenta:

a.- El capital o los ingresos económicos del alimentante.

b.- Su último salario mensual y global ganado. Si el alimentante renunciare a su trabajo para no cumplir con su obligación, el último salario mensual será la base para fijar la pensión.



c.- Si el alimentante trabajare sin salario fijo o no se pudiere determinar sus ingresos, el juez hará inspección en sus bienes y determinará la renta presuntiva.

ch.- La edad y necesidades de los hijos.

d.- La edad y necesidades de otros alimentistas.

e.- Los gastos personales del alimentante, el que en ningún caso podrán evadir las responsabilidades de la pensión.

Por ser el procedimiento de alimento actual, un sistema escrito la resolución judicial debe basarse solo en el material procesal depuesto por escrito en los autos, es decir, dentro del expediente. En este, las partes presentan sus alegatos documentalmente, caracterizándose este procedimiento por la falta de relaciones inmediatas entre el juzgador y las partes, la falta de publicidad, la secuencia muy prolongada de plazos y la separación preclusiva de las etapas procesales, así como por la valoración de las pruebas de acuerdo con criterios predeterminados. Una característica esencial lo fue también el excesivo formalismo, en donde lo importante era la supervivencia de las formas más que de los contenidos.

4.- La única manera de entender las ventajas de la oralidad y los motivos por los cuales los diferentes sistemas procesales tienden a ella, es mostrando sus diferencias con la escritura, siguiendo a Montero Aroca (1979: 256 y sigts.) se hace una confrontación de la oralidad frente a la escritura, la cual solo es posible si se toman en cuenta los principios que informan la oralidad y que ya fueron comentados.

En primer término, se afirma que los principios de cada sistema suelen ser referidos a la forma que predomine en el proceso. Así se afirma que rige el principio de oralidad en aquellos procesos en los que predomine el uso de la palabra hablada sobre la escrita y que rige el principio de escritura en los procesos



en los que predomina el empleo de la palabra escrita sobre la palabra hablada. En ambos casos se trata de predominio en el uso y no de uso exclusivo (*Ovalle 1991: 191*).

Al contrario de la oralidad, el sistema escrito se caracteriza por la falta de intermediación, el secreto, la dispersión de los actos procesales y el sistema de la prueba legal, que en muchos casos amarra al(a la) juez(a) y no le permite valorar los elementos de convicción en forma libre.

antes de enumerar los cambios en los elementos normativos de la obligación de dar alimentos como cabe mencionar, que en el Proyecto se pretende dejar un número abierto de las mismas las cuales las encontramos reguladas, en el libro cuarto "asistencia familiar y tutela", título I "Los Alimentos" Capítulo I "disposiciones generales" que comprende los (artículos 304-494).

Título II proceso especial común de familia, que comprende los (artículos 495-538).

Además de la obligación de dar alimentos específicas a procesos especiales como la tutela, regulada en los (artículos 332- 423) la de la autoridad parental o relación madre, padre, hijos e hijas, regulada en los (artículos 264 -303), se hace mención a estos para patentar como se pasa de un sistema cerrado en la obligación de dar alimentos aun sistema que intenta sistematizar las ya existentes e incorporando nuevas dirigida a una mayor regulación.

Ahora bien la obligación de dar alimentos está condicionada, por el tipo de pretensión ejercitado en el proceso principal y con ellas también por la sentencia estimatoria que se dicte, que determinara los efectos como consecuencia de su aplicación en la pretensión que se intente, sin embargo el Proyecto de Código de Familia trae consigo muchas novedades y por ende ventajas que permitirá que la adopción de la obligación de dar alimentos en nuestro sistema judicial de familia



se expedito de tal manera que la retardación de justicia será cosa del pasado, entre las novedades podemos señalar las siguientes:

1.- Derecho a demandar alimentos aunque los padres no estén separados:

Regulado en el (artículo 315) se refiere a que el o la cónyuge o el o la conviviente, podrán demandar alimentos para sí y sus hijos e hijas y mayores discapacitados, aunque no se encuentren separados, a través de esta norma el legislado pretende proteger el interés superior del niño o la niña

2.- Derecho a demandar alimentos antes del nacimiento del hijo o hija:

Regulado en el (artículo 317) en el que se refiere a que la madre podrá solicitar alimentos para el hijo o hija que está por nacer cuando éste hubiese sido concebido antes o durante los doscientos sesenta días a la separación de los cónyuges o convivientes, el legislado pretende asegurar el derecho a alimentos desde el momento de la gestación del menor, sin embargo el legislado da igual protección al demandado (alimentario) al no dejarlo desprotegido haciendo una salvedad, que si existe prueba en contrario de que el demandado no es el padre se tramitara como incidente en el proceso de alimentos.

3.- Formas de tasar los alimentos:

Regulado en el (artículo 322) el legislador deja expresado el monto mínimo de la pensión alimenticia para un mismo beneficiario, en caso que el alimentista no tenga trabajo estable no podrá ser inferior al veinticinco por ciento del salario mínimo del sector económico a que pertenezca su profesión u oficio. En caso de que el alimentante tenga un trabajo estable se debe tasar los alimentos de la siguiente forma y orden:

a) Veinticinco por ciento de los ingresos netos si hay solo un hijo.



- b) Treinta y cinco por ciento de los ingresos netos si hay dos hijos.
- c) Cincuenta por ciento de los ingresos netos si hay tres o más hijos y se distribuirán de manera equitativa.
- d) Si el o la alimentista tiene más hijos o hijas de los que están demandando alimento, este debe probar que esta proveyendo a los demás con alimento, los que deberán ser incluidos en el máximo del cincuenta por ciento.
- e) Cuando reclamen alimentos personas distintas a los hijos o hijas, se estipulará un diez por ciento de los ingresos netos para cuando sea uno el que reclame y en caso de ser dos o más, se tasará un veinte por ciento, respetando el orden de prelación establecido en el Código.
- f) En caso de que concurran a reclamar alimentos más de tres hijos y otros alimentistas, el cincuenta por ciento será destinado para los hijos y el diez por ciento se prorratea entre los otros reclamantes.

El límite máximo de pensión alimenticia asignada cuando concurran los incisos anteriores, no podrá ser mayor del sesenta por ciento de los ingresos netos del alimentista, distribuido con equidad entre los demandantes y no demandantes, con prelación a los hijos e hijas.

4.- Acuerdo sobre la pensión alimenticia ante notaria o notario público:

Regulado en el (artículo 324), este es uno de los cambios más sustantivos que hace el legislador al tratar de sistematizar y ordenar en un solo Código las normas que rigen la obligación de dar alimentos, esto en vista que en la Ley de Alimentos Ley número 143, no se encuentra normado este artículo pero si se realizan en la



actualidad estos acuerdos ya que la Ley del Notariado otorga la facultad y le da mayor utilidad al notariado dejando sentado que el el padre y la madre podrán mediante escritura pública, celebrar acuerdo escrito sobre la pensión de alimentos que se debe pasar al hijo o hija o mayor discapacitado; pero ésta deberá ser ratificada por autoridad judicial competente del domicilio del beneficiario.

5.- Derecho de supervisión del uso de pensión alimenticia o compensatoria:

Regulado en el (artículo331) el juez de oficio o a petición de parte podrá solicitar al juez cuando tenga conocimiento o crea que haya desvió o anomalías en el uso de la prestación de alimentos a favor del alimentante, es por ello que el legislador dedica este artículo para la protección de los alimentos del menor que establece que el juez o jueza de oficio o a petición de parte, podrá corroborar el correcto uso de la pensión alimenticia o compensatoria asignada, tomando las providencias necesarias para corregir cualquier desvió o anomalía en su aplicación y utilización.

6.- Se incorpora un proceso nuevo oral en materia de familia:

Se crea un proceso oral y común nuevo para todas las materias de familia, en donde se depuraron e incorporaron normas nuevas, al proceso ante el registro del Estado Civil, un nuevo procedimiento administrativo para adopción. este procedimiento es ágil, expedito y oral, permitiendo de esta forma a las partes resolver sus litis en tiempos prudenciales y no los engorrosos años que pasan esperando sentencia en la actualidad.

En el proceso oral se propone que se desarrolle:

- 1.- Un proceso judicial especial y común para toda la materia Familiar.
- 2.- Un proceso oral y público, con reserva de privado.
- 3.- Dos instancias: Juzgados de Familia y Tribunal de Apelaciones. No hay casación.
- 4.- La creación de una sala especializada de familia en Apelaciones.



- 5.- Las competencias en los juzgados establecidas en razón del lugar, no por materias. Se prevé que en algún momento se hagan por materias, cuando se creen los Juzgados Locales de Familia (LOPJ).
- 6.- Que en los escritos iniciales se pida todo.
- 7.- El juez examina y se prepara para audiencia inicial.
- 8.- Dos audiencias, inicial y de vista de la causa.
- 9.- En los nombres de audiencia se respetó lo que existe en la LOPJ.
- 10.- A los procesos se llega con representación letrada siempre;
- 11.- Se fortalece defensoría pública.
- 12.- Activa participación de la Procuraduría General de la República y del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez.
- 13.- Principios rectores importantes.
- 14.- Libertad en los medios probatorios y en la valoración de pruebas.
- 15.- En audiencia inicial se fijan hechos, se concilia, se determinan pruebas, etc.
- 16.- En audiencia de vista de la causa se practican pruebas, se hacen alegatos, se delibera, resuelve, notifica sentencia y se impugna.

Lo que diferencia al sistema oral del escrito es que:

En el oral predomina la palabra hablada, y en el escrito la palabra escrita, "Se trata, sin lugar a dudas, del principio procedimental en el que es más evidente su carácter político.

"La publicidad del proceso es decía Couture, a nuestro modo de ver, la esencia del sistema democrático de gobierno". Un recorrido por las constituciones de países europeos y americanos sirve para ponerlo de manifiesto, y lo mismo ocurre con los textos internacionales más importantes: artículo 10 de la declaración universal de los derechos del hombre; artículo 6,1, de la convención europea para la salvaguarda de los derechos y del hombre y de las libertades fundamentales, y el artículo 14 del pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos"



(Montero, 1979: 266). Se dice que tiene carácter político por el motivo de que solo de esta manera se garantiza la vigilancia popular sobre la estructura judicial.

- la oralidad supone inmediación, lo que no ocurre con el escrito.
- en la oralidad se da la concentración de los actos del proceso, mientras que en el escrito se diluye.
- el oral se caracteriza por la elasticidad, contrario a la preclusión del escrito, en donde cumplida una etapa no se puede regresar a ella.
- en el oral se aplica el principio de publicidad, mientras que en el escrito es privado.

7.- Se adoptan los Principios especiales del proceso familiar:

Se encuentra regulado en el (artículo 446 - 462), los principios especiales, como auxiliares solícitos, son los que proponen mantener en el proceso las condiciones para la utilización oportuna y acertada de los constitucionales es decir que son reglas básicas que guían el funcionamiento coherente y equilibrado del proceso.

8.- Medidas cautelares y ejecución de las resoluciones:

Regulado en el (artículo 469), el legislador establece que las medidas cautelares se decretarán con el fin de asegurar la protección de las personas que lo requieran, así como la conservación y cuidado de los bienes en general, pudiéndose nombrar depositario, quien los recibirá en el estado en que se encuentren al momento de la solicitud. Serán decretadas por el juez, de oficio, a solicitud de parte o de autoridad pública competente, en cualquier momento del proceso o antes de su inicio.



Estas se refieren a medidas cautelares personales, tienden a evitar que se den eventos naturales o voluntarios que puedan interferir en los intereses jurídicos de derechos sustanciales o procesales, estas medidas intermedias se inclinan a garantizar resultados en los procesos.

Estas son medidas provisionales dictadas, hasta que se decida el fondo del asunto o que desaparezcan aquellas condiciones que las crearon, tiene mucho que ver con el desarrollo del proceso en sus distintas fases, debemos de recordar que la verdad del procesal es una variable, en este sentido pueden dictarse, reformarse o desaparecer en las secuelas de la actividad procesal.

Dentro de las medidas Cautelares que establece el Proyecto son:

1. Internamiento en un centro de salud mental.
2. Sometimiento a terapia especializada.
3. Alimentos provisionales para quienes tienen derecho a recibirlos.
4. Retención migratoria del demandado mientras no tenga debidamente garantizada la prestación alimenticia
5. Embargo preventivo de bienes
6. Constitución de garantía sobre bienes o derechos que aseguren el pago de la prestación
7. Cese de la convivencia
8. Separación material de los niños, niñas o adolescentes, mayores declarados incapaces, personas adultas mayores según el caso
9. Revocación de los poderes que cualquiera de los cónyuges o conviviente en unión de hecho estable hubiera otorgado a favor del otro
10. Las medidas adecuadas en relación con el cuidado, crianza, régimen de comunicación y visita, representación de los hijos o hijas menores de edad, mayores declarados incapaces, personas adultas mayores y uso de la vivienda familiar.
11. Inventario de bienes de menores de edad o mayores incapaces sujetos a tutela;
12. Depósito judicial de bienes;
13. Prohibición o restricción de acercamiento a la persona afectada o a los lugares que regularmente concurre.



El juez o jueza, se auxiliará de la fuerza pública para el cumplimiento de las medidas cautelares, según sea el caso.

El demandado podrá solicitar medidas cautelares provisionales. La solicitud deberá hacerse en la contestación a la demanda y se sustanciará en la audiencia inicial, resolviendo el juez en dicha audiencia.

9.- Ejecución de las resoluciones familiares:

Regulada en el (artículo 477) en la que se refiere que las resolución que dicte el juez de familia, el juez, para hacer efectivas la ejecución podrán recurrir al auxilio de la fuerza pública.

En aquellos casos en que no es posible utilizarla, por la naturaleza del acto, podrá disponer de medidas lícitas persuasivas que a su leal saber y entender pudieren contribuir con el cumplimiento pacífico de la resolución ordenada. Si ello no fuere posible podrá, de oficio, dar cuenta a la Fiscalía General de la República, para que se instruya por un delito de desobediencia o desacato a la autoridad, previo apercibimiento al sujeto obligado.

10- Sucesión procesal:

Regulada en el (artículo 484), el legislador se refiere que cuando la parte falleciere o fuere declarada su muerte presunta, el proceso continuará con sus herederos o con quienes representen a la sucesión, siempre que la naturaleza de la pretensión lo permita.

Si se desconociere quien representa a la sucesión, se le emplazará por edicto y si no compareciere, se le nombrará un guardador.



11.- Intervención de la Procuraduría de la Familia:

De conformidad al (artículo 5), se crea la Procuraduría de la Familia como Procuraduría Especial de la Procuraduría General de la República, con competencia privativa para conocer, opinar y dictaminar en todos los asuntos de familia que le sean sometidos a su conocimiento.

Regulada en el (artículo 485) el legislador estable que la Procuraduría de la Familia será parte en todos los procesos, concernientes al estado civil y capacidad de las personas, los intereses de menores de edad, mayores discapacitados, mayores declarados incapaces, personas adultas mayores y en todos aquellos que la ley así lo prevenga. Puede además, ser parte en cualquier otro asunto en que alegue un interés social.

La Procuraduría de la Familia al intervenir como parte en el proceso, podrá sostener pretensiones autónomas o adherirse, ampliar o modificar la pretensión formulada por las partes, o alegar otras nuevas sin alterar sustancialmente lo que sea objeto de la litis, podrá igual oponer las excepciones que estime pertinentes.

La Procuraduría de la Familia interviene como representante de los intereses de los niños, niñas, adolescentes, personas incapacitadas o ausentes, hasta que se les provea de tutores, representantes o encargados del cuidado de sus personas y de la defensa de sus bienes y derechos.

13.- Consejo Técnico Asesor:

Regulado en el (artículo 497) se refiere a que los jueces de familia, deben ser asistidos profesionalmente por un equipo psico-médico-social, quienes actuarán como cuerpo técnico auxiliar y multidisciplinario, integrado por médicos, psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, y demás profesionales técnicos que exija el asunto a juzgar.



El (artículo 498) refiere que corresponde a los especialistas del consejo técnico, asesorar, individual o colectivamente, a los jueces de familia, o los que hagan sus veces, realizando los estudios y dictámenes que el juez les ordene, a fin de procurar la estabilidad del grupo familiar, la protección del niño, niña o adolescente, mayores con causales de incapacidad y de las personas adultas mayores, y en particular se le atribuyen las siguientes atribuciones:

- a). Asistir a las audiencias con el objetivo de emitir las opiniones técnicas que sean solicitadas.
- b). Asesorar al juez para la adecuada comparecencia y declaración del niño, niña o adolescente.
- c). Evaluar la pertinencia de la conciliación entre las partes y sugerir los términos en que ésta pudiera llevarse a cabo.
- d). Asesorar al juez en todas las materias relacionadas con su especialidad

14.- Término máximo para tramitar asuntos de familia.

Regulado en el (artículo 506) el legislador haciendo uso de los principios procesales que regula el Proyecto de Código de Familia se establece que el término máximo para tramitar un asunto de materia familiar no podrá exceder de ciento veinte días, contado desde la notificación a todos los demandados, so pena de las responsabilidades administrativas que correspondan.

15.- Se adopta una figura nueva a como es el apremio corporal.

Apremio es la acción y efecto de apremiar (apretar, oprimir, obligar a alguien con mandamiento de autoridad, dar prisa a alguien para que haga algo). El concepto



tiene varios usos en el ámbito del derecho. Un apremio puede ser el recargo de contribuciones o impuestos tras la demora en un pago. La autoridad judicial, por otra parte, está en condiciones de obligar el pago de una determinada cantidad o el cumplimiento de otro acto obligatorio a modo de apremio.

El procedimiento de apremio se lleva a cabo cuando, después del dictado de un acto administrativo que fija una obligación a alguien, la persona no cumple con dicha obligación. La autoridad, por lo tanto, está habilitada para tomar medidas de apremio como la imposición de una multa o el embargo de su patrimonio.

Esta se encuentra regulada en el (artículo 318) estas proceden cuando se reclamen pensiones alimenticias atrasadas, hasta por un período de doce meses, las que podrán ser exigibles por la vía del apremio corporal.

16.- Se fija la edad de veinticuatro años como máximo para gozar del derecho de alimento cuando se demuestre que es usado de forma provechosa.

Esto se encuentra regulado en el (artículo 273) en el que se refiere que la edad máxima para gozar del derecho de alimentos es de veinticuatro años, pero el legislado pone como requisitos que se debe de demostrar que se encuentre aprovechando sus estudios. Dicho artículo establece que si el hijo o la hija alcanzaran su mayoría de edad y siguiere estudiando de manera provechosa tanto en tiempo como en rendimiento deberán proporcionales alimentos hasta que concluya sus estudios o haya adquirido profesión u oficio, una vez cumplido los veinticuatro años cesará dicha obligación.

De la misma manera el Proyecto de Código de Familia regula en el (artículo 314 inciso a) que establece que se deben alimentos a los **hijos e hijas menores de edad, a los mayores de edad, hasta que cumplan los veinticuatro años de edad**, cuando estén realizando estudios de manera provechosa y a los mayores discapacitados. Los concebidos y no nacidos, se consideran menores de edad



CONCLUSIONES

Al culminar la presente investigación se concluye lo siguiente.

1.- En el Proyecto del Código de Familia, se incluyen la obligación de dar alimento y el procedimiento especial de juicio de familia, regulada en un sólo Libro de forma sistematizada, evitando la dispersión que existe en la Ley de Alimentos vigente Ley número 143 y el Código de Procedimiento Civil, esta sistematización se considera una ventaja.

2.- La Oralidad en el proceso como lo plantea el Proyecto del Código de Familia comparado con el sistema escrito que rige el procedimiento actual, en el proceso oral se propone que se desarrolle un proceso judicial especial y común para toda la materia Familiar. Un proceso oral y público, con reserva de privado. Dos instancias: Juzgados de Familia y Tribunal de Apelaciones. No hay casación. La creación de una sala especializada de Familia en Apelaciones. También se considera una ventaja.

3.- El cambio que se presenta en el Proyecto de Código de Familia, en cuanto al sistema abierto de la obligación de dar alimento, genera una ventaja debido a que amplía las posibilidades de tutela del bien jurídico protegido.

4.- En el Proyecto incluye un aspecto nuevo, en cuanto a lo relacionado a la manera que el juez tazara los alimentos, pues se habla de porcentajes que van desde el veinticinco al cincuenta por ciento esto se aplicará a las personas que tengan un trabajo estable.

5.- En el Proyecto de Código de Familia en lo referente a la obligación de dar alimentos incorpora una regulación nueva en alimentos, pues se normará que el padre y la madre podrán mediante escritura pública, celebrar acuerdo escrito sobre la pensión de alimentos que se debe pasar al hijo o hija o mayor



discapacitado; pero ésta deberá ser ratificada por la autoridad judicial competente del domicilio del beneficiario, pues esto se considera una ventaja pues además de ser expedito el procedimiento de alimento, con esta nueva figura será aun mas rápido.

6.- Otra Ventaja que nos trae el Proyecto de Código de Familia, en cuanto al incumplimiento de alimentos es que deja establecido el apremio corporal por incumpliendo en la prestación de alimentos, pues en la actual norma vigente, existe la regulación de incumplimientos de Deberes Alimenticios en la materia Penal.

7.- Otro cambio que regulara el Proyecto de Código de Familia, es la creación de la Procuraduría de la Familia, adscrita a la Procuraduría General de la República con competencia privativa para conocer, opinar y dictaminar en los asuntos de familia que le sean sometidos a su conocimiento, esto será una gran ventaja en los procesos de alimento, pues se garantizara las protección y tutela del menor el interés Superior del menor.



6.- RECOMENDACIONES

Como se Observo durante el desarrollo de esta investigación la obligación de dar alimentos, se encuentra contenida de manera más sistematizadas, en el Proyecto de Código de Familia, en relación a la Ley de Alimentos Ley número 143 y Código de Procedimiento Civil vigente, con el fin de realizar un tratamiento procesal mas efectivo se plantean las siguientes recomendaciones.

1.- en cuanto al orden que se deben los alimentos, regulado en el artículo 314 inciso a, establece que se deben alimentos "A los hijos e hijas menores de edad, a los mayores de edad, hasta que cumplan los veinticuatro años de edad, cuando estén realizando estudios de manera provechosa y a los mayores discapacitados. Los concebidos y no nacidos, se consideran menores de edad", se considera que lo planteado trae consigo ventajas en cuanto a la prestación de alimentos a los mayores de edad hasta que cumplan los veinticuatro año estos es un derecho para ellos; a si mismo consideramos que este inciso debería de anexarse las obligaciones "siempre y cuando demuestre buen desempeño académico, para demostrarlo deberá de adjuntar el certificado de nota o boletín académico"

2.- En cuanto a la forma de tasar los alimentos el artículo 322, establece "El monto mínimo de una pensión alimenticia para un mismo beneficiario, en caso que el alimentista no tenga trabajo estable no podrá ser inferior al veinticinco porciento del salario mínimo del sector económico a que pertenezca su profesión u oficio. En caso de que el alimentante tenga un trabajo estable se debe tasar los alimentos entre el veinticinco y el cincuenta porciento, se considera que lo planteado transgrede el principio de igual, puesto que la alimentación están obligados a brindarla ambos padres.

3.- En lo referente a la supervisión del uso de pensión alimenticia o compensatoria regulado en el artículo 331 que establece que "El juez o jueza de oficio o a petición



de parte, podrá corroborar el correcto uso de la pensión alimenticia o compensatoria asignada, tomando las providencias necesarias para corregir cualquier desvío o anomalía en su aplicación y utilización. Se considera que lo planteado en este artículo se debe de ampliar puesto que la idea que da el legislador es muy buena y muy provechosa, pero el legislado tiene que enumerar o agregar incisos al artículo referido, pues debe de agregar "cuando se constate el mal uso de la pensión alimenticia de los o las menores, el juez tomara las siguientes medidas:

a).- Nombrara un administrador, para administrar y proveer la debida alimentación de los menores.

b).- El juez de oficio o a petición de parte, mediante auto o resolución hará saber a la responsable de la restitución de la malversación económica de alimentos al menor, por un monto que el juez estime a su criterio.

4.- en cuanto a la consultas de los menores de edad en los procesos judiciales y administrativos, regulado en el artículo 459, el que establece que "Los niños, niñas y adolescentes menores de edad que se encuentren bajo la autoridad parental deberán ser consultados en todo procedimiento administrativo y judicial que tenga relación con ellos de manera personal y en consonancia con las normas y procedimientos correspondientes, según sea el caso y en función de su edad y madurez. En caso de niños y niñas, la consulta será obligatoria cuando sean mayores de siete años, se considera que lo planteado por el legislador es muy bueno pero además el artículo se le debería de agregar "los niños o menores de edad estarán asistidos por psicólogos" pues se considera que el menor puede estar coaccionado por parte del padre o tutor que lo encuentra cuidando al menor"

5.- en lo relacionado a las normas internacionales privadas, en lo referente a la aplicación de la ley nacional al concepto de alimentos regulado en el artículo 17 la establece que "El concepto de alimentos, la constitución, la extinción de la obligación y todo lo relacionado a las formas de su cumplimiento será regulado por



la ley nacional del que lo solicite y en el caso de ejecución se regirá por las regulaciones del tratado respectivo. Se considera que este artículo debería estar contenido en el título VI en lo relativo al ámbito de aplicación del título I, capítulo I del ámbito de aplicación, de la jurisdicción y competencia regulado en los artículos 436-462, de esta manera se encontrarían en secuencia lo que generaría orden.



Bibliografía

- Becú, M. -Z. (1997). *Personas y Familia*. Chile.
- Convenio Sobre la ley Aplicable a las Obligaciones Alimenticias hecho en la Haya*.
(2 de Octubre de 1973).
- Constitución Política de Nicaragua, Bitesca 1999
- Convenio Interamericano sobre Exhortos o Cartas Rogatorias*. (30 de Enero de 1975). Panama.
- Cabanela. Guillermo. Diccionario Juridico (s.f.).
- Codigo de Bustamante*. (s.f.). Managua.
- Costarica, T. d. (2013). *Ley de Pension a Alimento N° 7654*. Costarica.
- D'Oliver. (1786). *De la reforme des Loix Civiles, Chapitre II* (Vol. 1 parte). paris.
- D'Oliver. (1786). *DSe la reforme des Lois Civiles, Chapitre II*. Paris.
- Derecho, P. d. (2006). *La Familia Derecho y Obligaciones*. Managua: Usaid,
Nicaragua.
- Digesto. (533 DC). *Recopilacion de Jurisprudencia Romana*. Roma.
- Digesto. (533 Dc). *Recopilacion de leyes Romana*. Roma.
- Diccionario Juridico Espasa*. (2005). España
- Gonzalo Camacho, G. A. (s.f.). *Manual de Derecho Procesal* (Novena Edicion ed.).
Mexico: TEMIS.
- Goyena, G. (1992). *Derecho de Familia*. Mexico.
- Haya, L. (1947). *Tratado Internacional de Asistencia Reciproca TIAR*.
- Haya, L. (20 de Junio de 1956). *Convenio sobre la Obtencion de Alimentos en el Extranjero*. Nueva York.
- Iván Escobar Fornos, Introducción al proceso, 2ª edición, editorial Hispamer, 1998.
- Internacional, I. (19 de Abril 1990). *Convencion sobre los Derechos del Niño*.
- Justicia, C. D. (7 de de Noviembre de 1945). *Sobre reciprocidad: S.10am*.
managua.
- Justicia, C. S. (1 de Octubre de 1963). *Sentencia 12 m*. Managua.
- Justicia, C. S. (1965). *B.J.* Managua.



- Justicia, C. S. (21 agosto de 1937). *Sentencia 12 m.* Managua.
- Justicia, C. S. (24 de noviembre de 1921). *Sentencia 11:30am.* Managua.
- justicia, C. S. (3 de Abril de 1964). *sentencia de las 9 am.* Managua.
- Justicia, C. S. (5 de Abriol de 1921). *Sentencia de las 12 m.* Managua.
- Justicia, C. S. (6 de Febrero de 1948). *Sbre reciprocidad: B.J.* Managua.
- Justicia, C. S. (8 de Octubre de 1961). *Sentencia de las 10:30am, Boletin Judicial 20630.* Managua.
- Justicia, C. S. (s.f.). *B.J 5482.* Managua.
- Justicia, C. S. (s.f.). *Boletin Judicial 3276,11305.* Managua.
- Marin Garcia de Leonardo, T. (1999). *Regimen Juridido de Alimentos de losd hijos mares de edad.* Valencia: Ed. Tirant lo Blanch.
- Meza, M. A. (1998). *Personas y Familia* (Primera Edicion ed.). Managua: Bitecsa.
- Nacional, A. (1997). *Ley de Identificacion Ciudadada N° 152.* Managua.
- Nacional, A. (2003). *Codigo de Procedimiento Civil de la Republica de Nicaragua.* managua: Bitecsa.
- Nacional, A. (s.f.). *Ley Organica del Poder Judicial ley N° 260.* Managua: Bitecsa.
- Nicaragua, A. N. (2013). *Proyecto de Codigo de Familia.* Managua.
- N°57, G. D. (24 de Marzo de 1992). *Ley de Alimentos N° 143.* Managua.
- Reale, M. (2003). *Derecho de Familia.* Mexico.
- Serrano, F. R. (1968). *Reforma de la legislacion Codificada de Nicaragual .* Managua.
- Urbina, O. (2000). *Derecho Procesal Civii* (Vol. Tomo I). Masnagua: Bitecsa.
- Zannoni, G. B.-E. (2000). *Manual de Derecho de Familia* (Quinta edicion ed.). Argentina: ASTREA.
- Zannoni, G. B.-E. (2000). *Manual de Derecho de Familia* (Quinta edicion ed.). Argentina: ASTREA.



ANEXOS



LIBRO CUARTO
ASISTENCIA FAMILIAR Y TUTELA
TÍTULO I
LOS ALIMENTOS
Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 304. Concepto y cobertura de alimentos

Los alimentos son bienes necesarios que se proporcionan para la vida de una persona. Comprende una prestación económica que guarda la debida relación entre las posibilidades económicas de quien está obligado a darlos y las necesidades de quien deba recibirlos.

Además de las necesidades alimenticias propiamente dichas, se considera también como alimentos, los servicios necesarios para garantizar una mejor calidad de vida, tales como:

- a) Atención médica y medicamentos, rehabilitación y educación especial, cuando se trate de personas con alguna discapacidad independientemente de su edad;
- b) Vestuario;
- c) Habitación;
- d) Educación y aprendizaje de una profesión u oficio;
- e) Culturales y de recreación.

Artículo 305. Prevalencia del derecho de dar alimento

El derecho de alimentos es personalísimo, imprescriptible, irrenunciable e intransigible e intransferible. Los alimentos son inembargables, no son compensables con ningún tipo de deuda, tendrán sin excepción, derecho privilegiado y prioridad sobre cualquier otra obligación del alimentante y no podrán ser perseguidos por los acreedores del alimentario.

El crédito alimenticio afectará cualquier ingreso que perciba.

Artículo 306. Personalísimo

Se entiende por personalísimo el vínculo jurídico entre dos personas, el alimentante y el alimentario.

Artículo 307. Imprescriptible

Siempre está vigente la obligación de dar alimentos, aunque prescriban las pensiones alimenticias atrasada después de doce meses.

Artículo 308. Irrenunciabilidad e Intransigible

No se admitirá ningún tipo de transacción o compensación, que implique renuncia total o parcial del derecho a las prestaciones alimentarias, dado el interés social y derecho público de esta materia.

Artículo 309. Intransferible

Que no puede transferirse a ninguna otra persona el derecho a exigir alimentos.



Artículo 310. No compensación, crédito privilegiado y preferente

El juez o jueza no autorizará ninguna forma de compensación de la prestación alimentaria, con ningún tipo de deuda.

La prestación alimentaria será privilegiada y preferente sobre cualquier otra obligación del alimentante aún cuando exista sentencia ejecutada por una deuda anterior.

Artículo 311. Retroactividad

El pago de prestaciones alimentarias podrá reclamarse retroactivamente hasta por doce meses, correspondiendo la carga de la prueba al alimentante.

Artículo 312. Inembargabilidad

La prestación alimentaria es inembargable.

Capítulo II

Deberes y derechos que derivan de las prestaciones alimenticias

Artículo 313. Deberes y derechos en materia de alimentos

El deber de dar alimentos y el derecho de recibirlos se funda en la familia. En la alimentación de la familia deberán contribuir todos los miembros mayores hábiles, unos en dinero y otros con trabajo del hogar, acorde a sus capacidades y posibilidades.

Artículo 314. Del orden en que se deben los alimentos

Se deben alimentos en el siguiente orden:

- a) A los hijos e hijas menores de edad, a los mayores de edad, hasta que cumplan los veinticuatro años de edad, cuando estén realizando estudios de manera provechosa y a los mayores discapacitados. Los concebidos y no nacidos, se consideran menores de edad;
- b) El o la cónyuge o convivientes mientras no tenga para su congrua sustentación;
- c) A los hermanos y hermanas, a los ascendientes y descendiente hasta segundo grado de consanguinidad, cuando se encuentren en estado de necesidad o desamparo. Si la persona llamada en grado anterior a la prestación no estuviera en condiciones de soportar la carga en todo o en parte, dicha obligación será puesta en todo o en parte a cargo de las personas llamadas en grado posterior. Cuando recaiga sobre dos o más personas la obligación de dar alimentos, se repartirá entre ellas el pago de la pensión en cantidad proporcional a sus ingresos y capital. En caso de que la demanda recayera sobre uno de los obligados, este podrá solicitar se amplíe la demanda en contra de los otros obligados.

Artículo 315. Derecho a demandar alimentos aunque los padres no estén separados

El o la cónyuge o el o la conviviente, podrán demandar alimentos para sí y sus hijos e hijas y mayores discapacitados, aunque no se encuentren separados.

Artículo 316. Prelación en el régimen de alimentos



Los alimentos se deben en la parte en que los bienes y el trabajo del alimentista no alcancen a satisfacer sus propias necesidades. Si los recursos del alimentante no alcanzaren a satisfacer las necesidades de todos sus acreedores alimentistas, deberá satisfacerlas en el orden establecido en este Código.

Artículo 317. Derecho a demandar alimentos antes del nacimiento del hijo o hija
La madre podrá solicitar alimentos para el hijo o hija que está por nacer cuando éste hubiese sido concebido antes o durante los doscientos sesenta días a la separación de los cónyuges o convivientes, salvo prueba en contrario la que se tramitara como incidente.

Artículo 318. Pensión alimenticia atrasada

Se podrá reclamar pensiones alimenticias atrasadas, hasta por un período de doce meses, las que podrán ser exigibles por la vía del apremio corporal.

Artículo 319. Vía para reclamar alimentos

Se podrán reclamar alimentos en la vía administrativa o judicial, conforme lo establecido en el Libro Sexto de este Código; o adoptar el acuerdo de prestación alimenticia en sede notarial.

Artículo 320. Personas legitimadas para reclamar alimentos

Podrán demandar alimentos los que estén llamados por Ley a recibirlos, bien por sí, o por medio de un representante legal, sin no gozaren del pleno ejercicio de su capacidad jurídica.

Capítulo III

Criterios de determinación de la pensión alimenticia

Artículo 321. Aspectos a tomar en cuenta para fijar la pensión

La autoridad competente, para fijar la pensión alimenticia, deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos:

- a) El capital o ingresos económicos del alimentante;
- b) Su último salario mensual y global. Si la o el alimentante renuncia a su trabajo para no cumplir con su obligación, el último salario mensual será la base para fijar la pensión;
- c) Si la o el alimentante trabajare sin salario fijo o no se pudiere determinar sus ingresos, el juez o jueza en su caso, hará inspección en sus bienes y determinará la renta presuntiva;
- d) La edad y necesidad de los hijos e hijas;
- e) El estado de necesidad y desamparo de otros alimentistas;
- f) Los gastos personales del o la alimentante, quien en ningún caso, podrá evadir las responsabilidades de cumplir con la pensión;
- g) Que los ascendientes hubieren cumplido con su obligación derivada de la relación parental.

Artículo 322. Formas de tasar los alimentos

El monto mínimo de una pensión alimenticia para un mismo beneficiario, en caso que el alimentista no tenga trabajo estable no podrá ser inferior al veinticinco por ciento del salario mínimo del sector económico a que pertenezca su profesión u oficio. En caso de que el alimentante tenga un trabajo estable se debe tasar los alimentos de la siguiente forma y orden:



- a) Veinticinco por ciento de los ingresos netos si hay solo un hijo;
- b) Treinta y cinco por ciento de los ingresos netos si hay dos hijos;
- c) Cincuenta por ciento de los ingresos netos si hay tres o más hijos y se distribuirán de manera equitativa;
- d) Si el o la alimentista tiene más hijos o hijas de los que están demandando alimento, este debe probar que esta proveyendo a los demás con alimento, los que deberán ser incluidos en el máximo del cincuenta por ciento;
- e) Cuando reclamen alimentos personas distintas a los hijos o hijas, se estipulará un diez por ciento de los ingresos netos para cuando sea uno el que reclame y en caso de ser dos o más, se tasará un veinte por ciento, respetando el orden de prelación establecido en el presente Código;
- f) En caso de que concurran a reclamar alimentos más de tres hijos y otros alimentistas, el cincuenta por ciento será destinado para los hijos y el diez por ciento se prorratea entre los otros reclamantes.

El límite máximo de pensión alimenticia asignada cuando concurran los incisos anteriores, no podrá ser mayor del sesenta por ciento de los ingresos netos del alimentista, distribuido con equidad entre los demandantes y no demandantes, con prelación a los hijos e hijas.

Artículo 323. Pena por atraso de pago en la pensión alimenticia

El atraso en el pago de las pensiones alimenticias sin causa justificada será penado con el pago de un 2% adicional por cada mes de atraso.

Artículo 324. Acuerdo sobre la pensión alimenticia ante notaria o notario público

El padre y la madre podrán mediante escritura pública, celebrar acuerdo escrito sobre la pensión de alimentos que se debe pasar al hijo o hija o mayor discapacitado; pero ésta deberá ser ratificada por autoridad judicial competente del domicilio del beneficiario, de conformidad con el presente Código.

Artículo 325. Otras formas de pago de la pensión alimenticia

Se podrá autorizar parte del pago de la obligación alimenticia, en especie o en cualquier otra forma, cuando a juicio prudencial del juez o jueza hubiere motivos que lo justificaren.

El beneficiario alimentario o su representante, podrá solicitar la constitución de un usufructo, uso o habitación sobre cualquier bien inmueble del obligado.

Capítulo IV

Sentencia y extinción de la obligación alimenticia

Artículo 326. Pronunciamientos en sentencia

Cuando los alimentos se decidieren en vía judicial, la sentencia además de los requisitos generales establecidos en este Código, expresará:

- a. El monto de la prestación alimentaría a favor de quien tenga derecho, deberá pagarse mensual o quincenal o semanalmente;
- b. La afectación de los ingresos que perciba el alimentante;
- c. La autorización para el pago de la obligación alimentaría en especies o en cualquier otra forma, cuando a juicio prudencial del juez o jueza hubiere motivos que lo justifiquen;



d. Ordenar medidas de protección o la continuación de las ya existentes;

e. Monto de los alimentos atrasados y forma de pago.

La sentencia podrá ser modificada cuando cambien las circunstancias de quien los da y las necesidades de quien los reciba.

Artículo 327. Efectos de la sentencia

Si el pago se hace por consignación, se hará entrega inmediata al acreedor sin trámite alguno. Si el pago fuere parcial, se entenderá que la deuda queda extinguida por la cuantía pagada o puesta a disposición del acreedor alimentario, continuando la ejecución por el resto.

En la ejecución de obligaciones alimentarias se podrán embargar las cantidades percibidas en concepto de salarios, pensiones, retribuciones, prestaciones sociales o equivalentes o cualquier otro ingreso incluyendo el salario mínimo. La ejecución de la sentencia podrá tramitarse contra el o la alimentante, sus sucesores o sus representantes, siempre que la obligación sea actualmente exigible.

El empleador o la empleadora está obligada a deducir la pensión fijada por la autoridad administrativa o judicial respectiva, con la sola presentación del acta o certificación de la sentencia, bajo pena de cancelarla personalmente y en caso de no hacerlo, queda sujeto a la sanción establecida por el Código Penal.

Artículo 328. Sanción en caso de incumplimiento

En caso de incumplimiento de los deberes alimentarios, quien estuviere conociendo del asunto, o a instancia de parte dará cuenta al Ministerio Público, a los fines de establecer la responsabilidad penal que deriva de esta omisión.

Artículo 329. Extinción de la obligación de dar alimentos

La obligación de dar alimentos se extingue por:

- a) Muerte del alimentante que no dejare bienes para satisfacerla;
- b) Muerte del alimentista.

Artículo 330. Cesación en la obligación de dar alimentos

La obligación de dar alimentos cesa:

- a) Cuando los hijos e hijas alcancen la mayoría de edad, excepto cuando estén realizando de forma provechosa sus estudios y no sobrepasen los veinticuatro años de edad;
- b) Cuando los hijos e hijas menores hayan sido emancipados, salvo en casos de enfermedad o discapacidad que le impida obtener por sí mismo los medios de subsistencia;
- c) En caso de falta o daños graves del alimentario contra el deudor o deudora de alimentos;
- d) Cuando la necesidad de los alimentos resulta de la conducta reprensible del que los solicita o recibe.

Para la aplicación de los dos últimos incisos se requerirá de sentencia.

Artículo 331. Derecho de supervisión del uso de pensión alimenticia o compensatoria



El juez o jueza de oficio o a petición de parte, podrá corroborar el correcto uso de la pensión alimenticia o compensatoria asignada, tomando las providencias necesarias para corregir cualquier desvío o anomalía en su aplicación y utilización. En ningún caso podrá suspenderse la obligación de enterar la pensión alimenticia.

TÍTULO II

PROCESO ESPECIAL COMÚN DE FAMILIA

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 495. Unidad del proceso

Se establece un proceso común oral y, por regla general, público, salvo las circunstancias expresadas en este Código, para todos los asuntos que regula el presente. Cuando este Código ordene requisitos de procedibilidad especiales, para determinados asuntos, dada su naturaleza, estos se integrarán, para su aplicación, a este proceso especial común.

Artículo 496. Reglas del proceso común

El proceso común de que habla el artículo anterior, se sostiene sobre la base de los siguientes principios:

- a) El proceso se inicia, mediante escrito de demanda, a instancia de parte, interesada;
- b) Sin menoscabo de la oralidad del proceso, la demanda, su contestación, reconvencción, oposición de excepciones cuando corresponda, sus contestaciones, recusaciones, proposición de pruebas e impugnaciones a estas, se harán por escrito;
- c) Iniciado el proceso, éste será dirigido e impulsado de oficio por el juez, quien evitará toda dilación o diligencia innecesaria y tomará las medidas pertinentes para impedir su paralización;
- d) El proceso se desarrollará como máximo en dos audiencias, en las que se concentran, siempre de ser posible y conforme corresponda, alegaciones y pretensiones de las partes, ofrecimiento y práctica de pruebas, actos incidentales, alegatos conclusivos, deliberación, resolución y admisión de recurso;
- e) Las partes podrán ofrecer pruebas, presentar alegatos y disponer de sus derechos, excepto cuando éstos últimos fueren irrenunciables;
- f) El juez estará presente en todas las actuaciones y procurará la concentración de las mismas;
- g) Las audiencias serán orales y públicas, pero podrá el juez de oficio, o a instancia de parte, ordenar que la audiencia se desarrolle de forma privada, con intervención sólo de las partes en el proceso;
- h) El juez garantizará la igualdad de las partes durante todo el proceso;
- i) Las partes deberán plantear simultáneamente, en sus escritos iniciales y durante las audiencias, todos los hechos y alegaciones en que fundamenten sus pretensiones o defensas y las pruebas de las que se pretendan hacer valer;



- j) El juez deberá resolver sobre todos los puntos propuestos por las partes y los que por disposición legal correspondan;
- k) Los sujetos que actúen en el proceso deberán comportarse con lealtad, probidad y buena fe;
- l) Para las audiencias y actos procesales se podrán utilizar los medios tecnológicos o electrónicos que permita el estado alcanzado por la tecnología y la realidad material del órgano jurisdiccional en cuestión. El juez adoptará las medidas necesarias para garantizar su autenticidad e integridad.

Artículo 497. Consejo Técnico Asesor

Los jueces de familia, deben ser asistidos profesionalmente por un equipo psico-médico-social, quienes actuarán como cuerpo técnico auxiliar y multidisciplinario, integrado por médicos, psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, y demás profesionales técnicos que exija el asunto a juzgar.

Artículo 498. Funciones del Consejo Técnico Asesor

Corresponde a los especialistas del Consejo Técnico, asesorar, individual o colectivamente, a los jueces de familia, o los que hagan sus veces, realizando los estudios y dictámenes que el juez les ordene, a fin de procurar la estabilidad del grupo familiar, la protección del niño, niña o adolescente, mayores con causales de incapacidad y de las personas adultas mayores, y en particular se le atribuyen las siguientes atribuciones:

- a). Asistir a las audiencias con el objetivo de emitir las opiniones técnicas que sean solicitadas;
- b). Asesorar al juez para la adecuada comparecencia y declaración del niño, niña o adolescente;
- c). Evaluar la pertinencia de la conciliación entre las partes y sugerir los términos en que ésta pudiera llevarse a cabo, y
- d). Asesorar al juez en todas las materias relacionadas con su especialidad.

Artículo 499. Actas de audiencias y diligencias

De todas las audiencias se levantará acta por el Secretario actuante, en la que dejará constancia escrita, de la hora de inicio y conclusión de la audiencia, la referencia del proceso, el número único de radicación, la identidad de los intervinientes presentes, fecha y lugar de celebración, los temas tratados, las alegaciones de partes, se fijarán los hechos y pretensiones, los acuerdos adoptados y las resoluciones del juez. El Acta será firmada por todas las partes intervinientes, salvo que se excuse firmar, en cuyo caso se dejará razón de este hecho.

Artículo 500. Grabación de las audiencias

Cuando se emplee el sistema de grabación magnetofónica o electrónica no se podrá prescindir de la grabación y este medio tendrá los efectos de acta, sin menoscabo de que puede dejar constancia en soporte material.

En la grabación, al conceder el uso de la palabra el juez expresará el nombre del orador, su función en el proceso y la actuación a realizar. Además, pronunciará con precisión y claridad las decisiones que correspondan.



Durante la grabación se elaborará un índice que contendrá los records o las horas en que se realice cada actuación.

Artículo 501. Solicitudes y resoluciones en audiencia

Las partes en audiencia manifestarán oralmente al juez sus pretensiones, podrán igualmente Incidentar oponiendo excepciones, recusar, impugnar medios probatorios, entre otros, en cuyo caso, el juez procurará tramitar en la audiencia todos los asuntos incidentales, respetando el derecho de traslado a las partes y las oportunidades probatorias otorgadas en el presente.

El juez tramitará y decidirá en la audiencia las solicitudes que los terceros y las partes le formulen. Si el juez lo estimare y la parte lo acepta, puede intervenir y expresarse por sí directamente, aunque concurra bajo dirección letrada.

Cuando alguna de las partes intervinientes presente alguna discapacidad, podrá el juez adoptar la medidas para que intervenga intérprete o especialista requerido.

Artículo 502. El uso obligatorio de la toga

En todas las audiencias el juez llevará toga.

Artículo 503. De los lugares de audiencia

Las audiencias se celebrarán siempre dentro del recinto de los juzgados o del tribunal de apelaciones, procurándose espacios que dentro de las condiciones materiales existentes, presten las condiciones de iluminación, limpieza y otras que permitan dar ritualidad al acto. El juez tomará todas las medidas para la consecución de este fin.

Artículo 504. De los recursos en materia de familia

Contra la sentencia que se dicte por los Juzgados de Distrito de Familia o en su caso por los Juzgados Locales Civiles y Locales Únicos cabe:

- a). Recurso de reposición de sentencia, en el que se solicita aclaración de sentencia;
- b). Recurso de reposición de auto en que se decreten medidas cautelares;
- c). Recurso de apelación, ante la Sala de lo Civil de Apelaciones, entretanto se crea la Sala de Familia.

Contra el recurso de reposición y de apelación, en su caso, no cabrá ulterior recurso.

Artículo 505. Acceso de las sentencias a Registros Públicos

Cuando proceda, la sentencia y demás resoluciones dictadas en los procesos a que se refiere este libro, se comunicarán de oficio al Registro correspondiente, para su debida anotación.

Artículo 506. Término máximo para tramitar asuntos de familia

El término máximo para tramitar un asunto de materia familiar no podrá exceder de ciento veinte días, contado desde la notificación a todos los demandados, so pena de las responsabilidades administrativas que correspondan.

Capítulo II

De las pruebas y su valoración

Artículo 507. Libertad probatoria



En materia familiar serán admitidos como prueba, cualquier medio lícito capaz de crear convicción en el juez de familia.

Artículo 508. Valoración de las pruebas

El juez valorará las pruebas conforme al valor que atribuya a cada medio, de forma separada y conjunta, ajustándose en todo caso a los principios de la razón y la ciencia, en armonía con los postulados establecidos en este Código.

Artículo 509. Carga de la prueba

A cada parte incumbe probar los hechos que afirme y los que se oponga a los alegados por las otras, así como la vigencia del derecho extranjero, cuya aplicación reclame.

Artículo 510. Momento para la proposición de pruebas

Las pruebas serán propuestas y acompañadas, cuando su naturaleza lo permita, junto con los escritos de demanda y contestación, o de producirse estas con posterioridad a sus escritos iniciales, serán presentadas verbalmente y por escrito, con sus copias de ley, en el acto de la audiencia inicial.

Artículo 511. Pruebas de oficio

Además del derecho que asiste a las partes, el juez podrá disponer de oficio, antes y durante las audiencias, la práctica de pruebas que a su juicio considere indispensables para llegar al correcto conocimiento de la verdad en relación con las cuestiones planteadas.

Artículo 512. Practica anticipada de pruebas

Podrá practicarse anticipadamente una prueba cuando exista el peligro real e inminente de que desaparezca o sin cuya práctica urgente se origine perjuicio cierto a quien la interese. Será resuelto por el juez sin recurso alguno.

Artículo 513. Auxilio de la fuerza pública

El juez de familia podrá disponer la conducción inmediata por la fuerza pública de testigos, peritos, funcionarios y otros auxiliares cuya presencia fuera necesaria y que citados en forma, no hayan concurrido sin causa justificada.

Capítulo III

Inicio del proceso

Artículo 514. Apertura

El proceso especial común inicia con el escrito de demanda, el que deberá contener los requisitos que para este acto exige el derecho común. A lo que se agrega: La proposición de las pruebas de que se intente valer y la propuesta de las medidas cautelares que pueda interesar. Igualmente deberán ser cumplidos, los requisitos especiales, que se establezcan en las normas particulares, diseñadas en atención a la naturaleza del asunto.

Los escritos de demanda y contestación se presentarán por la forma común establecida, para la recepción de causas.

Artículo 515. Término de la admisión de la demanda y la contestación

La demanda será admitida dentro de los cinco días siguientes a su presentación, en la oficina de recepción de causas, dentro de los cuales se correrá traslado a la parte demandada para que conteste dentro del término de diez días, más el término de la distancia, contados a partir de su notificación. En el escrito de contestación se observarán idénticos requisitos que los exigidos para la demanda.



La no contestación de la demanda, no interrumpe el proceso y el juez fallará conforme las pruebas que se practiquen en el proceso. El demandado podrá incorporarse en cualquier momento del proceso, sin retrotraerlo.

Artículo 516. Traslado a las autoridades administrativas

Admitida la demanda el juez dará traslado a la Procuraduría de la Familia y al Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, en los asuntos a su cargo.

Artículo 517. Señalamiento para audiencia inicial

Contestada la demanda o vencido el término de los diez días sin que haya contestación y constatando el juez la debida notificación al demandado, el juez señalará fecha para la audiencia inicial, dentro de los diez días siguientes a la contestación o en su caso a la preclusión del término de la contestación.

Artículo 518. Preparación para la audiencia inicial

El juez con la suficiente antelación deberá conocer el tema controvertido con el fin de aplicar las medidas de ordenación, control y racionalización del litigio, para cuyo efecto elaborará un proyecto del plan del caso que contenga el señalamiento específico de las fechas de audiencias, para su presentación a las partes.

Artículo 519. Única audiencia.

Los asuntos donde no exista litis serán ventilados y resueltos en una única audiencia, la inicial, disponiéndose en la sentencia los actos de seguimiento y control que corresponde ejercer al juez, dada la naturaleza del asunto.

Capítulo IV

Audiencia inicial

Artículo 520. Finalidad de la audiencia inicial

En esta audiencia el juez procederá a interrogar a las partes para delimitar las cuestiones en disputa, fijar los hechos litigiosos para delimitar el campo de las materias que pueden ser conciliadas, o bien invitar a las partes a reajustar sus pretensiones o para que desistan de las pruebas que resulten innecesarias. Se procurará la conciliación o el avenimiento amigable, se subsanarán los defectos, se aceptarán o rechazarán las pruebas y se decidirán las excepciones previas, se decretan las medidas cautelares, se fijan las pensiones provisionales, se determina sobre la fianza e inventario, en los casos de tutela, se provee de tutor cuando sea necesario, y se fijará el día y hora para la audiencia de vista de la causa, que tendrá lugar dentro de los quince días siguientes a la celebración de la audiencia inicial.

Artículo 521. Prórroga de audiencias

Las personas que no pudieren concurrir en la fecha señalada a las audiencias, comunicarán al juez, mediante escrito, la imposibilidad de su asistencia y justificación de su causa, todo lo cual será valorado por el juez competente, quien decidirá si acepta o no la prórroga de la audiencia. De denegarse la prórroga el juez apercibirá a la parte el derecho que le asiste de constituir apoderado o sustituir el poder que tuviere.



Artículo 522. Identificación de los problemas jurídicos y fácticos en los que se centrará el debate probatorio

En el desarrollo de la audiencia inicial el juez, antes de decretar las pruebas identificará los temas objeto de la decisión clasificando los problemas jurídicos, precisando los puntos centrales de controversia y en la dirección del debate probatorio clasificará y ordenará las pruebas, de acuerdo al fin que cada una persiga, de todo lo cual quedará constancia en el Acta que al efecto levante el Secretario.

El llamamiento a audiencia de vista de la causa se hará mediante auto, notificado a las partes, al concluir la audiencia.

Artículo 523. Ausencia del actor en la audiencia inicial

Si el actor o reconviniente no se presentaren a la audiencia inicial, sin causa que a juicio del juez se justifique, se tendrá por desistido del proceso y se le impondrán las costas.

Artículo 524. Designación de especialistas asesores

En el auto que señale fecha para audiencia de vista de la causa se designarán los asesores necesarios para cumplir con los fines probatorios determinados en el plan del caso, su designación dentro de los especialistas que integran el Consejo Técnico Asesor, previa verificación de su disposición para practicar la prueba y presentarla en la audiencia.

Capítulo V

Audiencia de vista de la causa

Artículo 525. Finalidad de la audiencia de vista de la causa

La audiencia de vista de la causa constituye un acto en que todos los sujetos intervinientes en el proceso informan y prueban de manera personal, oral y directa sobre los hechos objetos del debate.

Artículo 526. Etapas iniciales en la vista de la causa

En el día, lugar y hora señalados el juez y las partes se constituirán para la celebración de la audiencia, verificando la presencia de todos los sujetos intervinientes llamados.

Luego que el juez tome la promesa de ley a los que estuvieren llamados a ello, intervendrá fijando los puntos definidos como objeto de debate a partir de lo fijado en la audiencia inicial. Explicará a las partes la importancia y trascendencia de este acto. Alertará a las partes del deber de tolerancia y respeto que debe guardarse en el debate, resaltando los máximos intereses jurídicos a tutelar en el proceso.

Pedirá a las partes que de forma sucinta repasen sus pretensiones, en el orden; primero del demandante; luego, el demandado.

Si quedaren pendientes sin resolver cuestiones incidentales se resolverán en el acto.

Se podrán alegar hechos nuevos, se permitirán las aclaraciones y complementaciones, que sean necesarias y se resolverán excepciones.



El Juez procurará tramitar en la audiencia los asuntos incidentales, respetando los términos de traslado y las oportunidades probatorias otorgadas en el presente Código.

Artículo 527. Clausura anticipada

Si las partes arribaren a acuerdo en esta audiencia, oído el parecer de la Procuraduría de la Familia y del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, el juez puede prescindir de la práctica de pruebas y dictar sentencia en la que se haga constar el acuerdo alcanzado.

Artículo 528. Práctica de pruebas

Luego de las exposiciones en la etapa de inicio, se procederá a la práctica de las pruebas admitidas durante la audiencia inicial, en igual orden en el que intervinieron las partes. Podrán proponerse nuevas pruebas, en cuyo caso el juez decidirá sobre su admisión, poniéndolo en conocimiento de la contraparte, para que pueda ejercer su derecho de oposición.

Artículo 529. Continuación de la audiencia de vista de la causa

Cuando no fuere posible practicar todas las pruebas en única sesión, se señalará la continuación de la audiencia para dentro de los cinco días hábiles posteriores. La continuación se hará en una sesión adicional, sin que pueda producirse la suspensión por causa distinta a fuerza mayor o caso fortuito.

Artículo 530. Objeción

Las partes podrán objetar fundadamente las preguntas que se formulen, así como las decisiones que el juez adopte respecto de ellas. Si la objeción se rechaza, quien la formuló puede pedir que se consigne en acta de la audiencia.

Artículo 531. Alegatos finales

Concluida la práctica de las pruebas el juez concederá la palabra, por el orden con que iniciaron para que realicen los alegatos finales, circunscritos a los hechos en debate y la valoración jurídica de las pruebas practicadas.

Luego concederá la palabra a las autoridades administrativas intervinientes en el proceso.

Para los alegatos finales las partes podrán auxiliarse de notas o apuntes tomados. El juez impedirá divagaciones o repeticiones sin sentido durante los alegatos finales y en caso de manifiesto abuso en el uso de la palabra podrá apercibir a la parte y limitar prudentemente su tiempo. Para esta actuación tomará en cuenta la naturaleza del proceso y el grado de dificultad del tema en litis.

Artículo 532. Deliberación

Concluido los alegatos finales el juez se declara en sesión privada para deliberar y resolver, en un lapso de tiempo prudencial en el que las partes, en local distinto, esperarán el resultado del proceso.

Concluida la deliberación, el juez hará llamar a las partes para notificar la sentencia.

Si la complejidad del asunto lo ameritare, puede el juez citar para una audiencia de lectura de sentencia, a efectuarse dentro del quinto día, contado a partir de la última audiencia, bajo responsabilidad disciplinaria si lo incumpliere.

Artículo 533. Sentencia



La sentencia se pronunciará sobre todos los puntos en debate con precisión y claridad respecto del asunto planteado, los hechos materia de debate, las pruebas y motivaciones que respaldan la sentencia, sin el recuento de la actuación procesal.

La sentencia quedará notificada a las partes con la lectura integral que se hará de ella en la propia audiencia.

En la sentencia, el juez debe apercibir a las partes del derecho que les asiste para interponer recurso de apelación.

Artículo 534. Apelación de la sentencia

Las partes deberán decidir, en el propio acto de la audiencia de vista, si hacen o no uso de su derecho de apelar la sentencia. El juez no podrá oponerse a la admisión del recurso.

Interpuesta la apelación se recogerá en el acta de la sesión. El juez, en el propio acto, la admitirá y con ello se tendrá por notificadas a todas las partes, quienes dentro del término común de cinco días hábiles, deberán presentar los escritos en que sustenten sus intereses, a la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones, con copias para todos intervinientes. El juez a quo, dentro del mismo término, remitirá el expediente íntegro de la causa, con constancia de remisión, so pena de responsabilidad disciplinaria.

Capítulo VI

Audiencia única en apelación

Artículo 535. Señalamiento y objeto de audiencia única

Recibido el expediente y los escritos de las partes, el Tribunal de Apelaciones citará para audiencia, a celebrarse dentro de los quince días a la recepción del expediente y escritos.

Será objeto de esta audiencia, escuchar los alegatos de las partes, extraordinariamente se puede disponer la práctica de alguna prueba para mejor proveer, deliberar, dictar sentencia y notificar en el acto a las partes. El Tribunal de Apelaciones deberá agotar las fases del proceso verbal en una única sesión.

Cuando esto no fuere posible, por la naturaleza de los temas en debate, de manera excepcional el Tribunal podrá señalar la continuación de la audiencia en otra sesión, a celebrarse dentro de los cinco días posteriores.

Artículo 536. Reglas para la audiencia única

Para el desarrollo de esta audiencia, se observarán las disposiciones previstas para la audiencia de vista de la causa.

El Tribunal de Apelaciones advertirá a las partes que en sus alegatos se circunscriban a las violaciones de normas jurídicas, que considere se han producido en la sentencia impugnada y a la valoración jurídica de las nuevas pruebas que se hubieren practicado.

Artículo 537. Sentencia del Tribunal de Apelaciones

Concluida las alegaciones de apelación, el Tribunal de Apelaciones se retira a deliberar. Posterior a la deliberación, notificarán la sentencia a las partes, de forma oral.



Si la complejidad del asunto lo ameritare, podrá el tribunal citar para una audiencia de lectura de sentencia, a efectuarse dentro del quinto día, contado a partir de la última audiencia, bajo responsabilidad disciplinaria si lo incumpliere.

Artículo 538. Remisión del expediente

Concluido el proceso el juez ad quem, remitirá el expediente y su sentencia al juzgado a quo, para su archivo, con señalamiento, si lo hubiere de las omisiones observadas y recomendaciones del caso.

LEY N° 143

LEY DE ALIMENTOS

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial N° 57 de 24 de Marzo de 1992

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

Hace saber al pueblo nicaragüense que:

**LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE
NICARAGUA**

En uso de sus facultades,

Ha dictado

La siguiente:

LEY DE ALIMENTOS

Capítulo I

Disposiciones Generales

Arto. 1.- La presente Ley regula el derecho de recibir alimentos y la obligación de darlos.

El deber de dar alimentos y el derecho de recibirlos, se funda en la familia y en forma subsidiaria, en la unión de hecho estable que tenga las características que se regularán en esta ley, para efectos de la obligación alimentaria.

Arto. 2.- Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para satisfacer las necesidades siguientes:

a.- Alimentarias propiamente dichas.

b.- De atención médica y medicamentos. Esto comprende la asistencia de rehabilitación y de educación especial, cuando se trate de personas con severas discapacidades, independientemente de su edad y según la posibilidad económica del dador de alimentos.

c.- De vestuario y habilitación.

ch.- De educación e instrucción y aprendizaje de una profesión u oficio.

d.- Culturales y de recreación.

Arto. 3.- A la alimentación de la familia deberán contribuir todos los miembros mayores hábiles unos en dinero y otros en trabajo del hogar de acuerdo a sus posibilidades.

Arto. 4.- Los alimentos se fijarán o variarán en relación con las posibilidades y recursos económicos de quien los debe y las necesidades de quien lo recibe.

Para fijar la pensión se tomaran en cuenta:

a.- El capital o los ingresos económicos del alimentante.



b.- Su último salario mensual y global ganado. Si el alimentante renunciare a su trabajo para no cumplir con su obligación, el último salario mensual será la base para fijar la pensión.

c.- Si el alimentante trabajare sin salario fijo o no se pudiere determinar sus ingresos, el juez hará inspección en sus bienes y determinará la renta presuntiva.

ch.- La edad y necesidades de los hijos.

d.- La edad y necesidades de otros alimentistas.

e.- Los gastos personales del alimentante, el que en ningún caso podrán evadir las responsabilidades de la pensión.

Arto. 5.- Para efectos de la obligación alimenticia, se considera unión de hecho estable, aquella que cumple con los siguientes requisitos:

a.- Que hayan vivido juntos durante un período de tiempo apreciado por el juez.

b.- Que entre ambos, hayan tenido un trato, consideración social y la armonía conyugal que demuestre al juez, la intención de formar un hogar.

Capítulo II

Sujetos de la Obligación Alimentaria

Arto. 6.- Se deben alimentos en el siguiente orden:

a.- A los hijos.

b.- Al cónyuge.

c.- Al compañero en unión de hecho estable.

Arto. 7.- También se debe alimentar a los ascendientes y descendientes del grado de consanguinidad más cercano cuando se encuentren en estado de desamparo.

Arto. 8.- La obligación de dar alimentos a los hijos y a los nietos cesa cuando los alimentistas alcanzan su mayoría de edad, cuando hayan sido declarados mayores por sentencia judicial, emancipados en escritura pública, por matrimonio, o cuando sean mayores de 18 años, salve en casos de enfermedad o discapacidad que les impida obtener por sí mismos sus medios de subsistencia.

Igualmente subsistirá esta obligación con respecto a los hijos que no hayan concluido sus estudios superiores, si los están realizando de manera provechosa.

Arto. 9.- Cuando se trata del cónyuge en el caso de disolución del vínculo matrimonial por mutuo consentimiento sin llegar a un acuerdo sobre la obligación alimenticia, el Juez en la sentencia de divorcio, establecerá la pensión para el cónyuge que esté imposibilitado para trabajar por motivos de enfermedad o cualquier causa similar, a juicio del Juzgador. Esta obligación cesará cuando el cónyuge favorecido contraiga nuevo matrimonio, establezca una unión de hecho estable o llegare a tener solvencia económica.

Arto. 10.- Los alimentos se deben en la parte en que los bienes y el trabajo del alimentista no alcancen a satisfacer sus propias necesidades.

Si los recursos del alimentante no alcanzaren a satisfacer las necesidades de todos sus acreedores alimentistas, deberá satisfacerlas en el orden del Arto. 6 de la presente ley.

Arto. 11.- Cuando varias personas tengan simultáneamente igual obligación de dar alimentos, el Juez podrá mandar a pagarlos a cualquiera de ellos, y el que pague podrá reclamar a sus obligados la parte que le corresponde.



Arto. 12.- Cuando un obligado cumpliera con la obligación alimenticia de quiénes estuvieren obligados antes que él tendrá derecho a reclamar el total de lo que pagó.

Capítulo III

Características y Cumplimiento de la Obligación Alimenticia

Arto. 13.- El derecho de alimentos es imprescriptible, irrenunciable e intransferible. Los alimentos son inembargables. No son compensables con ningún tipo de deuda, tendrán un derecho privilegiado y prioridad sobre cualquier otra obligación del alimentante.

Se podrán reclamar pensiones alimenticias atrasadas por un período de doce meses. Todo sujeto a las condiciones establecidas en el Arto. 8 de la presente ley.

Arto. 14.- Las pensiones alimenticias se pagarán mensual o quincenalmente.

En el caso de los asalariados las pensiones se pagarán según la forma de pago del salario.

El empleador está obligado a deducir la pensión fijada por el Juez bajo pena de cancelarla personalmente si no la dedujere. En todo caso la pensión alimenticia deberá pagarse en el plazo de tres días después de recibida la remuneración.

Las pensiones alimenticias podrá complementarse con especies de acuerdo a las circunstancias del obligado debidamente valoradas por el Juez.

Arto. 15.- El crédito alimenticio podrá afectar cualquier ingreso que perciba el alimentante; el atraso en el pago de las pensiones alimenticias sin justa causa, será penado con el pago de un 5% por cada mes de retraso. El juez resolverá que se pague o no, en base a la equidad.

Capítulo IV

Paternidad y Maternidad Responsable

Arto. 16.- Se entiende por maternidad y paternidad responsable, el mantenimiento del hogar, la formación integral de los hijos mediante el esfuerzo común, con iguales derechos y responsabilidades.

El Estado promueve la maternidad y paternidad responsable.

Arto. 17.- Para efectos del Arto. 255 del Código Penal, se entenderá además por omisión deliberada a no prestar alimentos:

- a.- Cuando el obligado abandona el empleo sin causa justificada.
- b.- Cuando oculta sus bienes, los embarga o los traspasa de mala fe con el objeto de evadir sus obligaciones alimenticias.
- c.- En los demás casos en que se comprobare la omisión deliberada, a juicio del juez.

Arto. 18.- Con respecto al padre que no ha reconocido al hijo ni lo quisiera reconocer, la obligación de dar alimentos será exigible cuando la madre, o quien la representare, demostrare cualquiera de las siguientes circunstancias:

- a.- Que en algún tiempo ha proveído a sus subsistencia y educación.
- b.- Que el hijo ha usado constante y públicamente el apellido del presunto padre sin que este haya manifestado oposición tácita o expresa.
- c.- Que el hijo haya sido presentado como tal en las relaciones sociales de la familia.



d.- Que el presunto padre hacía vida marital con la demandante al momento de la concepción del hijo.

e.- Cuando la afirmación de la madre y las pruebas inmunológicas o serológicas solicitadas por autoridad competente presumen fuerte mente la paternidad del hijo.

Capítulo V

Del Juicio de Alimentos

Arto. 19.- Presentada la demanda, el Juez de lo Civil de Distrito competente, la seguirá por los trámites del juicio sumario y fallará en base al sistema probatorio y resolviendo las pensiones con la mayor equidad y tomando en cuenta el juzgador si el demandado tiene otros hijos que mantener conforme prueba documentada. Deberán conocer a prevención de ésta clase de juicio, los Jueces Locales de lo Civil, o los Jueces Locales Únicos, si fuesen profesionales del Derecho debidamente incorporados.

La sentencia que fije los alimentos es sólo apelable en el efecto devolutivo, y lo que se hubiere recibido en razón de ellos no es susceptible de devolución.

Arto. 20.- Mientras se ventila el juicio, el Juez deberá, después de la contestación de la demanda, ordenar que se den alimentos provisionales siempre que estime que hay pruebas suficientes en favor de la pretensión del demandante, fijando el monto de la pensión. De esta determinación no habrá recursos.

Arto. 21.- Cuando la obligación de prestar alimento no fuere manifiesta, se tramitará como incidente de previo y especial pronunciamiento. La excepciones que oponga el demandado se resolverán en la sentencia definitiva.

Las resoluciones que se pronuncien serán apelables en el efecto devolutivo.

Las sentencias producidas en el juicio de alimento no producen efecto de cosa juzgada en relación a la filiación paterna, o materna, debiendo ésta tramitarse en su juicio respectivo.

Arto. 22.- En la demanda de alimentos se deberá pedir que el Juez oficie a las autoridades de Migración, el arraigo del demandado a fin de que no pueda salir del país, mientras no tenga debidamente garantizada la prestación alimenticia.

Arto. 23.- El juicio de alimentos se tramitará en el papel común y las costas correrán a cargo del demandado, siempre que el fallo sea en su contra.

Arto. 24.- La ejecución de la sentencia de alimentos podrá tramitarse contra el alimentante, sus sucesores, o sus representantes, siempre que la obligación sea actualmente exigible.

Arto. 25.- La sentencia que ordene la prestación de alimentos o que los haya fijado, en su caso, podrá revocarse o reformarse cuando cambien las circunstancias de quien los da y de quien los recibe. En caso de solicitarse la revocación o reforma de que habla el párrafo anterior también se procederá en juicio sumario.

Capítulo VI

Extinción de la Obligación

Arto. 26.- La obligación de dar los alimentos se extingue.

a.- Por muerte del alimentante que no dejare bienes para satisfacerla.

b.- Por muerte del alimentista.



Arto. 27.- La obligación de dar alimentos cesa:

- a.- Cuando aquel que los proporciona se ve en la imposibilidad de continuar prestándolos o cuando termina la necesidad del que los recibía.
- b.- En el caso de injuria, falta o daños graves del alimentario contra el deudor de alimentos.
- c.- Cuando la necesidad de los alimentos resulta de la conducta reprensible del que los solicita o recibe.

Capítulo VII

Disposición Derogatoria y Vigencia

Arto. 28.- La presente Ley deroga el Capítulo Único del Título IV del Libro Código civil (Artos. 283 al 297) y los Artos. 1586 al 1589 del Código de Procedimiento Civil "Del Juicio de Alimentos" y cualquier otra disposición que se le oponga.

Arto. 29.- Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional a los veintidós días del mes de Enero de mil novecientos noventa y dos. Alfredo César Aguirre, Presidente de la Asamblea Nacional. Fernando Zelaya Rojas, Secretario Asamblea Nacional.

Por tanto: Publíquese y Ejecútese. Managua, dieciocho de Febrero de mil novecientos noventa y dos. Violeta Barrios de Chamorro, Presidente de la República de Nicaragua.

CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE EXHORTOS O CARTAS ROGATORIAS.



Los Gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, deseosos de concertar una Convención sobre exhortos o cartas rogatorias, han acordado lo siguiente:

I. USO DE EXPRESIONES

Artículo 1

Para los efectos de esta Convención las expresiones "exhortos" o "cartas rogatorias" se utilizan como sinónimos en el texto español. Las expresiones "commissions rogatoires", "letters rogatory" y "cartas rogatorias", empleadas en los textos francés, inglés y portugués, respectivamente, comprenden tanto los exhortos como las cartas rogatorias.

II. ALCANCE DE LA CONVENCION

Artículo 2

La presente Convención se aplicará a los exhortos o cartas rogatorias expedidos en actuaciones y procesos en materia civil o comercial por los órganos jurisdiccionales de uno de los Estados Partes en esta Convención, y que tengan por objeto:

- a. La realización de actos procesales de mero trámite, tales como notificaciones, citaciones o emplazamientos en el extranjero.
- b. La recepción y obtención de pruebas de informes en el extranjero, salvo reserva expresa al respecto.

Artículo 3

La presente Convención no se aplicará a ningún exhorto o carta rogatoria referente a actos procesales distintos de los mencionados en el Artículo anterior; en especial, no se aplicará a los actos que impliquen ejecución coactiva.

III. TRANSMISION DE EXHORTOS O CARTAS ROGATORIAS

Artículo 4

Los exhortos o cartas rogatorias podrán ser transmitidos al órgano requerido por las propias partes interesadas, por vía judicial, por intermedio de los funcionarios consulares o agentes diplomáticos o por la autoridad central del Estado requiriente o requerido según el caso.

Cada Estado Parte informará a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos acerca de cuál es la autoridad central competente para recibir y distribuir exhortos o cartas rogatorias.

IV. REQUISITOS PARA EL CUMPLIMIENTO

Artículo 5

Los exhortos o cartas rogatorias se cumplirán en los Estados Partes siempre que reúnan los siguientes requisitos:

- a. Que el exhorto o carta rogatoria se encuentre legalizado, salvo lo dispuesto en los Artículos 6 y 7 de esta Convención. Se presumirá que el exhorto o carta rogatoria se halla debidamente legalizado en el Estado requiriente cuando lo hubiere sido por funcionario consular o agente diplomático competente;
- b. Que el exhorto o carta rogatoria y la documentación anexa se encuentren debidamente traducidos al idioma oficial del Estado requerido.

Artículo 6



Cuando los exhortos o cartas rogatorias se transmitan por vía consular o diplomática o por intermedio de la autoridad central será innecesario el requisito de la legalización.

Artículo 7

Los tribunales de las zonas fronterizas de los Estados Partes podrán dar cumplimiento a los exhortos o cartas rogatorias previstos en esta Convención en forma directa, sin necesidad de legalizaciones.

Artículo 8

Los exhortos o cartas rogatorias deberán ir acompañados de los documentos que se entregarán al citado, notificado o emplazado, y que serán:

- a. Copia autenticada de la demanda y sus anexos, y de los escritos o resoluciones que sirvan de fundamento a la diligencia solicitada;
- b. Información escrita acerca de cual es el órgano jurisdiccional requirente, los términos de que dispusiere la persona afectada para actuar, y las advertencias que le hiciere dicho órgano sobre las consecuencias que entrañaría su inactividad;
- c. En su caso, información acerca de la existencia y domicilio de la defensoría de oficio o de sociedades de auxilio legal competentes en el Estado requirente.

Artículo 9

El cumplimiento de exhortos o cartas rogatorias no implicará en definitiva el reconocimiento de la competencia del órgano jurisdiccional requirente ni el compromiso de reconocer la validez o de proceder a la ejecución de la sentencia que dictare.

V. TRAMITACION

Artículo 10

Los exhortos o cartas rogatorias se tramitan de acuerdo con las leyes y normas procesales del Estado requerido.

A solicitud del órgano jurisdiccional requirente podrá otorgarse al exhorto o carta rogatoria una tramitación especial, o aceptarse la observancia de formalidades adicionales en la práctica de la diligencia solicitada, siempre que ello no fuera contrario a la legislación del Estado requerido.

Artículo 11

El órgano jurisdiccional requerido tendrá competencia para conocer de las cuestiones que se susciten con motivo del cumplimiento de la diligencia solicitada.

Si el órgano jurisdiccional requerido se declarare incompetente para proceder a la tramitación del exhorto o carta rogatoria, transmitirá de oficio los documentos y antecedentes del caso a la autoridad judicial competente de su Estado.

Artículo 12

En el trámite y cumplimiento de exhortos o cartas rogatorias las costas y demás gastos correrán por cuenta de los interesados.

Será facultativo del Estado requerido dar trámite al exhorto o carta rogatoria que carezca de indicación acerca del interesado que resultare responsable de los gastos y costas cuando se causaren. En los exhortos o cartas rogatorias o con ocasión de su trámite podrá indicarse la identidad del apoderado del interesado para los fines regales.

El beneficio de pobreza se regulará por las leyes del Estado requerido.

**Artículo 13**

Los funcionarios consulares o agentes diplomáticos de los Estados Partes en esta Convención podrán dar cumplimiento a las diligencias indicadas en el Artículo 2 en el Estado en donde se encuentren acreditados siempre que ello no se oponga a las leyes del mismo. En la ejecución de tales diligencias no podrán emplear medios que impliquen coerción.

VI. DISPOSICIONES GENERALES**Artículo 14**

Los Estados Partes que pertenezcan a sistemas de integración económica podrán acordar directamente entre sí procedimientos y trámites particulares mas expeditos que los previstos en esta Convención. Estos acuerdos podrán ser extendidos a terceros Estados en la forma que resolvieren las partes.

Artículo 15

Esta Convención no restringirá las disposiciones de convenciones que en materia de exhortos o cartas rogatorias hubieran sido suscritas o que se suscribieren en el futuro en forma bilateral o multilateral por los Estados Partes, o las prácticas más favorables que dichos Estados pudieran observar en la materia.

Artículo 16

Los Estados Partes en esta Convención podrán declarar que extiendan las normas de la misma a la tramitación de exhortos o cartas rogatorias que se refieran a materia criminal, laboral, contencioso-administrativa, juicios arbitrales u otras materias objeto de jurisdicción especial. Tales declaraciones se comunicarán a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 17

El Estado requerido podrá rehusar el cumplimiento de un exhorto o carta rogatoria cuando sea manifiestamente contrario al orden público.

Artículo 18

Los Estados Partes informaran a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos acerca de los requisitos exigidos por sus leyes para la legalización y para la traducción de exhortos o cartas rogatorias.

VII. DISPOSICIONES FINALES**Artículo 19**

La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 20

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 21

La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier otro Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.



Artículo 22

La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación.

Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.

Artículo 23

Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en las que rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la presente Convención, podrán declarar, en el momento de la firma, ratificación o adhesión, que la Convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente a una o más de ellas.

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulteriores, que especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que se aplicará la presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se transmitirán a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y surtirán efecto treinta días después de recibidas.

Artículo 24

La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes.

Artículo 25

El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Dicha Secretaría notificará a los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos y a los Estados que se hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiere. También les transmitirá la información a que se refieren el párrafo segundo del Artículo 4 y el Artículo 18, así como las declaraciones previstas en los Artículos 16 y 23 de la presente Convención.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, firman la presente Convención.

HECHA EN LA CIUDAD DE PANAMA, República de Panamá, el día treinta de enero de mil novecientos setenta y cinco.

**Ejemplo No: 1****DEMANDA**

SEÑOR JUEZ _____ DISTRITO DE FAMILIA DE LA CIRCUNSCRIPCION MANAGUA, Soy, JOSE DANILO JARQUIN SUAREZ, mayor de edad, casado, Licenciado en Derecho, de este domicilio e identificado con cedula de identidad número: 001- 210685-0037K, carne de la CSJ 25132, ante Usted con el debido respeto comparezco, expongo y pido.

LEGITIMACIÓN PROCESAL

Actúo en nombre y representación de mi mandante señora GLENDA VANESSA ORTEGA RUIZ, mediante Escritura Publica numero Dieciocho (18) denominada Poder General Judicial, otorgado bajo los oficios notariales de la Licenciada MASSIEL REBECCA ZELAYA ORTIZ, en la ciudad de Managua, a las nueve y cincuenta minutos de la mañana del día primero de Septiembre del año dos mil trece, la que adjunto a la presente en original y fotocopia, para que una vez que sea cotejado mes sea regresada la original.

RELACIÓN DE HECHOS

Resulta señor juez que durante la relación que mi mandante sostuvo de hecho estable con el señor DAVID ANTONIO QUINTANILLA DAVILA, procreamos tres hijos lo cual se encuentran debidamente inscrito ante el Registro del Estado Civil de las Personas de Managua, la que demuestro con certificados de Nacimientos: LA PRIMERA:, ALISON NICOLE QUINTANILLA ORTEGA de Seis años de edad (6 años), numero de Certificado: 0246223, numero partida: 431, Tomo: I-1433, Folio: 431, Libro de Nacimiento Ext. Lugar de Nacimiento: Guatemala, Fecha de Nac: Uno de Enero del Dos Mil Siete e inscrito Ocho de Enero del Dos Mil Diez. LA SEGUNDA: GENESIS VALENTINA QUINTANILLA ORTEGA, de cuatro años de edad, (4 años) numero de Certificado: 0246224, numero partida: 209, Tomo:XLII-1424, Folio: 209, Libro de Nacimiento año 2009 , e inscrito Veinte de Noviembre del Dos Mil Nueve, fecha de nacimiento: Veintinueve de Septiembre del año Dos Mil Nueve, Municipio: Managua, EL TERCERO: JOEL OMAR QUINTANILLA ORTEGA, de Dos años de edad, (2 años) numero de Certificado: 0246225, numero partida: 119, Tomo: XXVII-1506, Folio: 119, Libro de Nacimiento año 2011, e inscrito el día Siete de Julio del año Dos Mil Once, fecha de nacimiento: Veintiséis de Abril del Dos Mil Once, Municipio: Managua.

ANTECEDENTES

Resulta señor Juez que mi mandante tiene aproximadamente dos años y tres meses de separada del señor: DAVID ANTONIO QUINTANILLA DAVILA, tiempo que el señor QUINTANILLA DAVILA, no ha asumido con la responsabilidad de Padre, para la alimentación de su menores hijos, Responsabilidad que he asumido, tanto en la Alimentación, Vestuario, salud y recreación, desde hace dos



años y tres meses, el señor: QUINTANILLA DAVILA, no ha brindado esa ayuda aduciendo problemas económicos, actualmente el señor QUINTANILLA DAVILA, trabaja como Gerente de una Franquicia extranjera de nombre "CELMASA" ubicado en nuestro vecino país de Costa Rica, exactamente en la siguiente dirección: De la pantalla 100 Mtrs al norte, o del banco de Costa Rica (BCR) 80 Mtrs al sur, a Mano derecha, San José Costa Rica, teniendo un ingreso aproximado de OCHO MIL DOLARES NETOS MENSUALES (U\$ 8,000.00).

FUNDAMENTO LEGAL Y DEMANDA

De conformidad a lo establecido en la Ley 143, Ley de Alimentos, vengo ante su autoridad a demandar como en efecto demando al señor DAVID ANTONIO QUINTANILLA DAVILA, padre de mis tres hijos, quien es mayor de edad, soltero, comerciante y de este domicilio, en la Vía Sumaria con Acción de Prestación de Alimentos.

PEDIMENTO

- 1.- Pido que mediante auto su autoridad me brinde la debida Intervención de ley que en derecho me corresponde.
- 2.- que mediante EXHORTO, su digna autoridad, emplace al señor DAVID ANTONIO QUINTANILLA DAVILA, al centro de trabajo de nombre "CELMASA" ubicado en nuestro vecino país de Costa Rica, exactamente en la siguiente dirección: De la pantalla 100 Mtrs al norte, o del Banco de Costa Rica (BCR) 80 Mtrs al sur, a Mano derecha, San José Costa Rica.
- 3.- Que mediante sentencia su autoridad se pronuncie a favor de los menores ALISON NICOLE, GENESIS VALENTINA, JOEL OMAR, todos de apellidos QUINTANILLA DAVILA, con un año de pensión alimenticia retroactiva, esto de conformidad a los artículos 13 y 8 de la Ley 143 "Ley de Alimento" .en base al cuarenta por ciento (50%) al ingreso que devenga actualmente el señor CANALES HERNANDEZ de un aproximado de OCHO MIL DOLARES NETOS MENSUALES (C\$ 8,000.00).
- 4.- De conformidad al art. 20, Ley 143, pido se me otorgue de manera inmediata y como medida precautoria y de protección a mis menores hijos, una Pensión Provisional hasta por la suma de CUATRO MIL CORDOBAS NETOS (C\$4,000.00), que corresponde a un 50 % de los ingresos mensuales del señor: DAVID ANTONIO QUINTANILLA DAVILA.
- 5.- Pido que mediante sentencia se pronuncie con un HA LUGAR, a la demanda de Pensión Alimenticia hasta un 50 % de los ingresos mensuales ordinario y extraordinario del señor: DAVID ANTONIO QUINTANILLA DAVILA.
- 6.- Desde ya pido a su autoridad gire oficio Al MINISTERIO DE LA FAMILIA Y PROCURADURIA DE LA FAMILIA, para que se apersone, ante la presente demanda, ya que en este caso que nos ocupa está de por medio el desarrollo Integral de los menores hijos.
- 7.- Pido de conformidad al Arto. 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Ley "260" que mediante auto Notifique a las partes para la realización del TRAMITE DE MEDIACION.



Adjunto a la presente: 1.- el Certificados de Partidas de Nacimientos de los menores hijos de mi mandante para que una vez cotejada me sean regresadas la original, 2.- Escritura Publica numero Dieciocho (18) Poder General Judicial para que una vez cotejada me sean regresadas

LUGAR PARA NOTIFICAR AL DEMANDADO:

Para notificar al demandado señor DAVID ANTONIO QUINTANILLA DAVILA, señalo la siguiente dirección: De la pantalla 100 Mtrs al norte, o del Banco de Costa Rica (BCR) 80 Mtrs al sur, a Mano derecha, San José Costa Rica.

SEÑALO LUGAR PARA OÍR NOTIFICACIONES:

Del puente desnivel carretera norte, semáforos de la Fanisa 5 cuadras al lago, 2 cuadras arriba y ½ cuadra al lago, Barrio La Primavera, Managua casa de habitación del Licenciado JOSE DANILO JARQUIN SUAREZ.
Managua, diez de Septiembre del año dos mil trece.

**JOSE DANILO JARQUIN SUAREZ
APODERADO GENERAL JUDICIAL**

Ejemplo No: 2

OFICIO DE INGRESO

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
A la Dirección General de Asuntos Jurídicos
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
L.L.L- Abogada- inscrita al T° --- F° --- del CALP y al T° -- F° --- del Colegio Público de Abogados, constituyendo domicilio en calle---- de esta ciudad y en mi carácter de abogada patrocinante en autos "----" conforme facultades previstas en el art. 400 del CPCC, me presento a peticionar vuestra intervención como Autoridad Central a los fines de la remisión de la rogatoria que acompaño a la presente y que tiene como destino la obtención de prueba..... Que dicha rogatoria tiene como fin ser agregada a los autos referidos, de trámite ante el Juzgado.....del Departamento Judicial de La Plata, Provincia de Buenos Aires.- Que al presente exhorto se lo acompaña en original en idioma español, y en su misma versión traducida al idioma del requerido por traductor público matriculado.

Sin otro particular y agradeciendo su deferencia,

Saluda Atte.



Ejemplo No: 3 DE EXHORTO INTERNACIONAL

El Sr. Juez Dr..... a cargo del
Juzgado

.....sito en calle.....
..... de la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, República Argentina

..... Al Sr. Juez de igual rango con
jurisdicción por territorio y por materia en..... SALUDA, EXHORTA Y
HACE SABER

Que por ante este Juzgado tramitan los autos caratulados
".....", en los cuales se ha dispuesto el libramiento de la
presente rogatoria...(observar los recaudos enunciados en el punto
IV).....

Para mayor recaudo se transcribe el auto que ordena el libramiento del
presente.....

.....

...
Dado, firmado y
sellado.....

OFRECIENDO A VS IDÉNTICA RECIPROCIDAD

EJEMPLO No: 4 DE FORMULARIO BÁSICO ANEXO AL PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE EXHORTOS O CARTAS ROGATORIAS FORMULARIO A

EXHORTO o CARTA ROGATORIA(*)

Órgano Jurisdiccional Requirente

Nombre:

Dirección:

Autoridad Central Requirente

Nombre:

Dirección:



Parte solicitante

Nombre:

Dirección:

Expediente

Autoridad Central Requerida

Nombre:

Dirección:

Apoderado del Solicitante

Nombre:

Dirección:

Persona designada para intervenir en el diligenciamiento:

Nombre:

Dirección: ¿Esta persona se hará responsable de las costas y gastos?

SI/ NO/

* En caso contrario, se acompaña cheque por la suma de:

* O se agrega documento que prueba el pago.

(*) Debe elaborarse un original y dos copias de este Formulario; en caso de ser Aplicable el A

(1) debe ser traducido al idioma del Estado requerido y se adjuntarán dos copias.

* Táchese si no corresponde.

La autoridad que suscribe este exhorto o carta rogatoria tiene el honor de transmitir a usted por triplicado los documentos abajo enumerados, conforme al Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias.

* A. Se solicita la pronta notificación a:

.....
.....
.....

La autoridad que suscribe solicita que la notificación se practique en la siguiente forma:

*(1) De acuerdo con el procedimiento especial o formalidades adicionales, que a continuación se describen, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 10 de la mencionada Convención:.

.....
.....
.....

* (2) Mediante notificación personal a la persona a quien se dirige, o al representante legal de la persona jurídica.

* (3) En caso de no encontrarse la persona natural o el representante legal de la persona jurídica que deba ser notificada, se hará la notificación en la forma prevista por la ley del Estado requerido.

* B. Se solicita que se entregue a la autoridad judicial o administrativa que se identifica,
los documentos abajo enumerados:



Autoridad:

.....
.....
.....

* C. Se ruega a la Autoridad Central Requerida devolver a la Autoridad Central Requirente una copia de los documentos adjuntos al presente exhorto o carta rogatoria, abajo enumerados y un certificado de cumplimiento conforme a lo dispuesto en el Formulario C adjunto.

Hecho en....., el día dede 20.....

Firma y sello del Órgano
Jurisdiccional requirente.

Firma y sello de la Autoridad
Central requirente.

Titulo u otra identificación de cada uno de los documentos que deban ser entregados:

.....
.....

(Agregar hojas en caso necesario)

* Táchese si no corresponde

**ANEXO AL PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION
INTERAMERICANA SOBRE EXHORTOS O CARTAS ROGATORIAS
INFORMACIÓN ESENCIAL PARA EL NOTIFICADO (*)
FORMULARIO B**

A:.....

.....

(Nombre y Dirección del notificado)

Por la presente se le comunica que (explicar brevemente lo que se notifica)

.....

.....

A este documento se anexa una copia del exhorto o carta rogatoria que motive la notificación o entrega de estos documentos. Esta copia contiene también



información esencial para usted. Asimismo, se adjuntan copias de la demanda o de la petición con la cual se inició el procedimiento en el que se libró el exhorto o carta rogatoria, de los documentos que se han adjuntado a dicha demanda o petición y de las resoluciones jurisdiccionales que ordenaron el libramiento del exhorto o carta rogatoria.

INFORMACIÓN ADICIONAL

I - PARA EL CASO DE NOTIFICACIÓN

A. El documento que se le entrega consiste en: (original o copia):

.....

B. Las pretensiones o la cuantía del proceso son las siguientes:

.....

C. En esta notificación se le solicita que:.....

.....

D. En caso de citación al demandado, este puede contestar la demanda ante el órgano jurisdiccional indicado en el cuadro 1 del Formulario A (indicar lugar, fecha y hora):

* Usted está citado para comparecer como:

.....

* En caso de solicitarse otra cosa del notificado, sírvase describirla:

.....

.....

En caso de que usted no compareciere, las consecuencias aplicables podrían ser:

.....

F. Se le informa que existe a su disposición la defensoría de oficio, o sociedad de auxilio legal en el lugar del juicio.

Nombre:

Dirección:

Los documentos enumerados en la parte III se le suministran para su mejor conocimiento y defensa.

Completar el original y dos copias de este Formulario en el idioma del Estado requirente y dos copias en el idioma del Estado requerido.

(*) Táchese si no corresponde.

II - PARA EL CASO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL

A:.....

.....

.....

(Nombre y dirección del órgano jurisdiccional)



Se le solicita respetuosamente proporcionar al órgano que suscribe, la siguiente información:

.....
.....

Los documentos enumerados en la Parte III se le suministran para facilitar su respuesta.

(*) Táchese si no corresponde.

III - LISTA DE LOS DOCUMENTOS ANEXOS

.....
.....
.....
.....

(Agregar hojas si fuera necesario)

Hecho en el día de de 20.....

Firma y sello del Órgano
Jurisdiccional requirente.

Firma y sello de la Autoridad
Central requirente.

**• ANEXO AL PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION
INTERAMERICANA SOBRE EXHORTOS O CARTAS ROGATORIAS
FORMULARIO C**

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO (*)

A:.....
.....
.....

(Identificación y dirección del órgano jurisdiccional que libró el exhorto o carta rogatoria) De conformidad con el Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, suscrito en Montevideo el 8 de mayo de 1979, y con el exhorto o carta rogatoria adjunto, la autoridad que suscribe tiene el honor de certificar lo siguiente:

* A. Que un ejemplar de los documentos adjuntos al presente Certificado ha sido notificado o entregado como sigue:



Fecha:

Lugar (dirección):

De conformidad con uno de los siguientes métodos autorizados en la Convención:

* (1) De acuerdo con el procedimiento especial o formalidades adicionales que a continuación se describen, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 10 de la mencionada Convención:

.....
.....
.....

* (2) Mediante notificación personal a la persona a quien se dirige, o al representante legal de una persona jurídica.

* (3) En caso de no haberse encontrado la persona que debió haber sido notificada, se hizo la notificación en la forma prevista por la ley del Estado requerido: (Sírvase describirla):

.....
.....

*B. Que los documentos indicados en el exhorto o carta rogatoria han sido entregados a: (Identidad de la persona)

.....
.....

Relación con el destinatario:

.....
.....(Familiar, comercial u otra).

*C. Que los documentos no han sido notificados o entregados por los siguientes motivos:

.....
.....
.....

*D. De conformidad con el Protocolo, se solicita al interesado que pague el saldo adeudado cuyo detalle se adjunta.

Hecho en....., el día.....de.....de 20.....

Firma y sello de la Autoridad
Central Requerida

Cuando corresponda, adjuntar original o copia de cualquier documento adicional necesario para probar que se ha hecho la notificación o entrega, e identificar el citado documento.

(*) Original y una copia en el idioma del Estado requerido

* Tachese si no corresponde.

